

URUGUAY

MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA

(MGAP)

PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CAMBIO CLIMATICO – DACC-AF

PRESTAMO BANCO MUNDIAL 8099-UY

MANUAL AMBIENTAL Y SOCIAL

Setiembre 2017

INDICE

1. Introducción	
2. Antecedentes	
3. Marco Institucional y Normativo	
4. El proyecto DACC	
5. Aspectos ambientales y sociales del proyecto DACC	
6. Los subproyectos DACC	
6.1 Llamados	
6.2 Ciclo de subproyectos	
7. Salvaguardas Ambientales y Sociales.	
8. Capacitación	
9. Intervenciones del Proyecto y posible impacto ambiental.	
9.1. Componente 1	
9.2. Componente 2	
9.3. Componente 3	
10. Manuales de buenas prácticas / Apéndice	
11. Consulta pública	
12. Anexos	
Anexo 1 Plan de Manejo de Salvaguarda de Manejo de Plagas OP4.09	Pág. 28
Anexo 2 Evaluación Ambiental	Pág. 38
Anexo 3 Evaluación Social	Pág. 53
Anexo 4 Marco de Políticas de Reasentamiento	Pág. 88

1. INTRODUCCIÓN.

El presente Manual tiene como objetivo dejar establecidos los mecanismos que aseguren la implementación ambiental y socialmente sostenible de todas las acciones del proyecto DACC. La información contenida en este documento representa un complemento al Manual del Proyecto (préstamo 8099-UY aprobado el 17/01/2012) y una ampliación del Marco Ambiental y Social publicado por el MGAP y el Banco Mundial en mayo de 2011.

Se ha revisado este manual en mayo del 2014 debido a la activación de la Salvaguarda de Manejo de Plagas OP 4.09, y en setiembre de 2017 en el marco del financiamiento adicional. No se espera financiar ni promocionar el uso de agroquímicos, sin embargo, en el marco de la capacitación sobre gestión de plagas así como con el cumplimiento de un nuevo decreto de ley que hace referencia a los agroquímicos, se vio la necesidad de activarla. En el Anexo 1 del presente documento se incorpora el Plan de Manejo elaborado por el equipo del MGAP conjuntamente con el Banco. El Plan de Manejo de Plagas podrá actualizarse a la medida que el proyecto incorpore otras actividades relacionadas con el Manejo de agroquímicos.

Para ello, se describen el marco normativo a ser aplicado (legislación vigente y salvaguardas del Banco Mundial), los roles y funciones institucionales requeridos y los procedimientos a ser aplicados. Con esto se pretende orientar principalmente a técnicos privados y productores beneficiarios, pero también a funcionarios y consultores del MGAP, sobre los factores a tener en consideración para una correcta integración de los aspectos ambientales y sociales durante la implementación del Proyecto.

Las acciones previstas se plantean a varios niveles:

- a) Los tres componentes del proyecto se regirán atendiendo a las especificaciones ambientales y sociales de la legislación uruguaya y las salvaguardas del BM. En los Componentes 1 y 3 básicamente se desarrollarán herramientas para la toma de decisión y el apoyo a la aplicación de políticas públicas.
- b) En el Componente 2, se establecen los mecanismos por los cuales los proponentes de sub-proyectos prediales conocen y aplican las propuestas técnicas que cumplen con los procedimientos ambientales y sociales establecidos y las reglamentaciones legales existentes.
- c) Una lista restrictiva de actividades no financiables.
- d) Procedimiento para identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales.
- e) Actividades de capacitación dirigidas a técnicos centrales y regionales del MGAP así como a técnicos privados.

2. ANTECEDENTES

El proyecto DACC fue diseñado y estructurado teniendo en consideración la experiencia del MGAP en proyectos de características semejantes, además de las lecciones aprendidas por el Banco Mundial en proyectos de manejo de recursos naturales en otros países de la región y el mundo. Por sus características este enfoque fue aplicado de manera particular para los aspectos ambientales y sociales del proyecto.

El principal antecedente disponible en el MGAP fue el Proyecto de Producción Responsable (PPR) que fue implementado con financiamiento del Banco Mundial entre 2005 y 2012. Este proyecto representa un precursor del DACC respecto de sus objetivos (manejo sustentable de los RRNN) así como de su estrategia de implementación (apoyo financiero directo a productores elegibles), por lo que las experiencias y resultados del PPR han aportado valiosos elementos para definir el marco operacional del DACC.

En términos específicos, los procedimientos técnicos e institucionales adoptados para la implementación del DACC, se sustentan en la extensa experiencia del PPR, a través de la cual se apoyaron más de 5.000 sub-proyectos sin que se registrasen impactos ambientales y/o sociales negativos. Un conjunto de actividades elegibles consistente con el objetivo del proyecto y la estricta aplicación de una extensa lista restrictiva, permitió que la totalidad de los sub-proyectos apoyados por el PPR fueran aprobados e implementados sin la

necesidad de elaborar un EIA y en la gran mayoría no fue necesario implementar medidas de mitigación. Esto se ha mantenido en el tiempo que lleva implementándose las acciones del DACC (2012 – 2017), donde se han involucrado aproximadamente unos 5.300 productores.

3. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

- Existe una fuerte institucionalidad vinculada a temas ambientales con relación estrecha entre el MGAP y MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), el primero, proponente de este Proyecto y el segundo, en el cual radica la competencia ambiental nacional dentro de una de sus direcciones, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
- Dentro del MGAP, existen diferentes Direcciones Generales relacionadas en aspectos ambientales con este Proyecto, de las cuales cabe resaltar a la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN, ex RENARE) que es la responsable de promover el uso y manejo racional de los recursos naturales, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del sector agropecuario y coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica. Ésta ha tenido una activa participación en la implementación del DACC, tanto en la ejecución directa de actividades de fortalecimiento institucional, así como en proveer de soporte técnico, llevando adelante múltiples actividades con sus equipos técnicos y especialmente acompañando a los profesionales que elaboran sub-proyectos (talleres, cursos, salidas de campo, discusión y estudio de casos). La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) coordinará la ejecución del Componente 2 del proyecto. Asimismo, la Dirección General de Servicios Agrícolas define y regula todo lo concerniente a la autorización del uso de agroquímicos a nivel agropecuario y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos define y ejecuta la política pesquera del gobierno. La Dirección General Forestal regula y promueve la actividad del sector.
- Dentro del MVOTMA, las direcciones más relevantes para el Proyecto son la DINAMA y la DINAGUA. La primera es responsable y fiscaliza el cumplimiento de la legislación ambiental, incluyendo la conservación de la biodiversidad, mientras que DINAGUA tiene como cometido asegurar el uso adecuado de los recursos hídricos del país mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas. Es significativo aclarar que DINAGUA es responsable del otorgamiento de permisos de uso del agua.

Marco legal vigente en relación a aspectos ambientales:

1. El marco legal ambiental de la República Oriental del Uruguay es moderno y cubre en gran medida los aspectos medioambientales que se aplicarían en el presente Proyecto. Entre las leyes más relevantes se destacan la 18.610 de Política Nacional de Aguas, por la que se establecen los principios rectores de esta política, la 17.283, ley general de Medio Ambiente, que declara de interés general - de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República - a la protección del Medio Ambiente. Asimismo, la ley 16.466 (Evaluación de Impacto Ambiental) declara de interés general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, así como la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo y en su caso, la recomposición del medio ambiente dañado por actividades humanas. El objetivo principal de la evaluación de impacto ambiental (EIA) es identificar aspectos externos no planificados que puedan alterar positiva o negativamente el patrón de cambios en la condición de los sistemas físicos y biológicos y la determinación de medidas para mitigar los aspectos externos negativos o intensificar los positivos. De acuerdo al marco legal uruguayo, se considera impacto ambiental negativo o nocivo a toda alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas del medio ambiente causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente perjudiquen o dañen: la salud, seguridad o calidad de vida de la población; las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio; y la configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales.

2. En cuanto a suelos y aguas, el Decreto - Ley 15.239 (Preservación de Suelos y Aguas) con su modificativa, ley 18.564 y sus decretos reglamentarios Nº 333/004 (Uso Responsable y Sostenible de los Suelos), que establece los criterios técnicos básicos a aplicar en el manejo y conservación de suelos y aguas y el Decreto Nº 405/008 (Uso Responsable y Sostenible de los Suelos), donde se determinan las prácticas inadecuadas de manejos de suelos y aguas (Art 1º) y la exigencia de presentación de Planes de Uso y Manejo Responsable del Suelo (Plan de Uso) Art. 5º, en el cual deberá exponerse que el sistema de producción proyectado, determine una erosión tolerable, teniendo en cuenta los suelos del predio, la secuencia de cultivos y las prácticas de manejo, delegando a la DGRN del MGAP la coordinación y dirección de actividades para el uso y conservación de los suelos.
3. Las construcciones de obras con fines de riego agrario deben presentar un proyecto de riego según el Art. 2 del decreto reglamentario 404/001 de la ley 16.858 (Ley de riego), registrándose ante el MVOTMA (DINAGUA), además debe presentar el Plan de Uso en la DGRN (Art. 5). Como antecedente cabe mencionar que en la ejecución de proyectos de Agua (Ej. APA) se cumplió correctamente con la presente ley.¹
4. El decreto 349/005 (que reglamenta la ley 16.466 de Medio Ambiente) establece en su artículo 2 una lista de 34 actividades que requieren de una Autorización Ambiental Previa emitida por DINAMA antes del inicio de la fase de implementación. Entre ellas, las más vinculadas con el presente Proyecto son:
 - a) construcción de represas con una capacidad de embalse de más de 2 millones de metros cúbicos o cuyo espejo de agua supere las 100 ha;
 - b) construcción de canales, acueductos, sifones o estaciones de bombeo que se utilicen para riego, cuando conduzcan más de 2 metros cúbicos por segundo;
 - c) instalación de tomas de agua, con capacidad para extraer más de 500 litros por segundo respecto a los cursos de agua superficiales y más de 50 litros por segundo para las tomas de agua subterránea;
 - d) explotaciones hortícolas, frutícolas o vitícolas de más de 100 ha, en un único establecimiento o unidad de producción;
 - e) nuevas plantaciones forestales de más de 100ha en un establecimiento o unidad de producción.
5. También el Uruguay ha ratificado acuerdos internacionales que protegen el ambiente, entre ellos ha aprobado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por la ley 16.517 del 22 de julio de 1994 y el Protocolo de Kyoto de 1997 por la ley 17.279 del 23 de noviembre del 2000. Uruguay ha ratificado el Tratado sobre la Diversidad Biológica (TBD) el 11 de mayo de 1993. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), preparó la Estrategia Nacional para la Biodiversidad durante 1998 y 1999, con asistencia financiera del GEF. Esta estrategia nacional fue publicada y oficialmente presentada al TDB por el MVOTMA el 29 de diciembre de 1999. Estas dos ratificaciones concernientes a cambio climático y biodiversidad se suman a la ratificación de la Convención para la lucha contra la desertificación, siendo el Uruguay uno de los países que ratificó las 3 convenciones de la cumbre de Río 92.
6. En el año 2009, el gobierno de Uruguay creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Vulnerabilidad (decreto 238/009). Uruguay se destaca entre los países con mayor compromiso a la implementación de los mandatos derivados de la Convención Marco, trabajando actualmente en los preparativos de la Cuarta Comunicación Nacional. El sistema Nacional creado es una herramienta innovadora como política de estado que le ha permitido al MGAP definir seis pilares para una estrategia de adaptación del sector agropecuario al CC:

¹ "Procedimiento general de Evaluación de los Proyectos de Agua para la Producción Animal" aprobado por el B.M.

- a) Introducir cambios en el manejo, las tecnologías y la infraestructura: proteger el campo natural y la biodiversidad en general de la degradación; utilizar buenas prácticas en la explotación de los suelos según su capacidad de uso para minimizar riesgos de erosión; aumentar la disponibilidad y eficiencia del uso de agua para los cultivos y el ganado; y promover el riego donde sea técnica y económicamente viable.
- b) Fortalecer las actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.
- c) Desarrollar un sistema de información y soporte para la toma de decisiones que asista en la planificación y en las decisiones en los sectores público y privado.
- d) Desarrollar, implementar y generalizar el uso de seguros agropecuarios que permitan transferir al menos parte de los riesgos climáticos.
- e) Mejorar el ordenamiento territorial y proteger los servicios ecosistémicos, el funcionamiento de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad.
- f) Desarrollar las capacidades institucionales adaptativas y mejorar la coordinación a nivel nacional y local.

El cumplimiento del marco legal existente está siendo vigilado y se realizan acciones de promoción, divulgación y control por un marco institucional amplio.

4. EL PROYECTO DACC

De acuerdo a la relevancia de la temática ambiental y social, el proyecto tendrá un responsable de su cumplimiento bajo la coordinación de la Unidad de Seguimiento & Evaluación de la (Unidad de Gestión de Proyectos – UGP), quien articula con los componentes correspondientes. El responsable del tema de salvaguardas convocará a grupos de trabajo integrados por las unidades ejecutoras competentes para dar seguimiento, respetando especialmente las normas previstas en el decreto 349 del 2005 y las normas del Banco Mundial.

La estrecha relación generada entre el MGAP y MVOTMA, particularmente con la institución de competencia ambiental nacional (DINAMA), asegura que el Proyecto incrementará las sinergias entre ambas instituciones. Durante los últimos 12 años se trabaja articuladamente en todo el país, en equipos técnicos integrados por profesionales de los 2 ministerios y también a nivel central están funcionando con muy buenos resultados distintas comisiones de trabajo. A modo ilustrativo se mencionan 2 casos: Integración de delegado de la UGP-MGAP en el CTN (Comité Técnico Nacional) del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) y a nivel regional departamental evaluación conjunta entre técnicos de MGAP-DACC y MVOTMA-SNAP en los sub-proyectos que los beneficiarios se encuentran en áreas protegidas y/o en zonas buffer a ellas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Uruguay se ha transformado en una herramienta fundamental para conciliar el cuidado del ambiente - en particular de la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies y elementos culturales- con el desarrollo económico y social del país, apostando a generar oportunidades para las comunidades locales y la sociedad en su conjunto a través de la recreación, el turismo, la educación, la investigación y el desarrollo de actividades productivas compatibles con la conservación.

De las catorce áreas que conforman el SNAP se destacan algunas donde el actual proyecto DACC y seguramente el DACC – AF, ha financiado propuestas y que por ende ha sido necesario un alto grado de involucramiento y articulación entre las partes, especialmente Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres) y Humedales de Santa Lucía (Canelones, Montevideo, San José).

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca mantiene mecanismos de coordinación con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que aseguran que en todos los casos que corresponda, se realizarán las consultas pertinentes.

Para la convocatoria de propuestas (subproyectos), las normas para la preparación, el examen y la aprobación de los subproyectos seguirán directrices coherentes con los principios de la política del Banco sobre hábitats naturales en cuanto a criterios de protección y gestión sostenible de los hábitats naturales y las especies en peligro o amenazadas.

COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto DACC tiene como objetivo principal promover el uso racional de los recursos naturales productivos del Uruguay. Este objetivo será cumplido por una serie de acciones combinadas que incluyen por un lado la generación, difusión y transferencia de conocimientos (principalmente a través de instrumentos públicos como bases de datos, inventarios, mapas cartográficos, sistemas de información, etc.) y por otro el apoyo con fortalecimiento de capacidades territoriales y de asistencia técnica y financiamiento parcial no reembolsable a productores elegibles para la implantación de medidas y/o prácticas para mejorar el manejo de suelo, agua y vegetación a nivel predial o multipredial.

Para lograr sus objetivos, el Proyecto implementará una serie de actividades dentro del marco de cuatro componentes, que se describen a continuación.

COMPONENTE 1: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA

El objetivo del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) es generar y sistematizar conocimientos para mejorar la capacidad de identificar, monitorear y cuantificar la variabilidad y el CC y su interacción y efectos sobre los recursos naturales y los sistemas productivos, así como facilitar su difusión y acceso a los diferentes niveles de usuarios.

COMPONENTE 2: MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RRNN PARA EL DESARROLLO RURAL

El objetivo del componente es promover la adopción de medidas de manejo de los recursos naturales que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico y que generen una mayor capacidad de adaptación a fenómenos climáticos extremos en productores familiares y medianos.

El énfasis estará en el apoyo directo a productores agropecuarios tendientes a aumentar la oferta y el manejo sostenible de los recursos hídricos, de los suelos y de la biodiversidad del campo natural a nivel predial, y la consolidación de prácticas de producción sostenibles e integradas con medidas para reducir la vulnerabilidad a la variabilidad climática y el CC.

El financiamiento se realizará mediante sub proyectos con recursos financieros del BM, del Estado y una contrapartida del/los beneficiario/s.

COMPONENTE 3: MODERNIZACIÓN DE LA DGRN

El Componente 3 considera el fortalecimiento de las capacidades. En el contexto de este componente se financiarán actividades destinadas a fortalecer la capacidad de: a) los productores agropecuarios (independientemente del tamaño de su establecimiento) y el personal técnico de los prestadores de servicios de asesoría, para que adopten prácticas de gestión integrada de los recursos naturales e hídricos, y b) el MGAP,

en particular la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), para que aplique sus programas de gestión de los recursos naturales y su estrategia sobre cambio climático en el sector agropecuario.

COMPONENTE 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GERENCIA DEL PROYECTO

El objetivo del componente es fortalecer la capacidad institucional en el MGAP para ejecutar los proyectos con eficiencia, dando apoyo especializado a las unidades ejecutoras, concentrándose en las áreas transversales y comunes a todos los proyectos: Capacitación, Comunicación y Difusión, Planificación, Monitoreo y Evaluación, Administración y Finanzas.

MARCO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La responsabilidad global para la ejecución del proyecto recaerá sobre el MGAP, a través de las Unidades Ejecutoras siguientes:

01-Dirección General de Secretaría (DGS): la Unidad de Gerencia del Proyecto (UGP), Componente 4 y el SNIA, Componente 1.

03-Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), Componente 3

07 -Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), Componente 2

El Proyecto tendrá en la UGP el cometido de asesorar en temáticas multidisciplinarias y específicas que así se determine según las necesidades ministeriales. Difundir los logros vinculados con los cometidos sustantivos del Inciso a través de medios físicos y electrónicos y propiciar la presencia del Ministerio en exposiciones o eventos similares. Asistir a la jerarquía ministerial en acciones de relacionamiento público. En esta misma dirección se encontrará ubicado tanto el SNIA como el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG); este último financiado parcialmente con recursos del Banco Mundial y con una excelente evaluación final.

Por todo lo antes expuesto, se concluye que las cuestiones del Proyecto serán debidamente atendidas y que la toma de decisiones ocurrirá a un alto nivel jerárquico, Dirección General de Secretaría, Sub-Secretario y Ministro.

5. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

En función de su objetivo, el proyecto está orientado a apoyar acciones de efecto positivo para el medio ambiente, que por tanto no deberían requerir acciones de mitigación.

Las acciones de fortalecimiento institucional a ser financiadas por el proyecto en los Componentes 1 y 3 solo generarán instrumentos de conocimiento e información pública y verificación de indicadores de sostenibilidad de suelos, lo que implica que no tendrán posibilidad de generar impactos ambientales negativos o activación de las salvaguardas del Banco Mundial.

Las actividades previstas en el Componente 2 del Proyecto no suponen a priori, de acuerdo a la legislación nacional vigente y en particular a la luz de la última revisión del reglamento (Decreto 349/005) de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental (16.466 del 14 enero 1994), la necesidad de autorizaciones ambientales previas. En caso de proyectos excepcionales que sean calificados por el marco jurídico uruguayo como "B" o "C", se solicitará asesoramiento a la DINAMA/MVOTMA para la tramitación del mismo, de acuerdo al marco jurídico nacional. Como se detalla más adelante, se dejan establecidas las previsiones necesarias para casos improbables de sub-proyectos que requieran de Evaluación de Impacto Ambiental y no existen riesgos de

transformación de hábitats naturales, ni manejos de agroquímicos, ni transformación de bosques. En el caso de que en cualquier obra exista algún hallazgo arqueológico la misma será suspendida y se dará lugar a los especialistas nacionales en la materia.

Los sub-proyectos de riego, sean prediales, multiprediales o asociativos, deberán presentarse ante la DGRN y DINAGUA en las condiciones establecidas por el decreto 404/001.

Los llamados a presentación de sub-proyectos se difundirán ampliamente a efectos de asegurar el acceso equitativo de todos los potenciales beneficiarios elegibles. Se tratará de promover el acceso de las mujeres a las oportunidades y servicios del Proyecto.

Dada las modificaciones en el financiamiento adicional se activan las salvaguardas de reasentamiento, dado que puede afectarse por medio de la interposición de servidumbres de acueducto, apoyo de presa o embalse, parada o partidor, así como electroducto.

Además en el diseño del Proyecto ha sido necesario actualizar la Evaluación Social para reflejar las características de los aspectos sociales frente a las intervenciones apoyadas por el Proyecto, incluyendo las características socioeconómicas y demográficas de los beneficiarios. De tal manera se analizaron cuestiones específicas como tenencia de la tierra y tipos de propiedad de la tierra, así como como expandir los beneficios al mayor número de grupos de productores. La Evaluación Social actualizada se incluye como Anexo 3 del presente Manual Ambiental y Social.

Temas Sociales Destacados en la Evaluación Social

La actualización de la Evaluación Social permite indicar que el Proyecto cuenta con un contexto institucional adecuado para minimizar los riesgos de empobrecimiento que se pudieran derivar de una potencial afectación en términos de reasentamiento. Si bien existen sectores más vulnerables como las mujeres o los asalariados rurales además de los pequeños productores en general, existen también mecanismos impulsados por los distintos organismos que permiten contar con las herramientas para minimizar ese riesgo a partir de reducir la vulnerabilidad y/o mitigar los impactos en caso de que efectivamente se produjeran. A su vez la disponibilidad de espacios de participación en el ámbito de funcionamiento del proyecto (las mesas de desarrollo rural impulsadas por la unidad de descentralización del MGAP) y la presencia de técnicos que tienen relación con los productores en el ámbito local permite sostener que, en caso de producirse conflictos o problemas derivados de una potencial afectación y que no hubieran sido previstos en los planes de reasentamiento, estos podrán ser identificados a tiempo para buscar una solución y posteriormente hacer un seguimiento de la situación.

Especialmente en el caso de las mujeres, tanto el Instituto Nacional de Colonización (INC) a través de sus políticas de cotitularidad y procedimientos de relocalización orientados al mantenimiento de la actividad familiar, como el MGAP a través de la puntuación de sus proyectos (más allá de que en el caso de las unidades de agricultura familiar, se considere a la mujer como beneficiaria, también en la evaluación se asignan más puntos a las propuestas que integran mujeres en el equipo) existen políticas tendientes a reducir el riesgo. Nuevamente, si bien la situación en sí se mantiene, el contexto institucional puede contribuir a reducir el riesgo por ejemplo, en el caso de productoras colonas, porque se accede más fácilmente a una indemnización por mejoras si se es cotitular de un predio.

Otro factor identificado es el bajo nivel de educación que, entre otras cosas, contribuye a la vulnerabilidad frente a la afectación de la vivienda, el predio o la actividad productiva. En este sentido, el marco asociativo contribuye doblemente. Por un lado, tanto las Organizaciones como las Mesas de Desarrollo Rural, en sí

constituyen espacios de desarrollo. Por otro lado, el Proyecto mismo incluye actividades de fortalecimiento a través de la promoción de actividades asociativas, así como otro tipo de capacitaciones. Estas capacitaciones si bien son puntuales y no solucionan las dificultades de cada uno de los individuos, ofrecen herramientas que serán útiles en caso de tener que proteger los propios derechos en el marco de una potencial afectación.

Implicancias para el análisis de alternativas y los esquemas de implementación

En relación con las actividades del proyecto en general se recomienda contemplar evaluar las necesidades de capacitación y acompañamiento en los procesos y potenciar los espacios de participación para las mujeres para favorecer su paulatino acceso a la tierra -como lo impulsado por el INC- y fortalecer su posición ante potenciales afectaciones para evitar que sean vulnerados sus derechos. Lo mismo vale para los sectores de menores recursos y de menor nivel de educación cuya participación en los beneficios del proyecto deberá ser seguida con más detalle para asegurar su inclusión.

Finalmente, en relación con las actividades del componente 2 específicamente, se recomienda considerar especialmente durante la evaluación del sub proyecto, los aspectos reseñados en esta evaluación social a fin de evitar afectaciones cuando fuera posible y, cuando no fuera posible evitarlo, asegurar que las personas recuperen o mejoren el nivel de vida previo a la afectación. Para esto se ha desarrollado un Marco de Políticas de Reasentamiento que contiene los procedimientos a seguir en cada caso de acuerdo a la normativa local vigente y a normativa del Banco. En distintas secciones del marco se hace alusión a la necesidad de prestar atención en caso de que se afectara a población vulnerable y que el MGAP deberá proveer o hacer que se provea al afectado, asistencia y asesoramiento para llevar adelante las acciones requeridas por las normas correspondientes en cada caso sin resultar perjudicado.

En este sentido, si bien los riesgos existen, tanto la etapa de evaluación de alternativas como los instrumentos de gestión disponibles y los espacios de participación existentes permiten pensar que está asegurado evitar impactos sobre la población debido a reasentamiento producido por acciones del Proyecto.

En lo relativo a las Salvaguardas Sociales, basados en la experiencia de las asociaciones para uso del agua, el Financiamiento Adicional podrá incluir actividades que potencialmente impliquen la construcción o expansión de reservorios, implantación de nuevas líneas eléctricas para proveer de energía a los sistemas de irrigación, instalación de infraestructura de distribución de agua, y otros trabajos vinculados a los sistemas multi prediales. De esta manera se ha determinado que se aplica la Salvaguarda OP 4.12 de Reasentamiento Involuntario. Para dar cumplimiento a los requerimientos de la misma, se ha elaborado un Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR), que es parte del presente Manual Ambiental y Social, y se presenta como Anexo 4 del mismo.

El MPR es la base para la preparación, implementación, monitoreo y evaluación de los Planes de Reasentamiento que deban elaborarse para los sub proyectos todavía no identificados. Tiene como propósito garantizar que, una vez agotadas las posibilidades de evitar o reducir el reasentamiento involuntario, 2 las personas que deban relocarse o que pierdan terrenos u otros activos económicos sean apoyadas durante su relocalización, compensadas adecuadamente por sus pérdidas, y apoyadas en sus esfuerzos por mejorar

² A los efectos de este Marco, "involuntario" se refiere a las acciones que se pueden realizar sin el consentimiento informado de la persona desplazada o sin su poder de elección.

sus niveles de vida o al menos mantener los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto³.

El MPR se basa en la legislación uruguaya, en las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el gobierno uruguayo, así como en los principios de la política de reasentamiento involuntario OP 4.12 del Banco Mundial. El MPR se aplicará a todas las actividades del Proyecto que causen Reasentamiento. El término Reasentamiento se define con base al alcance de la OP 4.12 del Banco Mundial abarcando los efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos de inversión financiados por el Banco y causados por a) la privación involuntaria de tierras, que da por resultado i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas. Se aplica asimismo a las demás actividades que resulten en reasentamiento involuntario y que, a juicio del Banco: a) tengan relación directa y considerable con el proyecto financiado por el Banco; b) sean necesarias para lograr los objetivos enunciados en los documentos del proyecto, y c) se lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse a cabo, simultáneamente con el proyecto. Hay que tener en cuenta que la salvaguarda no se puede desmembrar, se activa en su totalidad, por lo que aun cuando el AF del Proyecto DACC no considerará elegibles los proyectos que requieran expropiación de tierras, tanto en el marco normativo como en las medidas de mitigación es necesario incorporar las normas generales que refieren a la expropiación.

Por otra parte, en lo relativo a la Salvaguarda OP 4.10 de Pueblos Indígenas, con base a una Evaluación preliminar realizada por el equipo del Banco Mundial, durante la preparación del Proyecto REDD, es dable indicar que existe un debate en la actualidad en Uruguay vinculado a organizaciones de pueblos indígenas que se encuentran en proceso de autodeterminación. También en forma preliminar, se ha observado una relación entre estas organizaciones y las actividades REDD vinculadas principalmente a expectativas de recuperación de áreas a proteger en Montes del Queguay y Colonia Siri, así como de grupos organizados en Tacuarembó, Soriano, Paso de los Toros y Tarariras, relacionados con acciones de concientización y educación ambiental. Con respecto a la posibilidad de interacción de estos grupos con el Proyecto, el MAGP determinó que no existen grupos indígenas en las áreas de intervención del DACC-AF, por lo que no se activará la Salvaguarda OP 4.10.

6. SUBPROYECTOS DACC

Independientemente del objetivo ambiental positivo del proyecto, la experiencia previa indica que la principal actividad del proyecto, los sub proyectos a ser financiados por el Componente 2, podrían generar impactos negativos directos o indirectos si no existiera un marco de procedimientos para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la prevención de efectos negativos involuntarios o indeseados.

³ El MGAP determina que no serán elegibles actividades que impliquen la relocalización de personas ni la adquisición involuntaria de terrenos.

Con el fin de asegurar la ejecución de todos los sub proyectos en el marco ambiental y social requerido, la implementación de este componente estará definida por los siguientes parámetros y procedimientos generales:

- Los sub proyectos serán por demanda, postulados por productores elegibles (según criterios definidos en el Manual Operativo) en el contexto de “llamados” (convocatorias) específicos, efectuados periódicamente por el MGAP
- Montos predeterminados (máximo US\$ 16.000 por sub proyecto predial, tomando como ejemplo el caso de los sub proyectos para calidad de agua en la cuenca del Río Santa Lucía). Para otras convocatorias el monto podrá ser menor para lo cual se medirá el grado y tipo de vulnerabilidad y US\$ 50.000 para Estrategias Asociativas con focalización de apoyo en inversiones y prácticas de manejo puntuales. El monto de US\$ 50.000 se eleva a US\$ 500.000 en el caso de las Estrategias Asociativas de Agua para la Producción (EAAP)
- Diseño de propuestas por parte de los beneficiarios con apoyo técnico de profesionales habilitados por el MGAP y capacitados por el proyecto en temas técnicos y operacionales
- Ciclo de Sub proyectos (detallado en Manuales Operativo y de Campo) que incluye la clasificación y la lista de chequeo ambiental y social de cada sub proyecto
- Esquema de análisis y evaluación secuencial (regional y central) con participación de técnicos de la UGP y especialistas en conservación de los recursos naturales, aspectos ambientales y sociales de DGRN. En casos especiales en consulta con DINAMA y DINAGUA.
- Utilización de una lista restrictiva que establece *a priori* las actividades que no serán elegibles de financiamiento, excluyendo de esta manera la gran mayoría de potenciales efectos ambientales negativos, directa o indirectamente asociados con los sub proyectos.
- Con respecto a la posibilidad de interacción de estos grupos con el Proyecto, el MGAP determinó que no existen grupos indígenas en las áreas de intervención del DACC-AF.
En consonancia con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Proyecto no genera interferencia ni coexistencia con comunidades indígenas y siempre apoyará sub proyectos presentados por la demanda asegurando la transparencia.

Asimismo, dado que únicamente se van a ejecutar los proyectos en inmuebles donde los productores o las organizaciones mantengan un vínculo jurídico, y considerando que de acuerdo a lo que se explicitará en las formas de tenencia de la tierra el catastro nacional se encuentra totalmente ordenado, no existiendo inmuebles donde no se pueda establecer correctamente la procedencia, no se corren riesgos de que a través del proyecto se actúe en padrones que sean objeto de reclamación de una comunidad indígena.

6.1. LLAMADOS (CONVOCATORIAS)

Como característica general, todas las convocatorias a presentación de sub proyectos del DACC serán realizados en forma abierta, con amplia divulgación en todos los medios. Está previsto que se realicen por sistema productivo (ej. lecheros, ganaderos, intensivos) o con base regional y con énfasis en temas de recursos naturales a abordar (agua, suelos, campo natural).

En cada uno de ellos se contará con el correspondiente Manual de Campo (MC), Formulario de presentación, Habilitación y Capacitación a las organizaciones y técnicos formuladores.

- En el MC de cada llamado quedarán especificadas las condiciones que deben cumplir los sub proyectos para ser considerados, el listado de actividades que no serán financiadas y los procedimientos a seguir en casos excepcionales que se presenten.
- En el formulario de presentación del sub proyecto se incluirá la lista restrictiva del Proyecto y un formulario de verificación del cumplimiento de no afectación al medio ambiente por su ejecución.

Éste será incluido en los contratos firmados por el técnico formulador y el productor beneficiario y validado a campo por el equipo técnico del MGAP.

- En las habilitaciones y capacitaciones a los técnicos, se incluirá un módulo específico acerca de las prácticas e inversiones posibles de realizar sin afectación del medio ambiente y también el análisis de posibles impactos ambientales a generar como consecuencia de la ejecución del sub proyecto y las medidas a llevar adelante para levantar las restricciones. Los técnicos también serán capacitados en la aplicación de los tres instrumentos para determinar elegibilidad (Lista Restrictiva, Normatividad y Salvaguardas) y los procedimientos a seguir en cada caso.

6.2. CICLO DE SUBPROYECTOS

Los sub proyectos recibidos por el MGAP de parte de técnicos privados podrán tener diferente consideración de acuerdo al posible impacto ambiental. La mayoría de los mismos no afectarán negativamente el ambiente, cumpliendo con las exigencias establecidas en el MC, por lo que serán evaluados, validados a campo y aprobados.

Con respecto a los sub proyectos excepcionales, que pudieran ocasionar impacto ambiental negativo se diferencian 4 situaciones:

- a) Con **impacto menor**, se solicitará una reformulación que corrija las observaciones detectadas o un plan de mitigación que neutralice los efectos ambientales posibles, todo lo cual será presentado nuevamente al Comité de Evaluación.
- b) Con **incumplimientos a la Lista Restrictiva del DACC**. En aquellos casos que el Comité de Evaluación determine que un sub proyecto resulta de interés estratégico y/o presenta incumplimientos menores, se solicitará un plan de mitigación que neutralice los efectos ambientales posibles; presentándose para su consideración a un Tribunal de Evaluación Especial constituido por técnicos de la UGP, DGDR, DGRN, MVOTMA (DINAMA, DINAGUA), manteniendo informado al Banco Mundial en forma periódica.
- c) Con **posible impacto ambiental negativo de acuerdo a la legislación nacional vigente**, tratándose del sub proyectos de interés estratégico se enviarán al MVOTMA que realizará como establece la Ley 16466, la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previo a su aprobación.
- d) Con propuestas que **activen las salvaguardas establecidas por el BM**, en este caso se hará una consulta formal al BM previo a la resolución definitiva.

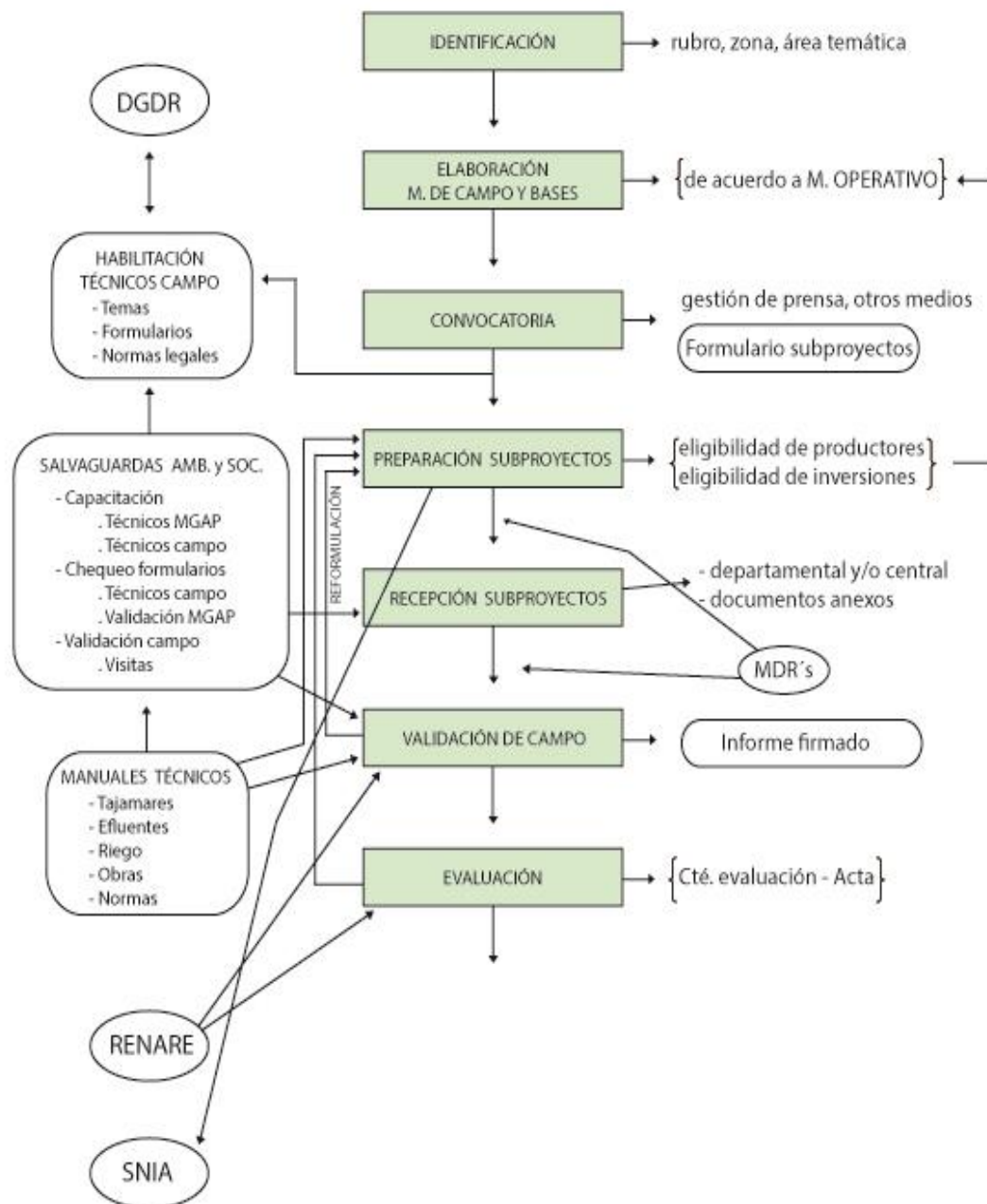
Si hubiese proyectos que incumplan con normas del Banco Mundial los mismos serán comunicados y se instrumentarán los procedimientos correspondientes de exclusión.

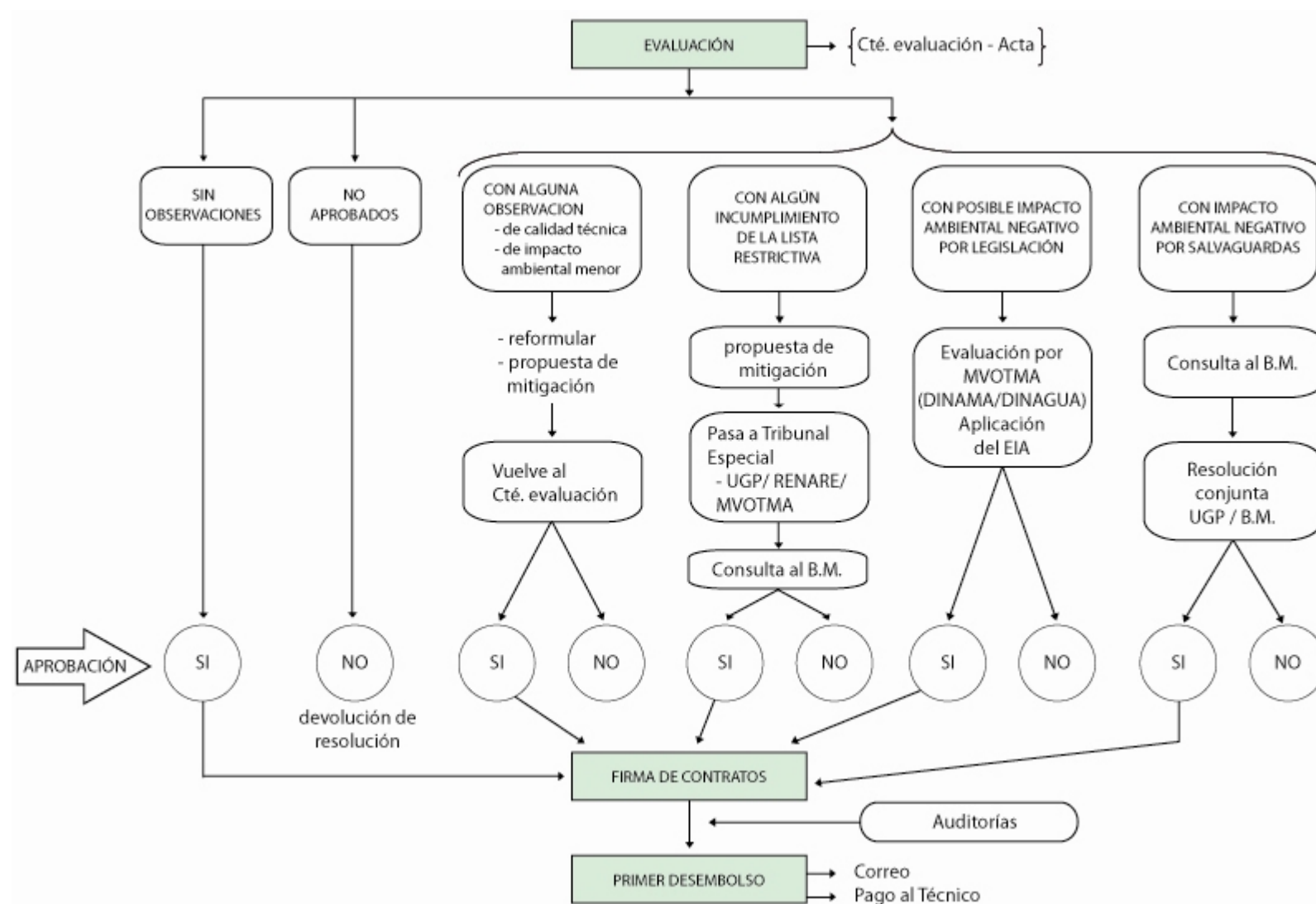
Los sub proyectos prediales prevén recibir financiamiento del DACC para asistencia técnica a su ejecución. En los de tipo: a, b, c, d, que resulten aprobados, tendrán en el contrato de asistencia técnica una consideración especial en cuanto al tipo de dedicación, a fin de que se realice un adecuado seguimiento del plan de mitigación u otras medidas acordadas.

Todos los sub proyectos presentados tendrán una validación a campo por parte de los técnicos territoriales de DGDR y/o DGRN, en donde se constatará la situación de partida y se realizará el seguimiento de la ejecución en forma coordinada con los técnicos de campo. Esta actividad incluirá la verificación del cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales.

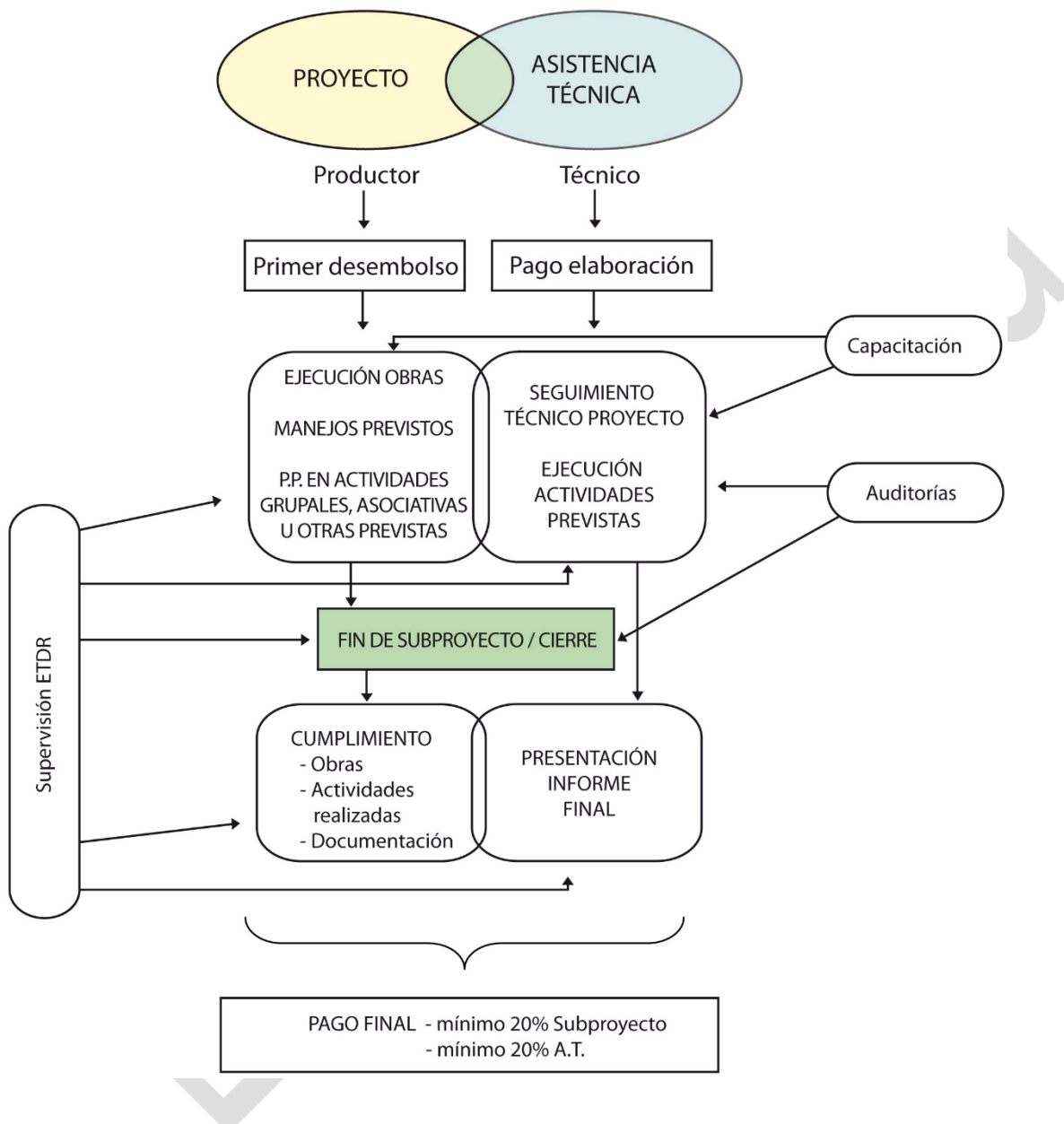
Se presentan a continuación los diagramas de flujo de sub -proyectos desde la identificación de la idea, la elaboración, la presentación, validación a campo, aprobación, ejecución y finalmente el cierre. El diagrama representa los pasos a seguir y se deja establecido el proceso a realizar en cada caso antes de su aprobación.

1ª ETAPA: EVALUACIÓN DE SUBPROYECTO





2ª ETAPA: EJECUCIÓN DE SUBPROYECTO



De acuerdo al flujo presentado, en 4 instancias de la aprobación de un sub proyecto se contemplará la observancia de los aspectos ambientales y sociales, incluyendo el cumplimiento con la lista restrictiva, la normatividad ambiental vigente, y las salvaguardas ambientales y sociales. Estas etapas son:

1. Preparación de sub proyectos por parte del técnico privado
2. Recepción de sub proyectos a nivel departamental y central.
3. Validación a campo

4. Evaluación

Estos aspectos serán atendidos en cada una de las etapas, por técnicos privados y/o del MGAP según corresponda, que ya fueron explicados.

7. SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Manejo de plagas, Hábitats Naturales, Bosques

La aplicación de la lista restrictiva del proyecto, que representa el procedimiento principal para definir la elegibilidad de sub proyectos en este aspecto, contiene el conjunto de criterios y/o actividades no elegibles de financiamiento con recursos del Banco o con aportes de contrapartida. La aplicación de esta lista por parte de los técnicos responsables de la preparación de sub proyectos no permitirá la postulación de sub proyectos que pudieran activar las salvaguardas del Banco Mundial. Estas actividades no serán financiadas por el DACC.

Independientemente de su naturaleza, todos los sub-proyectos propuestos para financiación estarán sujetos al sondeo inicial sobre la base de una **lista restrictiva** y un **formulario de verificación**. La lista restrictiva será utilizada para evitar que se presenten sub-proyectos (o componentes seleccionados dentro de los mismos) que puedan no calificar ya que impliquen actividades con impactos ambientales o sociales potencialmente negativos. La lista completa proviene del Manual de Operaciones y se describe a continuación.

LISTA RESTRICTIVA

- a) En áreas del tratado de Ramsar u otros humedales protegidos del país, no se financiarán actividades que puedan alterar las características ambientales.
- b) En áreas clave para la conservación de la diversidad biológica como Áreas Naturales Protegidas (formalmente incorporadas al SNAP), Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBAs) o Áreas bajo el marco de las iniciativas de UNESCO, y en cualquier otra área que exista información científica sobre su importancia para la biodiversidad; no se financiarán actividades que puedan alterar las características ambientales.
- c) Represamiento de aguas superficiales que inunden bosque nativo.
- d) Represas, altura en el frente del embalse de más de 15 metros de profundidad
- e) Construcción de caminos
- f) Uso de pesticidas o compra de aplicadores de pesticidas
- g) Apoyo a fumigación con pesticidas
- h) Apoyo y adquisición de pesticidas y pulverizadores
- i) Cultivo y mantenimiento de variedades transgénicas
- j) Apoyo a monocultivos de especies forrajeras/herbáceas en áreas prioritarias para la diversidad biológica
- k) Apoyo a actividades de dragado y drenaje en áreas de conservación (no hay lugar al cambio sugerido)
- l) Rectificación y represamiento de cursos de agua en áreas de conservación
- m) Utilización de áreas en desacuerdo con la capacidad de uso del suelo.
- n) Adquisición de tierras
- o) Depósitos de desechos no reciclables y/o tóxicos
- p) Apoyo a desmontes de especies nativas
- q) Comercialización de especies bajo apéndice I de CITES

- r) Patentamiento de especies, bio prospección con fines medicinales, nutricionales u otros.
- s) Sub proyectos que requieran expropiaciones.
- t) Actividades que se desarrollen en áreas con presencia de grupos o pueblos indígenas

1. Los ítems (f), (g) y (h) excluyen el financiamiento para la compra de agroquímicos, adquisición de equipos de pulverización, o la contratación de servicios de aplicación de agroquímicos como parte de un sub proyecto.
2. Sin embargo, se vio la necesidad de activar la salvaguarda de Manejo de Plagas (OP4.09) debido a las actividades de capacitación sobre éstas y el nuevo decreto del Poder Ejecutivo 152/21 de mayo de 2013. En el caso de control de especies invasoras que afecten la biodiversidad y que sea necesario complementar el control mecánico con el uso de defensivos, se elaborará un plan de manejo de plagas siguiendo los lineamientos de las O.P. 4:09 harán consultas con el Banco Mundial y se considerarán los aspectos normativos del Uruguay; tal cual ocurriera en proyectos anteriores (ej. PPR). En estos casos excepcionales, los agroquímicos permitidos serán los que determina la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP y bajo las normas establecidas a nivel nacional (habilitación de operario aplicador, normas de seguridad y protección, etc.) y que están en consonancia con las OP 4.09 que refieren a la Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Clasification de la OMS
3. El proyecto fomentará la protección de hábitats naturales en los predios apoyados. Tomando la valiosa experiencia acumulada por el MGAP en aspectos de conservación de biodiversidad a través del PPR y DACC, la lista restrictiva incluye los ítems (a), (b), (c), (k), y (m), lo que representa un amplio espectro de actividades no elegibles de financiamiento y solo tendrá acciones positivas respecto a las salvaguardas de los **Hábitats naturales** (OP 4.04). Específicamente, no se financiarán sub proyectos que pudiesen afectar negativamente áreas protegidas, sitios de alto valor para la biodiversidad y áreas del Tratado Ramsar. El Proyecto se abocará a fomentar los hábitats naturales en producción agropecuaria, en particular el manejo del campo natural que sostiene gran parte de la ganadería uruguaya, mediante prácticas que conserven y mejoren la producción y preservación de especies nativas.
4. **Bosques:** El Proyecto no prevé apoyar sub proyectos que pudieran activar la salvaguarda de Bosques (OP 4.3636), ya que no se financiarán inversiones que tengan efectos negativos sobre el bosque nativo (ítem (q) de la lista restrictiva). Las iniciativas que se relacionen con el bosque nativo, estarán alineadas con las disposiciones generales de la Dirección General Forestal –Bosque Nativo del MGAP. Los apoyos previstos del Proyecto solo incluirán servicios de no consultoría para la elaboración de inventarios de bosque nativo y para el registro del bosque nativo previsto como parte del Componente 1 del proyecto. Adicionalmente, el Proyecto considera mejorar la disponibilidad de sombra para el ganado en los predios, en concordancia con lo establecido en la ley forestal, que permite hasta 8% de la superficie total del establecimiento (ítem (j) de la lista restrictiva).
5. **Tajamares y represas:** el ítem (d) de la lista restrictiva determina que las obras de captación y almacenamiento de agua que financie el proyecto no activarán la salvaguarda del Banco sobre **Seguridad de Presas** (OP 4.37). En los sub proyectos que incluyan nuevas fuentes de agua, se adoptarán las especificaciones técnicas que figuran en los manuales de diseño de tajamares y de agua subterránea elaborados con apoyo del BM en marco del PPR, como está indicado en el Apéndice.
6. **Pueblos Indígenas.** No se activa la Salvaguarda OP 4.10 de Pueblos Indígenas dado que el MGAP ha determinado que no se encuentran tales grupos en las áreas de intervención del Proyecto DACC-AF.

Expropiaciones aun cuando se ha determinado activar la Salvaguarda OP 4.12 de Reasentamiento, el MGAP ha decidido mantener en la lista restrictiva el ítem (t) determina que no se financiarán proyectos que requieran expropiaciones. Sin perjuicio de lo cual, será activada la OP 4.12 por aquellos sub proyectos de EAAP cuando requieran la imposición de servidumbres o la permuta de predios de colonización.

Esta lista restrictiva se adjuntará a cada formulario del sub proyecto para que sea de consulta y un formulario de verificación de cumplimiento.

Los Técnicos Regionales de la DGDR y/o DGRN mediante las visitas de campo comprobarán su cumplimiento en las diferentes etapas del ciclo de vida de cada sub proyecto (validación y evaluación).

En Consulta

Verificación de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales.

Cuestionario a incluir en formulario de sub-proyecto

Preguntas	Marcar	
1-¿El subproyecto presentado ocasionará impactos ambientales /sociales negativos?	NO	Implica que no se desarrollan actividades contenidas en la Lista restrictiva.
	SI	Habilita a las preguntas 2 a 5 marcando la correspondiente
Firma del técnico		
2-¿Presenta impactos ambientales /sociales negativos menores?		<i>Describir</i>
		<i>Debe presentar plan de mitigación</i>
3- ¿Incorre en alguna excepción de la lista restrictiva?		<i>Señalar el incumplimiento</i>
		<i>Debe presentar plan de mitigación</i>
4- ¿Requiere de EIA de acuerdo a Ley 16466?		<i>Describir</i>
		<i>Debe ser presentado ante el MVOTMA</i>
5- ¿Incumple salvaguardas del DACC?		<i>Describir</i>
		<i>Pasa a consulta Banco Mundial</i>
Firma del técnico		

8. CAPACITACIÓN

Por su naturaleza, la ejecución del proyecto incluye un amplio programa de capacitación en temas ambientales, tales como aquellos vinculados con el manejo sustentable de los recursos naturales. Este contempla una gama temática muy variada con capacitación para técnicos, funcionarios y productores (no solo los beneficiarios) en aspectos de conservación de suelos, labranza cero, manejo de campo natural, manejo de efluentes en tambo, riego estratégico, etc. Para el caso específico de la evaluación ambiental de los sub proyectos, el proyecto incluirá actividades de capacitación en aplicación de la lista restrictiva, procedimientos de verificación ambiental y social, diseño e implementación de medidas de mitigación y procedimientos a ser aplicados en casos excepcionales.

La Capacitación en salvaguardas ambientales tiene dos públicos fundamentales:

- El equipo técnico central y en territorio del MGAP (DGDR, DACC, DGRN) a fin de ampliar y consolidar la capacitación recibida en el marco del PPRy DACC y además, desde cada dirección del MGAP, se tiene previsto realizar capacitaciones de acuerdo a sus especialidades y cometidos.
- Técnicos privados formuladores de sub proyectos. Estos serán capacitados básicamente en la etapa de "habilitación" prevista como parte del ciclo general de sub proyectos. La estrategia es realizar eventos de capacitación específicos para cada llamado, ya sea territorialmente o por rubro.

9. INTERVENCIONES DEL PROYECTO Y POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL

9.1 Componente 2.

El énfasis estará en la promoción de inversiones tendientes a aumentar la oferta y el manejo sostenible de los recursos hídricos, de los suelos y de la biodiversidad del campo natural a nivel predial, así como la consolidación de prácticas de producción sostenible e integrada con medidas para reducir la vulnerabilidad de los productores a la variabilidad climática y el CC.

El componente dará apoyo directo a productores agropecuarios no solo en recursos financieros para mejorar la gestión de los recursos naturales de sus predios, sino también en capacitación y asistencia técnica para promover oportunidades y que puedan mejorar sus capacidades de hacer frente a eventos climáticos adversos.

Se trabajará en el fortalecimiento de capacidades a nivel de las organizaciones de productores y se buscará generar acuerdos de trabajo para que a través de las propias organizaciones se apoyen la elaboración de los proyectos de desarrollo predial.

El Proyecto contribuiría a fortalecer:

- a) Prácticas de manejo de los recursos naturales y la biodiversidad del campo natural tomando en cuenta la adaptación al cambio climático. Las medidas estarán en función de la sustentabilidad de las prácticas de manejo propuestas. Se entiende por prácticas sustentables a los procesos o formas de ejecutar ciertas actividades. A modo de ejemplo se presentan algunas acciones a financiar que tienen que ver con el manejo del campo natural a través del pastoreo:
 - Empotrerramiento (subdivisiones y aguadas) que redundará en cambios en el número y superficie de los potreros, o unidades de manejo del pastoreo, buscando implementar acciones orientadas al uso sustentable del recurso a través de regulaciones de la relación clima-suelo-planta-animal.
 - Manejo del pastoreo que determinará la carga y oferta de forraje en los diferentes sistemas de pastoreo.
 - Mejoramiento de la base forrajera de las explotaciones, fertilización de campo natural, mejoramientos en cobertura con especies de alto valor forrajero o implantación de cultivos forrajeros de larga duración (praderas). Según la historia del uso del suelo tendrán una función de complementación y optimización del aprovechamiento del aporte forrajero del campo natural.
- b) Financiación de medidas de adaptación al C.C. vinculadas al manejo del agua, uso eficiente y estratégico del recurso hídrico y otras prácticas posibles de desarrollar :
 - Reservas y distribución de agua (Ej. tajamares).
 - Riego estratégico para forrajes y diversificación con cultivos intensivos.
- c) Inversiones orientadas a la mejora ambiental a través del manejo de efluentes, el manejo de suelos, la distribución de agua, la disponibilidad de sombra y la reparación de zonas riparias.
- d) Financiación de medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (como ser construcción de humedales artificiales para el tratamiento de efluentes) y un menú de medidas a ser desarrollado.
- e) Prácticas promovidas para levantar restricciones en el manejo y conservación de los recursos naturales por sistema productivo. A modo de ejemplo:

- **En Sistemas Lecheros:**

- Agua: cantidad y calidad (sistemas de distribución en los potreros, nuevas fuentes: pozos y tajamares)
- Manejo de efluentes: colecta y distribución a campo (fosa o laguna), planchada en el corral de espera, trampa de sólidos y desvío de pluviales, sistema de doble laguna, separación manual de sólidos.
- Manejo de suelos: adopción de prácticas que disminuyan la erosión, establecimiento de una rotación planificada a mediano plazo, inclusión de gramíneas perennes en las mezclas forrajeras.
- En cárcavas: alambrado perimetral, evitar acceso de animales, suavizar bordes, nivelación y relleno.

Actividad comprometida dentro del Plan de Manejo de Plagas. **Planes de Uso y manejo responsable de suelos en Lechería.** Ver Anexo 1, apartado 4.C para más información.

- **En Sistemas Intensivos:**

- Manejo de suelos: uso de abonos verdes en la rotación de cultivos, uso de enmiendas orgánicas en forma planificada, sistematización de los cuadros de cultivo (drenajes/desagües, rebaje de caminos), planificación de una rotación de cultivos a mediano plazo.
- Eficiencia en el uso de agua para riego: Sustitución de componentes del equipo en mal estado, enterrado de caños madre en cada cuadro, adopción de sistemas de riego económicos en el uso del agua (riego por goteo), nuevas fuentes de agua (perforaciones), monitoreo del status hídrico del suelo, estado fenológico del cultivo y plan de fertiriego, inclusión de válvula de retención en el sistema.
- Capacitación en el uso y manejo de agroquímicos: gestión de los agroquímicos en el predio (Depósito, Baño, Equipo de protección personal, zona para lavado de equipo, triple-lavado y recolección de envases).
- Sustitución del CH_3Br , mediante solarización y biofumigación.
- Adopción de las Normas de Producción Integrada (reducción del número de aplicaciones por cultivo, uso de variedades adaptadas, monitoreo de enfermedades y plagas)

- **En Sistemas ganaderos, sobre campo natural:**

- Recuperación del campo natural mediante divisiones o subdivisiones de potreros, mejoramiento de campo en cobertura, pastoreo controlado, ajuste de carga.
- Calidad y cantidad de agua: distribución y nuevas fuentes (tajamares, pozos, bebederos, molinos, tanques australianos)
- Ausencia de sombra: instalación de montes (islas) ubicados estratégicamente en el establecimiento
- Degradación de suelos: ajuste de carga y aumento de la oferta de forraje.
- Enmalezamiento: control mecánico (rotativa, rieles) y pastoreo controlado, secuencia de pastoreo de vacunos y ovinos.

f) Prácticas de manejo relacionadas con el uso y conservación de la biodiversidad aplicables a diferentes sistemas productivos. A modo de ejemplo:

- Preservación del bosque nativo.
 - Cortinas y sombra: incorporación con especies adaptadas a cada zona.
 - Cursos de agua degradados: Restauración mediante la incorporación de especies que estuvieron presentes, aislamiento del ganado, instalación de bebederos.
 - Ambientes invadidos por especies exóticas: control en campo natural o bosque nativo mediante manejos adecuados a cada especie y ambiente.
 - Efluentes: incorporación de humedales artificiales en base a macrófitas nativas para el tratamiento de efluentes.
 - Conservación y recuperación de campo natural mediante manejos para favorecer especies forrajeras nativas.
 - Uso sostenible de especies arbóreas nativas con destino a abrigo y sombra.
 - Pesca artesanal: apoyo a la incorporación de actividades relacionadas con la pesca deportiva y pesca sostenible y a la consolidación de cooperativas.
 - Acuicultura: incorporación de especies ictícolas autóctonas en tajamares como diversificación productiva.
- g) Acciones a nivel de emprendimientos asociativos que promuevan el desarrollo productivo, apoyando con recursos no reembolsables infraestructura y otras inversiones que incluyan el agua tanto para abrevadero como para riego
- h) Asistencia técnica a beneficiarios y capacitación a productores, técnicos del MGAP y privados, organizaciones y asalariados rurales. Cubriendo temas diversos relacionados a los recursos naturales y la adaptación al CC; en forma articulada con los organismos competentes como INEFOP, IPA, ANEP, UDELAR, INIA, etc. Entre las actividades a desarrollar se incluye: a) reuniones de discusión entre productores y técnicos; b) talleres de formación e intercambio; c) cursos de capacitación.

Actividad comprometida dentro del Plan de Manejo de Plagas. **Trazabilidad de las operaciones y equipos aplicadores de agroquímicos.** Ver Anexo 1, apartado 4.A para más información.

9.2 Componente 3.

Las actividades del componente 3 y sus aspectos ambientales son las siguientes:

- Levantamiento y clasificación de suelos de los Grupos de suelos CONEAT a escala 1:50.000 por series de suelos divididas en fases; análisis físicos y químicos de caracterización de suelos de los perfiles muestreados; e incorporación al Sistema de Información Geográfico (SIG) de la información de interpretación de las propiedades de los suelos por serie y unidad de mapeo, utilizando criterios de evaluación de tierras, con esto se busca generar y difundir la información necesaria para una mejor formulación y ejecución de los Planes de Uso.
- Desarrollo de un sistema nacional de conservación de suelos, conjuntamente con el sector privado (empresas y técnicos asesores) que incluya actividades de difusión, extensión y capacitación. La acreditación de los técnicos privados en función de la formación brindada por la Facultad de Agronomía (Ley 18996 artículo 139). La conservación de suelo tiene su impacto directo en el control de la erosión en los sistemas agrícolas y en los recursos hídricos al disminuir sustancialmente la cantidad de sedimentos en las vías de drenaje y los agroquímicos asociados a estos. Por lo que se puede afirmar que el sistema nacional de conservación de suelos tendrá un alto impacto ambiental positivo. Los planes de uso y manejo del suelo son una herramienta para la conservación de suelos, debiéndose respetar los principios generales y las normas

técnicas básicas comprendidas en la ley y su reglamentación. La elaboración de un plan de uso y manejo del suelo implica:

- Realizar cartografía de los suelos.
- Asignar capacidad de uso a las distintas unidades de mapeo.
- Agrupar las mismas por capacidad de uso similar.
- Plantear sistemas productivos y evaluar la sostenibilidad del suelo a través de estimaciones de pérdida del suelo.
- Seleccionar el sistema que asegure la sostenibilidad del recurso.
- Se realizarán manuales de buenas prácticas en cultivos de secano, riego y campo natural, buscando la transferencia de aquellas prácticas que promueven un uso responsable y sustentable de los recursos, estos manuales contribuirán a la conservación de los recursos naturales más importantes desde el punto de vista productivo.
- Se revisará el marco legal y de políticas para la gestión del agua con fines agropecuarios, de manera de promover el uso sustentable del recurso.
- En campo natural se definirá el marco de acción del MGAP con respecto al recurso y las prácticas para un uso sustentable del mismo.

Actividad comprometida dentro del Plan de Manejo de Plagas. Gestión del conocimiento, capacitación, divulgación, difusión, sensibilización; apoyando al cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo 152/21-05-2013. Ver Anexo 1, apartado 4.B para más información.

10.Mecanismo de Registro y Resolución de Reclamos

El Proyecto contará con un Mecanismo de Registro y Resolución de reclamos.

Para la atención de las consultas, dudas o sugerencias de la población, vinculadas al Proyecto, están disponibles las siguientes vías:

Unidad de Gestión de Proyectos del MGAP:

- Teléfono para consultas: 23094507
- Correo electrónico: dacc@mgap.gub.uy

Personalmente en:

- Oficinas del MGAP ubicadas en todos los Departamentos del Uruguay. En las mismas se podrá contactar a los profesionales de las distintas unidades ejecutoras que intervienen en el Proyecto.
- Centros de Atención Ministerial: Tienen su sede dentro de las Oficinas del MGAP en distintas dependencias, teniendo como acercar los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos de todo el país.

Página Web del Ministerio: www.mgap.gub.uy

Tratamiento de los reclamos y consultas:

Las consultas, dudas o sugerencias realizadas en la UGP son derivadas o respondidas en forma personalizada, previa consulta al área técnica de referencia. A su vez, los centros de atención ciudadana ubicados en todas las dependencias departamentales del MGAP ofrecen asesoramiento general y respuesta inmediata a las convocatorias (sub proyectos) realizadas por el MGAP.

Las consultas o dudas de profesionales que se generan en el marco de las convocatorias a presentación de sub proyectos, también pueden vehiculizarse por intermedio de la Plataforma Moodle de Educación a Distancia, en los procesos de habilitaciones específicos.

Aquellos interesados en plantear reclamos podrán realizarlo a través de la página web del MGAP o en los centros de atención Ministerial ubicados en todos los departamentos del país. Dichos reclamos serán tramitados por expediente, y culminarán con una Resolución, lo que permitirá a los interesados que la misma se recurra en vía Administrativa y luego de agotada la misma llegar a la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sin perjuicio de lo antes expuesto hay que tener en cuenta que el artículo 30 de la Constitución de la República consagra el derecho de petición que tiene cualquier habitante ante cualquier autoridad de la República. Asimismo, de acuerdo al artículo 3 de la ley 18.381 consagra el acceso a la información pública como un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Para poder hacer efectivo dicho derecho, en los artículos 13 y siguientes dispone el procedimiento administrativo para acceder a la información pública.

10. MANUALES DE BUENAS PRACTICAS-APENDICE

Manual Diseño de Tajamares y Programa de Balance de Tajamares:

<http://www.mgap.gub.uy/gxpfiles/mgap/content/audio/source0000000083/AUD0000070000002082.pdf>

[http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,1,124,O,S,0,PAG;CONC;599;3;D;6319;1;PAG;,"](http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,1,124,O,S,0,PAG;CONC;599;3;D;6319;1;PAG;,)

Esta segunda edición del "Manual para el diseño y la construcción de tajamares de aguada" surge como una demanda de asesores técnicos y productores rurales, tras haberse agotado en poco tiempo la primera edición. Recoge además diseños de obras demostrativas financiadas por el Proyecto Producción Responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-Manual de Efluentes de Tambo y Planillas dimensionamiento de Lagunas:

<http://www.mgap.gub.uy/gxpfiles/mgap/content/audio/source0000000083/AUD0000070000002072.pdf>

El Manual es una herramienta que asiste al técnico en cuanto al manejo y tratamiento de las descargas de efluentes, con la intención de prevenir impactos ambientales adversos a los recursos naturales comprometidos. Para ello le orienta en cómo reducir la descarga generada y en cómo realizar su disposición final.

El Manual fue realizado por un equipo interdisciplinario del Proyecto Producción Responsable del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, basado en experiencias prácticas de productores que ejecutaron obras de depuración de efluentes.

-Manual de Agua Subterránea:

<http://www.mgap.gub.uy/gxpfiles/mgap/content/audio/source0000000083/AUD0000070000002078.pdf>

Este trabajo elaborado por los Dres. Paula Collazo y Jorge Montaña, describe los aspectos fundamentales de la ciencia hidrogeológica y de su aplicación práctica en la producción agropecuaria del Uruguay, pretendiendo ser una herramienta de utilidad para hidrogeólogos – técnicos especialistas en agua subterránea – técnicos de otras formaciones y productores.

Este Manual presenta al recurso agua en su ciclo natural, para luego interesarse en el estudio del agua subterránea, los diferentes tipos de acuíferos y los cuidados que hay que tener para evitar su contaminación y/o agotamiento, tanto en la etapa de construcción de pozos o en su manejo posterior. Se aborda el tema de la calidad de agua, la clasificación de los acuíferos del Uruguay y la normativa vigente para su utilización.

-Manual Siembra Directa:

<http://www.mgap.gub.uy/gxpfiles/mgap/content/audio/source0000000083/AUD0000070000002073.pdf>

Es un documento elaborado entre el Proyecto Producción Responsable del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa (AUSID), destinado a técnicos, productores de diversos rubros, estudiantes de ciencias agrarias y, en general, público relacionado al agro, se brinda una serie de elementos técnicos para una buena instrumentación del sistema de siembra directa. Por este documento se brindan pautas de cómo funciona la siembra directa, cuáles son los tiempos, las rotaciones, los productos y la maquinaria que debe utilizarse para que su aplicación sirva para mejorar un recurso que ha sido tradicionalmente exigido.

-Normativa

<http://www.cebra.com.uy/renare/normativa/>

-Planes de uso y manejo de los suelos

<http://www.cebra.com.uy/renare/planes-de-uso-y-manejo-de-suelos/>

-Proyectos de riego

<http://www.cebra.com.uy/renare/suelos-y-aguas/uso-y-manejo-de-aguas/proyectos-de-riego/>

-Uso y Manejo de Agroquímicos, Manuales editados:

Manual de capacitación para el buen uso y manejo de plaguicidas en el Uruguay. 2005. Ed.: Junta Nacional de la Granja-MGAP. Disponible en versión impresa.

Este manual fue elaborado por un comité formado por expertos uruguayos y canadienses, representando a instituciones públicas y privadas con injerencia directa en la materia, con el objetivo de contribuir a disminuir los riesgos para la salud humana, proteger los recursos naturales renovables y el ambiente y reducir los costos relacionados con la producción agrícola.

Esta publicación ofrece información básica que va desde la clasificación, la legislación en el ámbito nacional, propiedades y riesgos que presentan los plaguicidas, el uso seguro de los mismos y la importancia de las etiquetas en los diferentes tipos de envases, la toxicidad, exposición y vías de ingreso y susceptibilidad a estos productos. Asimismo brinda información sobre los equipos de protección personal, la intoxicación y primeros auxilios a brindar al afectado, los equipos de aplicación y su calibración con cálculos para las dosis correctas, la relación de estos productos con el ambiente, hasta la reducción del riesgo en el manejo de los plaguicidas y el manejo integrado de plagas.

Manual de capacitación para el uso y manejo de plaguicidas en el sector hortifrutícola. 2007. Ed.: MGAP-PPR-DIGEGRA. Disponible en versión impresa.

Elaborado por la Dirección General de la Granja del MGAP, busca ser una herramienta básica para la capacitación de quienes manipulen o apliquen plaguicidas, como forma de reducir al mínimo los riesgos potenciales asociados con el uso y manejo de los recursos naturales, promoviendo además la utilización correcta y sostenible de los mismos.

Este material fue utilizado en cursos de entrenamiento destinados a asegurar que las personas que trabajen con Plaguicidas de uso agrícola tengan un nivel de conocimiento suficiente para establecer un marco formal sobre el "Uso y Manejo", que permita luego, entre otros objetivos, la gestión de los envases vacíos, aplicar y cumplir aspectos fundamentales de la legislación vigente, participar en procesos de certificación internacional y facilitar el acceso a las herramientas de protección de cultivos actualmente utilizadas en otras partes del mundo.

Anexo 1
Plan de Manejo, Salvaguarda de Manejo de Plagas (OP4.09)



**PROYECTO DESARROLLO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
BM-URUGUAY 8099UY-DACC.**

INDICE

1. Introducción
2. Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial
3. Revisión del Sector Agroquímicos en Uruguay
4. Activación de las OP 4.09 en el marco del Proyecto DACC
 - A- Trazabilidad de las operaciones y equipos aplicadores de agroquímicos
 - B- Apoyo al cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo 152/21-05-2013
 - C- Planes de uso y manejo responsable de suelos en Lechería
5. Seguimiento y evaluación
6. Bibliografía

1-Introducción

1. El proyecto Recursos Naturales y Cambio Climático, DACC, tiene como objetivo general *“apoyar a los productores rurales para desarrollar un uso sostenible de los recursos naturales generando una mayor adaptación a la variabilidad y CC, promoviendo una modernización de la gestión del MGAP en el área de información y servicios relacionados al clima y los recursos naturales”*.

2. Este objetivo se espera lograr a través de la adopción de tecnologías y prácticas de manejo compatibles con el desarrollo sostenible en todos los sistemas de producción, especialmente de los productores familiares y medianos, a través de la creación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria y de la modernización de la RENARE.

3. El DACC vio como una oportunidad importante en el desarrollo de la agricultura en el país, la aplicación del decreto 152 del corriente año sobre la gestión ambientalmente adecuada de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. Adicionalmente, para mejorar la gestión responsable de los agroquímicos se plantea la posibilidad de generar un sistema innovador de la trazabilidad de las operaciones de aplicaciones. Durante el 2013, precisamente entre julio y agosto, comenzó un intercambio de ideas con el BM que culminó con el acuerdo de activación de las OP4.09. El DACC envió un primer documento borrador en respuesta a unos términos de referencia para la elaboración de la justificativa de activación, ya que el DACC apunta a introducir prácticas de manejo de plagas nuevas o mejorar las existentes, en términos generales hay una reducción potencial de los riesgos para la salud, por un manejo más apropiado y un seguimiento más preciso. La justificativa resaltarán las actividades de manejo del conocimiento (capacitación, difusión y seguimiento) además de la innovación en la trazabilidad de los equipos de aplicación y el Proyecto no financiará ni la compra de agroquímicos ni de equipos aplicadores.

4. La política de salvaguardas sobre Manejo de Plagas no había sido activada originalmente y el proyecto DACC considera oportuno hacerlo, fundamentado en situaciones que se han generado en el último tiempo y que el MGAP quiere contribuir en la orientación de las decisiones hacia el sector agropecuario y la población en general, desde una posición activa y comprometida con la sostenibilidad de la producción y el cuidado de los recursos naturales. La necesidad requerida por el Proyecto DACC tiene un enfoque hacia la **capacitación, comunicación y difusión**, del buen uso y gestión de los agroquímicos. Así como, de la generación de productos innovadores referidos al monitoreo y control satelital de los equipos aplicadores de agroquímicos (“trazabilidad del sistema”) y la presentación de planes de uso responsable de suelos en el sector lechero, incluyendo los aspectos concernientes al agua y la gestión de los efluentes.

5. Si bien no se incorporarán nuevas tierras agrícolas ni se financiarán plaguicidas, ni equipos aplicadores, el proyecto requiere la aplicación de la política operacional 4.09 (manejo de plagas) del Banco Mundial en los aspectos relacionados con el uso seguro de plaguicidas, la protección de la salud y la prevención de resistencia en plagas, porque como resultado de las prácticas a promover emerge una oportunidad de colaborar en la consolidación hacia un mejor uso y gestión de los agroquímicos en el sector agropecuario, promoviendo el MIP, reduciendo la dependencia en el uso de agroquímicos y fortaleciendo la capacidad de las instituciones y personal.

6. Será difundido entre los encargados del Proyecto, subproyectos y sus asesores técnicos, aclarando que el DACC: no promociona la compra de plaguicidas o equipos aplicadores con fondos del proyecto o cofinanciados; recomienda evitar el uso de plaguicidas de categorías I; recomienda evitar el uso de plaguicidas de categoría II salvo cuando lo justifique una estrategia de MIP y no existan productos alternativos menos riesgosos; y que los subproyectos se implementarán en establecimientos ya destinados a uso agropecuario.

2-Política de Salvaguardas del Banco Mundial

7. El Banco Mundial promueve el manejo integrado de plagas (MIP); un proceso que enfatiza considerar detenidamente todas las técnicas de control de plagas disponibles, antes de seleccionar y utilizar las medidas más eficientes y sostenibles.

8. El enfoque del MIP tiene la intención de reducir el desarrollo de nuevas plagas o resistencia en las mismas, mantener los plaguicidas y otros insumos a un nivel económico justificado, y reducir o minimizar los riesgos a la salud humana y el ambiente natural. El MIP acentúa el crecimiento de cultivos saludables alterando mínimamente el ecosistema agrícola, y fomenta métodos naturales para el control de plagas. Particularmente los plaguicidas químicos peligrosos, son sustancias que requieren de un uso cuidadoso para alcanzar una mejor producción agrícola sin afectar negativamente al medioambiente, la salud del trabajador o la sanidad de los alimentos.

9. El Banco Mundial tiene un conjunto de salvaguardas aplicables a su cartera de préstamos, entre las cuales la Guía de Operaciones 4.09 (OP 4.09) se refiere al Manejo de Plagas. La política, que está alineada con las políticas del Gobierno de Uruguay, apunta a:

a-Afirmar que el manejo de plagas en operaciones u actividades financiadas por el Banco están basadas en un MIP, y reducir la dependencia de plaguicidas químicos.

b-Asegurar que los riesgos a la salud y al medioambiente provocados por el manejo de plagas, especialmente por el uso de plaguicidas, sean minimizados y puedan ser tratados apropiadamente por los usuarios.

c-A medida que sea necesario, apoyar las reformas regulatorias y el desarrollo de capacidad institucional para (i) acentuar la protección de cultivos agrícolas basados en un MIP, y (ii) regular y fiscalizar la distribución y el uso de plaguicidas.

10. En particular, las políticas incluidas en la OP 4.09 relativas a la selección y uso de plaguicidas en proyectos del Banco establecen, entre otros, los siguientes requisitos:

- que de tener efectos adversos sobre la salud humana, éstos sean insignificantes;
- que su efectividad contra las especies objetivo haya sido probada;
- que sus efectos sobre especies no-objetivo y el ambiente natural sea mínimo.
- que los métodos, calendario y frecuencia de aplicación causen el mínimo impacto a los enemigos naturales de la plaga;
- que sean seguros para el personal que los aplica;
- que en su uso se considere la necesidad de evitar la resistencia en las plagas.

3. Revisión del Sector Agroquímicos en Uruguay

11. La institución a cargo de aplicar las políticas nacionales sobre plaguicidas de uso agrícola en Uruguay es el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, que realiza esta tarea a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA). La misión de la DGSA es organizar, desarrollar, y ejecutar las políticas: fitosanitarias y de calidad vegetal, de calidad e inocuidad de los alimentos vegetales, de calidad y control de los insumos agrícolas, de alimentos para animales y productos vegetales de facilitación y ordenación de la comercialización de granos. Esto es llevado adelante generando instrumentos regulatorios y operacionales,

que permiten a los agentes involucrados desarrollar sus actividades en condiciones de transparencia y equidad, mejorando la productividad, la calidad y la competitividad de la producción agrícola y agroindustrial.

12. La visión de la DGSA consiste en promover la agricultura familiar y empresarial sustentable:

- Aplicando una adecuada política fitosanitaria con la finalidad del mantenimiento y mejora del estatus fitosanitario. Se promoverá el uso adecuado de los productos fitosanitarios a los efectos de proteger la seguridad de los alimentos derivados de vegetales a la vez de garantizar la salud y la calidad de los cultivos, aumentando la producción a un menor costo. Mantener una adecuada política fitosanitaria que permita mantener una agricultura sostenible, garantizando un alto nivel de seguridad de l medio ambiente, manteniendo abiertos los mercados internacionales.
- Promoviendo y regulando la calidad e inocuidad de los alimentos vegetales. En este entendido se pretende controlar el consumo de residuos de agroquímicos, hormonas del crecimiento, aditivos y toxinas naturales (como las aflatoxinas) presentes en los alimentos, en cumplimiento de la normativa local.
- Contribuyendo al adecuado abastecimiento interno y al mantenimiento y apertura de mercados externos para nuestros productos vegetales. Para esto debemos orientar el proceso productivo a los efectos de asegurar una adecuada oferta de alimentos para consumo interno y de exportación, impulsando el proceso de innovación y fomento del sector agrario a fin de incrementar su producción y productividad.
- A través de la: Capacitación de los actores involucrados en los procesos productivos y agroindustriales mediante educación y extensión. Se realizará entrenamiento bajo diferentes metodologías de capacitación a los técnicos y productores involucrados, emprendiendo programas de capacitación, tanto en términos de organización como en el manejo de los cultivos, y en general en técnicas de producción.
- Articulación con las instituciones públicas y privadas vinculadas al sector agropecuario para generar sinergias, a través de convenios de cooperación que fortalezcan las acciones conjuntas en distintas áreas.

13. El país suscribe y adopta los criterios de clasificación de los plaguicidas y sus formulaciones específicas, recomendados por la OMS en cuanto a las normativas de riesgo y directrices para la clasificación (Ginebra, OMS; actualizado al 2009). Se anexan listado de productos fitosanitarios registrados y en vigencia.

14. Recientemente fue promulgado el Decreto del Poder Ejecutivo 152/ 21 de mayo de 2013, sobre la reglamentación de la gestión ambientalmente adecuada de los residuos derivados del uso de productos químicos o biológicos en la actividad agropecuaria, horti-frutícola y forestal, firmado por Presidencia de la República en conjunto con los Ministerios de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Ganadería Agricultura y Pesca; que hace referencia a lo concerniente al Manejo y gestión de los envases de agroquímicos hasta su destino final. Lo que da cuenta de la alta capacidad y modernidad del marco regulatorio con que cuenta el Uruguay, en donde desde diferentes ámbitos institucionales públicos y privados se promueve y apoya el manejo de plagas seguro, eficaz y ecológicamente racional.

15. A inicios del 2013 ocurrió un evento de crecimiento de algas en la cuenca del Rio Santa Lucía que afectó el sabor y olor del agua que suministra OSE (agua potable para los centros poblados más importantes del Uruguay). Este evento causó preocupación en la sociedad, y dejó en evidencia que en algunos sectores de la misma se asume que la contaminación difusa provocada por el uso agrícola de los suelos sería la fuente principal de aporte de Fósforo (P) al agua. En la cuenca del Sta. Lucía se encuentran el 20% (800 productores) de los establecimientos lecheros del país. Actualmente, no hay suficiente información ni se han desarrollado aún herramientas que permitan estimar con precisión estos aportes, por lo cual no es posible comprobar o

refutar la certeza de estas aseveraciones o creencias. El desarrollo de estas herramientas resulta además fundamental para identificar las zonas del país más sensibles o propensas a contaminar los recursos hídricos con aportes difusos de P. Adicionalmente, esta identificación permitirá diseñar medidas de manejo específicas que mitiguen el efecto de las actividades agropecuarias. Se elaborarán guías de buenas prácticas de los diferentes sub-sectores agropecuarios, principalmente: lechería, carne, horticultura y fruticultura

16. El proyecto y las instituciones involucradas (DGRN y DGDR) más el equipo profesional de la UGP y nuevas instituciones del MGAP que entran a jugar un rol importante DGSSAA, DIGEGRA, cuentan con trayectoria en el área de capacitación, entrenamiento y preparación y edición de materiales técnicos. Tomando como base de trabajo lo realizado en el Proyecto PPR/BM, actualizando los materiales técnicos editados y generando nuevos manuales de buenas prácticas agrícolas y de manejo seguro de agroquímicos y gestión de los envases generados de la actividad agropecuario, como por ej. de triple lavado e inutilización.

4. Activación de la OP4.09 en el marco del DACC

17. Para el MGAP es una oportunidad emergente y cuenta con una posición proactiva en el tema agroquímicos, se entiende que a través de acciones a desarrollar desde el Proyecto DACC se pueden consolidar productos innovadores que resultarán en bienes públicos, colaborando en la toma de decisiones de todos los actores involucrados sectorialmente. En algunos casos será iniciando el camino que hoy es incipiente y en otros, logrando transformar experiencias piloto en adopción de medidas a nivel general para todo el sector.

Las acciones a impulsar son:

A-Trazabilidad de las operaciones y equipos aplicadores de agroquímicos.

18. Esta línea de trabajo se encuentra en un estado de avance intermedio, piloto, desarrollada por la DGSSAA, generándose un software que a través de monitoreo satelital en tiempo real de los equipos aplicadores, el sistema emite una autorización de aplicación y/o advierte de los riesgos potenciales (presencia de centros educativos, cursos de agua, centros poblados, tomas de agua de poblaciones, presencia de colmenas, en los polígonos a aplicar y sus zonas adyacentes), dando cumplimiento a la normativa vigente.

En este programa se incluye el monitoreo de control de residuos en los diferentes compartimentos (en el suelo, en agua, en los productos vegetales) que es llevado en conjunto articulando MGAP y MVOTMA a través de DGSSAA/MGAP, DINAMA y DINAGUA/MVOTMA, este producto formará parte del SNIA. Durante los próximos 3 años para el desarrollo de estas acciones se estima necesario un monto global de US\$ 300.000.

19. La institución responsable de implementar esta acción será la Dirección General de Servicios Agrícolas DGSSAA/MGAP en articulación con la UGP y el Componente 1 DACC, SNIA.

Se prevé que en el 2do semestre de 2014 quedará en funcionamiento el sistema a nivel piloto en la plataforma del SNIA, técnicos usuarios capacitados (públicos y privados) y en el 2015 Funcionamiento a pleno del sistema, con ajustes y nuevas incorporaciones de servicios.

B-Gestión del conocimiento, capacitación, divulgación, difusión, sensibilización; apoyando al cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo 152/21-05-2013.

20. En esta línea el MGAP trabaja en forma coordinada con el MTVOMA y a través del DACC se propone colaborar en lo referido a capacitación a los productores acerca del triple lavado de envases, inutilización y disposición en centros de acopio intermedios, colaboración en la implementación de la red nacional de Centros de Acopio. Se van a utilizar los materiales técnicos generados por Producción Responsable y también se van a actualizar, se realizarán múltiples capacitaciones a los beneficiarios del Proyecto y al público en

general, para desarrollar estas acciones durante los próximos 3 años se estima necesario un monto de US\$ 200.000.

21. La institución responsable de implementar esta acción será la Dirección General de Servicios Agrícolas DGSA/MGAP en articulación con: UGP (Capacitación), Componente 2 DACC (DGDR), DIGEGRA (Apicultura y capacitación a productores granjeros).

2do semestre 2014 al menos 10 Cursos de Uso y Manejo seguro de agroquímicos a los beneficiarios de subproyectos y público en general de las organizaciones de productores.

2015 Al menos 10 Cursos de Uso y Manejo seguro de agroquímicos a los beneficiarios de subproyectos y público en general.

C-Planes de Uso y manejo responsable de suelos en Lechería.

22. A instrumentarse por la Dirección general de recursos naturales renovables en coordinación con la UGP, los planes son una herramienta que debiera ser la base de cualquier explotación agropecuaria. Los objetivos son, preservar la calidad del suelo (sin descuidar las prácticas inadecuadas que igualmente pueden generar erosión, como lo son diseño de la caminería, manejo de desagües, quema de rastrojos, sentido de las labores, etc.) y mitigar los efectos de la contaminación ambiental.

23. En el proceso gradual de aplicación de esta política pública habían quedado afuera de la obligatoriedad de la presentación las explotaciones lecheras, entre otros motivos por las características particulares de estos emprendimientos agropecuarios. La intensificación de la lechería en los últimos años ha llevado a un aumento de carga animal y uso de insumos extra-prediales lo cual ha aumentado el potencial riesgo de contaminar el medio ambiente desde los tambos. A los efectos contaminantes, como la erosión de suelos, contemplados en las declaraciones actuales de los Planes de Uso, se entendió como necesario incorporar los posibles efectos de contaminación por fósforo y la generación de efluentes en los tambos.

24. Uno de los nutrientes más problemáticos para la calidad del agua es el **fósforo (P)**, ya que cuando los niveles de P se incrementan, pueden producirse en el agua eventos de crecimiento de grupos de bacterias, que pueden causar desde cambios de olor y sabor hasta serios problemas de salud en la población y el ganado que la consume. Este aumento de P puede incrementar la población de plantas acuáticas y reducir los niveles de oxígeno del agua, provocando la muerte de peces y otros componentes de la comunidad. Estos cambios pueden además afectar la calidad de vida de la población de otros modos, deteriorando por ejemplo la calidad de las aguas para esparcimiento. Generalmente se utiliza el término eutrofización para describir toda esta problemática.

25. Una herramienta que permita estimar con precisión intermedia los aportes de P requiere del desarrollo a nivel local de un “Modelo de Evaluación de Pérdidas de P”, también conocido como Índice de P (Sharpley et al., 2003). Este modelo estima las salidas de P de fuentes difusas a un nivel de detalle predial, pero no requiere de información tan detallada como para que su uso se vuelva impráctico. La mayor complejidad para su desarrollo radica en estimar la tasa de erosión anual, pero en Uruguay esto se ve facilitado porque ya existe un modelo local basado en USLE–RUSLE, el cual viene siendo utilizado para la formulación de Planes de Uso de Suelos. Esta metodología es utilizada actualmente en países desarrollados para predecir las pérdidas de P de suelos agrícolas, y puede extenderse además para estimar la salida de otros nutrientes, como N y C.

26. El valor del índice de fósforo va a depender de la topografía, textura y tipo de suelo del predio, constituyéndose en el indicador de riesgo de salida de fósforo del campo y posterior aporte a un curso de agua, aspectos que se podrán evaluar en los Planes lecheros. Esta información debe ser complementada con: Análisis de suelo, para determinar la línea de base del predio y Plan de fertilización.

27. El objetivo es determinar los parámetros de una metodología para priorizar y definir políticas medioambientales para **efluentes de tambos**

28. Adicionalmente, el uso de una matriz basada en el manejo del riesgo geográfico y predial permite caracterizar diferentes establecimientos en estratos potenciales de riesgo de contaminación. La matriz de riesgo geográfica-predial es una herramienta para diagnosticar posibles potenciales de contaminación en los tambos y permitirá priorizar los recursos escasos a aquellos casos donde haya el mayor retorno en prevenir la potencial contaminación.

29. El riesgo geográfico es aquel que está dado por la ubicación geográfica de la sala de ordeño, las pendientes, el tipo de suelo y la cercanía a fuentes de agua para consumo humano y animal, arroyos, ríos y napas; etc. El riesgo predial es aquél dado por el manejo y las instalaciones y logística que hace y tiene el productor (horas de ordeño, suplementación en patios de alimentación, las instalaciones de ordeño, caminería, uso de agua de limpieza; etc.).

30. El índice de P y la matriz de riesgo van a ser utilizados, por lo antes explicado, en las exigencias de la elaboración de los Planes de Uso lecheros una vez que estén instrumentados.

31. En 2014 se efectuarán los estudios necesarios de ajuste del índice de P, la elaboración y edición de manuales, capacitación del personal técnico y de los usuarios, se evaluará en predios lecheros piloto beneficiarios de sub proyectos. En 2015, ajustes, difusión e incorporación al SNIA.

32. La institución responsable de implementar esta acción será la RENARE/MGAP en articulación con la UGP; teniendo un costo estimado de US\$ 250.000. Los estudios necesarios para calibrar el índice de P y ajuste del modelo, ascienden a US\$ 130.000, previéndose utilizar la otra parte del presupuesto en capacitación de técnicos públicos y privados en el uso de la herramienta y elaboración y edición de manual técnico.

5. Seguimiento y evaluación

33. Como se establece en el documento “Manual Ambiental y Social” del proyecto, todas las propuestas de sub proyectos que postulan para recibir financiamiento DACC tendrán una validación a campo por parte de los técnicos territoriales de DGDR y/o DGRN, en donde se constatará la situación de partida y se realizará el seguimiento de la ejecución en forma coordinada con los técnicos de campo. Esta actividad será de particular atención en los sub proyectos excepcionales que sean aprobados incluyendo la verificación del cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales.

34. Se incorporan a los formularios de recepción de propuesta además de la lista restrictiva, un cuadro donde se explicita y acuerda los pasos a seguir para sub proyectos sin impactos ambientales negativos y los posibles casos excepcionales de aquellos que no cumplan con la lista restrictiva, incluyan un plan de mitigación, activen alguna salvaguarda del BMO requieran EIA previo. El mismo formará parte de los contratos a celebrar con el productor.

35. Desde la identificación de la idea, la elaboración, la presentación, validación a campo, aprobación, ejecución y finalmente el cierre será responsabilidad de la UGP del DACC realizar el seguimiento y corregir cualquier desvío que signifique incumplimiento a esta norma, en forma articulada con los equipos territoriales del MGAP.

36. En los sub proyectos que resulten aprobados, tendrán en el contrato de asistencia técnica una consideración especial en cuanto al tipo de dedicación, a fin de que se realice un adecuado seguimiento del plan de mitigación u otras medidas acordadas. El seguimiento corresponde a las visitas individuales que realiza el técnico o el grupo de técnicos al predio donde se ejecuta el proyecto, de forma que la estrategia transcurra de acuerdo a lo proyectado.

Estas visitas deberán quedar documentadas en un cuaderno de campo donde queden registradas las actividades y recomendaciones realizadas.

37. No se contempla adquirir pesticidas químicos en el proyecto por lo que no se requiere un plan de manejo de pesticidas y no se integraran a la lista de costos elegibles de los sub proyectos Aunque no se financie la adquisición de pesticidas, ni se promoverá su uso en la medida posible, los proyectos financiados pueden incluir proyectos para reciclado de envases de pesticidas. Estos proyectos pasarán por una evaluación ambiental previa a su aprobación y deberán contemplar todos los cuidados respecto el manejo, limpieza y reciclado de los envases. Al mismo tiempo deberán seguir los procedimientos pertinentes recomendados por la legislación nacional en este sentido. Todos estos procesos quedarán debidamente documentados en el Sistema de gestión Integral (SGI) y en los archivos de la Unidad.

38. En referencia a las instancias de sensibilización y capacitación, la Unidad de Monitoreo e Información de la UGP del DACC, acompañará las mismas generando herramientas de sistematización incorporadas al Sistema de Gestión Integral. (SGI).

39. En todo lo concerniente al seguimiento de los temas: Salvaguardas Ambientales y Sociales y Salvaguarda de Manejo de Plagas los Ings. Agrs. Carlos Honorio y Julio Rodríguez se encargarán, así como de preparar los informes y reportes necesarios para el BM.

6. Bibliografía

- a) World Bank Operational Policy 4.09 on Pest Management (OP 4.09),
<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/37524/OP4.09PestManagement.pdf>
- b) Guía del Banco Mundial para preparar un Marco de Gestión Ambiental y Social
- c) Registro y compra-venta de productos químicos R.O.U.
Decreto n°149/977. Reglamenta el registro, control y venta de plaguicidas de uso agrícola
- d) -Decreto n°34/987. Establece exigencia de presentación del certificado de origen a los efectos del registro de plaguicidas. R.O.U.
- e) -Decreto n°113/990. Establece que toda persona física o jurídica que elabore o comercialice los productos comprendidos en el decreto 149/977 deberá inscribirse en la DVS (actual DGSSAA) en los plazos, términos y condiciones que se determinen y dispone exigencias respecto a la venta de plaguicidas de máximo riesgo para la salud humana y el ambiente. R.O.U.
- f) -Decreto n°482/009 del 19/10/2009. Modifica el artículo 9° del decreto 149/977, determinando la exigencia del uso de receta profesional en todo acto de compraventa de productos fitosanitarios categorías 1a y 1b y otros que determine el MGAP. R.O.U.
- g) -MGAP- DGSSAA-2004-Normativa. Marco legal y reglamentario.
<http://www.mgap.gub.uy/dgssaa/Normativa/NORMATIVA.htm>>
- h) -MGAP-AUSID-BM-GEF. 2009 Guía de siembra directa.
<http://www.mgap.gub.uy/presponsable.htm>>
- i) Manual de Capacitación para el uso y manejo de plaguicidas en el sector hortifrutícola. 2007. MGAP - DIGEGRA-PPR.
- j) Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, para sistemas con agricultura de secano en Uruguay. 2013. MGAP, Mesa nacional de trigo, Mesa tecnológica de oleaginosos, Mesa nacional de entidades de cebada cervecera.
- k) Manual: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. 2008. MGAP/PPR, COPAGRAN, CAF.
- l) **Ley N° 13.640 de 29 de diciembre de 1957, artículo 137:** Establece que el MGAP efectuará el control de las materias o productos de uso agrícola que se comercialicen por particulares a los efectos de verificar sus condiciones de venta, composición y destino. Faculta al Poder Ejecutivo a condicionar la venta de los productos que declare de interés para la explotación rural al previo registro.
- m) **Ley N° 16.170:** Faculta al Poder Ejecutivo a prohibir la utilización, venta y exportación de vegetales, productos o subproductos de origen vegetal contaminados con residuos de plaguicidas en niveles superiores a los establecidos en el Codex Alimentarius o por los requerimientos, en la materia, del país de destino. Resolución PE 825/992 de 15/10/992 delegó en el MGAP las atribuciones conferidas y por Resolución Ministerial de fecha 23/10/992 se subdelegó en el entonces Director de la DSPA (Actualmente DGSSAA).
- n) **Ley 16.737 (artículos 262 y 285):** Faculta a las Unidades Ejecutoras a disponer determinadas medidas administrativas en el ejercicio de sus funciones de contralor y establece sanciones a aplicar por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias.

- o) Lista agroquímicos registrados vigentes
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/DivAnálisisDiagnostico/documentosDAYD/Vigentes%2015%201%202012_corr.pdf
- p) Lista de agroquímicos. 1a y 1b
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/DivAnálisisDiagnostico/documentosDAYD/CAT1a1b_2010.pdf
- q) Sharples, et al., 2003. Agricultural Phosphorus and eutrophication. USDA, ARS, 149.
- r) Disposiciones legales y reglamentarias
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/NORMATIVA_PROD_FIT.htm
- s) Medidas alternativas para el control de plagas en el sector horti-frutícola. 2013. DIGEGRA/MGAP.
- t) Manual de Operaciones, DACC-BM 8099UY
<http://www.mgap.gub.uy/gxpfiles/mgap/content/audio/source0000000083/AUD0000070000001431.pdf>
- u) Manual ambiental y social. 2013. MGAP/DACC-BM. 8099-UY.
<http://www.mgap.gub.uy/gxpfiles/mgap/content/audio/source0000000083/AUD0000070000001953.pdf>
- v) Clasificación de los plaguicidas de OMS, actualizado al 2009.
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf?ua=1

Evaluación Ambiental del Proyecto

Introducción

7. Este documento es un análisis de las cuestiones ambientales concernientes a un financiamiento adicional (AF) del proyecto DACC que el Uruguay está preparando para su consideración al Banco Mundial. y que tuvo su antecedente en el Proyecto de Producción Responsable (PPR). A solicitud del gobierno, en el año 2002, el Banco Mundial preparó una revisión por sector con el fin de analizar los principales temas relacionados con el manejo de los recursos naturales en el país (*Uruguay: el Sector Rural y los Recursos Naturales, Informe No. 24409-UR*). Sobre la base de este informe, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), solicitó al Banco Mundial asistencia técnica y financiera para la elaboración del Proyecto estos trabajos concluyeron a mediados del 2004 con la presentación a las autoridades del Banco Mundial y GEF de los documentos que conforman la propuesta del *Proyecto de Manejo integrado de los recursos Naturales y la Diversidad Biológica (32236-UY)* cuyo objetivo ha sido promover la adopción de sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso agropecuario, incluyendo la diversidad biológica, que sean económica y ambientalmente viables. El proyecto actualmente en ejecución hasta 2011, desde 2012 refleja la decisión del MGAP de apoyar activamente la promoción de un mejor manejo de los recursos naturales agropecuarios y a la biodiversidad a través de una serie de estímulos a los productores agropecuarios, especialmente a la pequeña y mediana empresa rural en las distintas zonas agroecológicas del país. Este proyecto está en estudio de prórroga por un año más (hasta el 2012) y que eventualmente actuaría de puente con el nuevo proyecto que se está preparando. Hoy en día el MGAP, con el consentimiento del MEF y la OPP, solicitó al Banco asistencia técnica y financiera para la elaboración y ejecución del “*Proyecto de manejo sostenible de los recursos naturales y de adaptación al Cambio Climático*”.
8. Una nueva institucionalidad se definió a partir del 1 de marzo de 2005 donde se inició el proceso de inclusión del desarrollo rural en las políticas agropecuarias definiéndose a los Productores Familiares, asalariados y población rural como la población objetivo prioritaria para la elaboración y ejecución de las políticas diferenciadas. Para alcanzarlas se creó la Dirección General de Desarrollo Rural; la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas; y las Mesas de Desarrollo Rural. El MGAP busca apoyar el crecimiento general balanceado, el desarrollo sostenible del sector agropecuario en base a una estrategia integral e inclusiva, desarrollando capacidades sistémicas e institucionales en sus unidades y promoviendo la creación y/o fortalecimiento de asociaciones entre organismos, comunidades locales y el sector privado, incorporando medidas de mitigación y adaptación del cambio climático de acuerdo al recientemente creado Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Así este proyecto fue diseñando trayendo las experiencias de varios proyectos del MGAP, entre ellos el Programa Ganadero, Uruguay Rural y particularmente Producción Responsable (iniciado en 2005 y finalizado en 2012), y DACC, los 2 últimos con financiamiento del Banco Mundial y básicamente orientados a mejorar el manejo ambiental de los establecimientos rurales de país. Si bien el nuevo Proyecto DACC comparte este objetivo, ha sido ampliado en gran medida para abordar el desafío nacional de adaptarse y en la medida de lo posible mitigar las causas del cambio climático global.

El Proyecto

9. El Proyecto presentado (DACC–AF) mantiene la línea de atender los principales impactos y reducir su huella de carbono a través de medidas y programas innovadores e integrados para mejorar el manejo integrado de los recursos naturales incorporando la adaptación a la variabilidad climática. El mismo consta de 4 componentes: a) Componente 1 (SNIA) - Establecimiento de un Sistema Nacional de Información Agropecuaria y apoyo a la toma de decisiones; b) Componente 2 (DGDR) – Manejo Integrado de Recursos Naturales para el Desarrollo Rural que permitan a los productores rurales, fortalecer su capacidad productiva, integrar practicas de manejo de los recursos naturales, reducir la vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola; c) Componente 3 (DGRN) – Modernización de los Servicios y Apoyo para el Cumplimiento de los Cometidos de la Dirección General de Recursos Naturales; d) Componente 4– Unidad de Ejecución del Proyecto, que además incluirá temas transversales a todo el Proyecto.
10. El Componente 2 apoyará iniciativas de manejo integrado de recursos naturales y de adaptación/mitigación al cambio climático, trabajando en forma directa con los beneficiarios o grupos de beneficiarios en sus predios definidos con un enfoque territorial basado en criterios de cuencas y microcuencas. Estas actividades no solo favorecerán las practicas a nivel predial que mejoren el uso de los recursos naturales y ayuden al productor a adaptarse a la variabilidad climática, sino que también construirá capacidades a nivel de las instituciones locales, lo que en conjunto permitirá incrementar la resiliencia de los paisajes naturales – productivos.

Intervenciones del Proyecto y posible impacto ambiental

11. Dentro de este componente 2, el Proyecto contribuiría a fortalecer:
 - i) **Extensión Rural y Asistencia Técnica Integral**, dirigido a todos los productores rurales de todo el territorio nacional, con acceso diferenciado, trabajando articuladamente con las organizaciones del medio rural y la institucionalidad pública agropecuaria mediante articulación público privada a nivel local.
 - j) **Capacitación para los productores, técnicos del MGAP y técnicos privados, Organizaciones rurales, asalariados rurales**, complementando la asistencia técnica y las inversiones. Cubriendo temas diversos como técnico productivos, ambientales, económicos, organizacionales, de gestión, entre otros. Articulando la capacitación con los organismos competentes como INEFOP, IPA, ANEP, UDELAR y Academia.
 - c) **Fortalecer los sistemas productivos de los productores familiares** a fin de mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones adversas generadas por cambios de índoles económicas, climáticas, etc.
 - d) **Promover innovaciones** sostenibles de carácter estratégico, que perduren en el tiempo, mejorando la estructura y funcionamiento de los sistemas productivos.
 - e) **Financiación de propuestas prediales y regionales con acciones institucionales**: fomentar acciones tendientes a mejorar la gestión a partir de capacitación, entrenamiento y estrategias asociativas, todas relacionadas a mejorar la institucionalidad local con el fin de viabilizar la puesta en marcha de los proyectos de inversión identificados. Entre las principales actividades a desarrollarse incluye: a) reuniones de discusión entre productores y técnicos; b) talleres de formación e intercambio; c) cursos de capacitación técnica y de gestión;
 - f) **Financiamiento de experiencias de producción ganadera** eficiente en el uso de los recursos naturales, económicos y humanos tomando en cuenta la adaptación al cambio climático
 - g) **Bosques de sombra integrados al Sistema de producción ganadero**, con funcionamiento óptimo de la unidad de producción, diversificando productos e ingresos y disminuyendo los riesgos a través del manejo sustentable.
 - h) **Financiación de Medidas de mitigación** (como ser construcción de humedales artificiales para el tratamiento de efluentes y un menú de medidas a ser desarrollado).

- i) **Financiación de medidas de adaptación** (reservas y manejo del agua otras prácticas a ser desarrolladas):
- Prácticas de manejo eficiente de los recursos hídricos: (como ser tajamares)
 - Riego para forrajes estratégicos y para diversificación agrícola con cultivos intensivos.
- j) **Prácticas de manejo de los recursos naturales y la biodiversidad del campo natural.** Las medidas estarán en función de la sustentabilidad de las prácticas de manejo propuestas. Se entiende por prácticas sustentables a los procesos o formas de ejecutar ciertas actividades. A modo de ejemplo se presentan algunas acciones a financiar que tienen que ver con el manejo del campo natural a través del pastoreo reúnen aquellas orientadas a su manejo:
- Empotreroamiento (subdivisiones y aguadas) que redundará en cambios en el número y superficie de los potreros, o unidades de manejo del pastoreo, buscando implementar acciones orientadas a optimizar su aprovechamiento a través de regulaciones del proceso de producción de forraje.
 - Manejo del pastoreo que determinará las cargas, fundamentalmente las instantáneas, los períodos de pastoreo y descanso (recuperación, producción), y por esta vía el aprovechamiento y conservación del tapiz y el desempeño animal. El manejo del pastoreo determina simultáneamente:
 - *La disponibilidad de forraje para el ganado*
 - *La condición del suelo (física densidad aparente, etc. y química, fertilidad) y su relación con la dinámica del agua, su capacidad de infiltración, las tasas de escurrimiento, la capacidad de retener agua y por lo tanto*
 - *La dinámica del agua en el ecosistema de praderas, actuando sobre la capacidad de infiltración, retención, escurrimiento, erosión, etc.*
 - *La capacidad del campo de mantener el aporte de forraje, y por tanto la productividad animal, en términos cuanti y cualitativos en el tiempo.*
 - Mejoramientos de la base forrajera de las explotaciones, fertilización de campo natural, mejoramientos en cobertura con especies de alto valor forrajero o implantación de cultivos forrajeros de larga duración (praderas) o corta duración (verdeos). Según dónde, sobre qué historia de uso de suelo, cómo y en qué extensión se hagan estos mejoramientos tendrán una función de complementación y optimización del aprovechamiento del aporte forrajero del campo natural o su sustitución. Se promoverán los primeros. En el caso de los mejoramientos forrajeros del campo natural que involucran introducción de especies, resulta relevante considerar el manejo que se hace del tapiz natural, básicamente si se baja con bocas o si se le aplica herbicida.
- k) **Prácticas de manejo promovidas para levantar restricciones en el manejo y conservación de los recursos naturales.** A modo de ejemplo se presentan algunas prácticas organizadas por sistema productivo:
- **Sistema Lechero:**
 - Agua: Cantidad y calidad (sistemas de distribución en los potreros, nuevas fuentes: pozos y tajamares)
 - Manejo de efluentes: Colecta y distribución a campo (fosa o laguna), planchada en el corral de espera, trampa de sólidos y desvío de pluviales, sistema de doble laguna, separación manual de sólidos.
 - Manejo de suelos: adopción de la técnica de siembra directa, establecimiento de una rotación planificada a mediano plazo (praderas-verdeos), inclusión de gramíneas perennes en las mezclas forrajeras.
 - En cárcavas: alambrado perimetral, evitar acceso de animales, suavizar bordes, nivelación y relleno

- *Sistemas Hortícolas en el litoral oeste:*
 - Manejo de suelos: uso de abonos verdes en la rotación de cultivos, uso de enmiendas orgánicas en forma planificada, sistematización de los cuadros de cultivo (drenajes/desagües, rebaje de caminos), planificación de una rotación de cultivos a mediano plazo.
 - Uso y manejo de agroquímicos: Gestión de los agroquímicos en el predio (Depósito, Baño, Equipo de protección personal, zona para lavado de equipo, triple-lavado y recolección de envases, Capacitación).
 - Sustitución del CH_3Br , mediante solarización y biofumigación,
 - Adopción de las Normas de Producción Integrada (Reducción del Nro. de aplicaciones/cvo., uso de variedades adaptadas, monitoreo de enfermedades, plagas)
 - Eficiencia en el uso de agua para riego: Sustitución de componentes del equipo en mal estado, enterrado de caños madre en cada cuadro, Adopción de sistemas de riego económicos en el uso del agua (Riego por goteo), Nuevas fuentes de agua (Perforaciones), Monitoreo del status hídrico del suelo, estado fenológico del cultivo y plan de fertiriego, inclusión de válvula de retención en el sistema
- *Sistemas ganaderos, sobre campo natural:*
 - Degradación del campo natural: mediante Divisiones o subdivisiones de potreros, Mejoramiento de campo en cobertura, Pastoreo controlado, Ajuste de carga
 - Calidad y cantidad de agua: Distribución y nuevas fuentes (tajamares, pozos, bebederos, molinos, tanques australianos)
 - Ausencia de sombra: instalación de montes con especies nativas, registro y plan de manejo de monte nativo
 - Degradación de suelos: ajuste de carga, disminución de suelo desnudo mediante la instalación de sps que cubran rápidamente el suelo, manejo de pastoreo
 - Enmalezamiento: control mecánico (rotativa, rieles) y pastoreos controlado, secuencias de pastoreos, vacunos-ovinos
- *Región metropolitana:*
 - Sistemas: hortícolas, frutícolas, horti-frutícolas, horti-ganaderos, ganaderos. (En este agrupamiento no están considerados los lecheros)
 - Disminuir la erosión, degradación de suelos y mitigación de cárcavas, desagües, anegamiento, falta de sistematización
 - Manejo (malezas, sobrepastoreo, sombra, variedades, etc.)
 - Manejo de Agroquímicos, adopción de las normas de producción integrada, producción orgánica
 - Riego, mejoras, eficiencia, nuevas fuentes y sustitución de partes de los sistemas

I) Prácticas de manejo relacionadas con el uso y conservación de la biodiversidad aplicables a diferentes sistemas productivos. A modo de ejemplo se presentan algunas prácticas organizadas por sistema productivo:

- Bosque nativo: registro y plan de manejo de monte nativo incluyendo iniciativas de silvopastoreo
- Cortinas y sombra: Incorporación con especies nativas de la zona
- Cursos de agua degradados: Restauración mediante la incorporación de especies que estuvieron presentes, aislamiento del ganado, instalación de bebederos

- Ambientes invadidos por especies exóticas: control en campo natural o bosque nativo mediante manejos adecuados a cada especie y ambiente (control químico y/o mecánico)
 - Efluentes: Incorporación de humedales artificiales en base a macrófitas nativas para el tratamiento de efluentes
 - Conservación y recuperación de campo natural mediante manejos para favorecer especies forrajeras nativas
 - Uso sostenible de especies nativas: implantación de arbóreas nativas con diferentes objetivos (frutales, madera, control de erosión), extracción de aceites esenciales, etc
 - Pesca artesanal: apoyo a la incorporación de actividades relacionadas con la pesca deportiva y pesca sostenible y a la consolidación de cooperativas
 - Acuicultura: incorporación de especies ictícolas autóctonas en tajamares apropiados como diversificación productiva y/o complemento nutricional de la familia rural
12. Para evitar cualquier posible impacto negativo, el Proyecto ha decidido no financiar ninguna iniciativa que ponga en riesgo la calidad ambiental del predio o de los predios involucrados. Estas actividades se especifican más adelante; sin embargo la lista restrictiva será perfeccionada y actualizada en el Manual de Operaciones.
13. Existe la herramienta de Planificación Ecorregional que fue generada por acuerdos de trabajo propiciados por el MGAP y diferentes instituciones nacionales trabajando en forma articulada. Esta herramienta que contiene diferentes capas de información en formato digital (SIG) serán incorporadas en la elaboración del SNIA y esto formará parte del Manual Operativo y las herramientas de Seguimiento y Monitoreo utilizadas por el proyecto (SGI, Monitoreo de Planes de Uso y Manejo de Suelo, etc.). Así, cada sub proyecto podrá ser ubicado y saber si se ubica en una zona sensible o de alta prioridad respecto a la biodiversidad, diferentes ambientes identificados en los mapas de ambientes y otros aspectos relevantes para la evaluación de las propuestas.
14. Una de las fortalezas de este Proyecto es la generación de demanda por parte del sector productivo de proyectos de inversión. Esto puede significar que alguna propuesta pudiese llegar a tener un riesgo de impacto ambiental. Esto será debidamente chequeado en el proceso de verificación sujeto a la legislación ambiental vigente.
15. Por consiguiente, el objetivo primario del Proyecto es contribuir a la sustentabilidad de la expansión y desarrollo del sector agropecuario a mediano y largo plazo modernizando la gestión integrada de los recursos naturales a través del mejoramiento de la calidad ambiental de los establecimientos agropecuarios que entre otras cosas mejoraran el uso del agua, suelo y las pasturas naturales, incrementaran la cobertura boscosa con especies nativas, reducirán el uso de defensivos agrícolas, mejoraran áreas de captación de agua y otras como las mencionadas en los párrafos anteriores. Puesto que este es el resultado esperado, no califica como un Proyecto que genere un impacto ambiental negativo; muy por el contrario a nivel ambiental tendrá un efecto positivo o bien neutro.

Marco Ambiental vigente

16. El marco legal ambiental de la Republica Oriental del Uruguay es moderno y cubre en gran medida los aspectos medioambientales que se aplicarían en el presente Proyecto. Entre las leyes mas relevantes se destaca la 17.283, ley general de Medio Ambiente, que declara de interés general de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, que se refiere a la protección del Medio Ambiente. Asimismo, la ley de 16.444 (Evaluación de Impacto Ambiental)

declara de interés general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, así como la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo y, en su caso, la recomposición del medio ambiente dañado por actividades humanas.

17. El decreto 349/005 (que reglamenta la ley 16.444) establece en su artículo 2 las 34 actividades que requieren de una Autorización Ambiental Previa. Entre ellas, las mas vinculadas con el presente Proyecto son:

a) construcción de represas con una capacidad de embalse de mas de 2 millones de metros cúbicos o cuyo espejo de agua supere las 100 ha;

b) construcción de canales, acueductos, sifones o estaciones de bombeo que se utilicen para riego, cuando conduzcan mas de 2 metros cúbicos por segundo;

c) instalación de tomas de agua, con capacidad para extraer mas de 500 litros por segundo respecto a los cursos de agua superficiales y mas de 50 litros por segundo para las tomas de agua subterránea;

d) explotaciones hortícolas, frutícolas o vitícolas de mas de 100 ha, en un único establecimiento o unidad de producción;

e) nuevas plantaciones forestales de mas de 100 ha en un establecimiento o unidad de producción.

18. En cuanto a suelos y aguas, la reglamentación de la Ley 15.239 (Preservación de Suelos y Aguas) ha sido un paso muy importante para controlar la erosión. Esta ley establece las reglas técnicas para la preservación de suelos y aguas con objetivos agrícolas y la recuperación de suelos erosionados delegando a la DGRN del MGAP (que será parte del Proyecto presentado) la coordinación y dirección de actividades para el uso y conservación de los suelos. Asimismo, las construcciones de obras con fines de riego agrario también deberán ser registradas ante el MVOTMA (DINAGUA) según la ley 16.858 (Ley de riego).

19. También el Uruguay ha ratificado acuerdos internacionales que protegen el ambiente, entre ellos ha aprobado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por la ley 16.517 de 22 de julio de 1994 y el Protocolo de Kyoto de 1997 por la ley 17.279 del 23 de noviembre del 2000. Uruguay ha ratificado el Tratado sobre la Diversidad Biológica (TBD) el 11 de mayo de 1993. La Dirección Nacional de Medio Ambiente, DINAMA, preparo la Estrategia Nacional para la Biodiversidad durante 1998 y 1999, con asistencia financiera del GEF. Esta estrategia nacional fue publicada y oficialmente presentada al TDB por el MVOTMA el 29 de diciembre de 1999. Estas dos ratificaciones concernientes a cambio climático y biodiversidad se suman a la ratificación de la Convención para la lucha contra la desertificación, siendo el Uruguay uno de los países que ratifico las 3 convenciones de la cumbre de Río 92.

20. En el año 2009, el gobierno de Uruguay creo el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Vulnerabilidad (decreto 238/009). Uruguay se destaca entre los países con mayor compromiso a la implementación de los mandatos derivados de la Convención Marco, trabajando actualmente en los preparativos de la Cuarta Comunicación Nacional. El sistema Nacional creado es una herramienta innovadora como política de estado que le ha permitido al MGAP definir seis pilares para una estrategia de adaptación del sector agropecuario al CC;

- a) Introducir cambios en el manejo, las tecnologías y la infraestructura: proteger el campo natural y la biodiversidad en general de la degradación; utilizar buenas prácticas en la explotación de los suelos según su capacidad de uso para minimizar riesgos de erosión; aumentar la disponibilidad y eficiencia del uso de agua para los cultivos y el ganado; y promover el riego donde sea técnica y económicamente viable.
 - b) Fortalecer las actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.
 - c) Desarrollar un sistema de información y soporte para la toma de decisiones que asista en la planificación y en las decisiones en los sectores público y privado.
 - d) Desarrollar, implementar y generalizar el uso de seguros agropecuarios que permitan transferir al menos parte de los riesgos climáticos.
 - e) Mejorar el ordenamiento territorial y proteger los servicios ecosistémicos, el funcionamiento de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad.
 - f) Desarrollar las capacidades institucionales adaptativas y mejorar la coordinación a nivel nacional y local.
21. El objetivo estándar de la evaluación de impacto ambiental (EIA) es identificar aspectos externos no planificados que puedan alterar positiva o negativamente el patrón de cambios en la condición de los sistemas físicos y biológicos y la determinación de medidas para mitigar los aspectos externos negativos o intensificar los positivos. De acuerdo al marco legal uruguayo, se considera impacto ambiental negativo o nocivo a toda alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas del medio ambiente causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente perjudiquen o dañen: - la salud, seguridad o calidad de vida de la población; - las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio; y la configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales.
22. Las actividades previstas en el presente Proyecto no suponen a priori, de acuerdo a la legislación nacional vigente y en particular a la luz de la última revisión del reglamento (Decreto 349/005) de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental (16.466 del 14 enero 1994), de autorizaciones ambientales previas. Tal como se expone mas arriba, el reglamento de la ley de EIA exige la aplicación de la EIA en ciertos casos particulares. Solo existen ciertos casos que podrían estar comprendidos en el presente Proyecto, para los cuales si se presentaran serian sometidos al correspondiente EIA.

Institucionalidad ambiental del Uruguay

23. Si bien la institucionalidad ha sido mencionada previamente existe una relación estrecha entre el MGAP y MVOTMA, el primero, proponente de este Proyecto y el segundo, MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) en el cual radica la competencia ambiental nacional dentro de una de sus direcciones, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
24. Dentro del MGAP, existen diferentes Direcciones Generales relacionadas con aspectos ambientales de este Proyecto, de las cuales cabe resaltar a la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (DGRN) que es la responsable de promover el uso y manejo racional de los recursos naturales renovables, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del sector agropecuario y coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica. La DGRN es parte del Proyecto presentado. Asimismo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos es la dirección del MGAP que define y ejecuta la política pesquera del gobierno.
25. Dentro del MVOTMA, las direcciones más relevantes para el Proyecto son la DINAMA y la DINAGUA (Dirección Nacional de Aguas). Esta última tiene como cometido asegurar los recursos hídricos del país, mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas.

Medidas Preventivas

26. Existen diez declaraciones de Políticas Operativas (PO) que cubren las medidas preventivas en el ciclo del proyecto requeridas para aspectos ambientales y socio-culturales. De ellas, solamente la Evaluación Ambiental (PO 4.01) es importante para el proyecto.
27. Manejo de Plagas: En términos generales no se financiarán agroquímicos. En casos en que se presenten propuestas que integren el uso de agroquímicos permitidos para prácticas aceptadas, como por ejemplo, la aplicación de herbicidas para realizar siembra directa, el componente de agroquímicos no será financiado por el Proyecto sino que lo aportará la contraparte. En casos particulares y puntuales se evaluará la pertinencia de usar de forma restringida y localizada el uso de ciertos herbicidas, por ejemplo, para el control de especies exóticas invasoras de espacios productivos y/o de conservación de los predios. Los agroquímicos permitidos serán los que determina la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP.
28. Hábitats naturales: Con respecto a la política de hábitats naturales, el proyecto fomentará la protección de hábitats naturales en los predios apoyados. Como en el caso de operaciones previas, no se aprobarán proyectos que pudiesen llegar a afectar negativamente áreas protegidas, sitios de alto valor para la biodiversidad y áreas del Tratado Ramsar. El Proyecto se abocará a fomentar los hábitats naturales en producción agropecuaria. A modo de ejemplo, se fomentará el manejo del campo natural que sostiene gran parte de la ganadería uruguaya, mediante prácticas que conserven y mejoren la producción de las pasturas nativas.
29. Bosques: El Proyecto no afectará al bosque nativo. Las iniciativas que se relacionen con el bosque nativo, estarán alineadas con las disposiciones generales de la Dirección General Forestal – Bosque Nativo del MGAP y los apoyos del Proyecto serán para el registro del bosque nativo y/o para establecer planes de manejo del bosque nativo que autorice la Dirección General Forestal. Adicionalmente, el Proyecto considera mejorar la disponibilidad de sombra de los predios con especies nativas, lo que supone un incremento de la biodiversidad indígena sin afectar los ecosistemas naturales. Estos bosques serán pequeños parches de árboles nativos con ejemplares representativos de la zona tratada.

Evaluación de Impacto

30. El Proyecto generará la demanda de productores rurales de todo el país por iniciativas de manejo de los recursos naturales y adaptación a la variabilidad climática. Los productores, asistidos por técnicos de campo debidamente capacitados y habilitados por el MGAP presentarán sub-proyectos prediales, multi-prediales o asociativos que serán recepcionados y validados por técnicos regionales del Proyecto vinculados a las Mesas de Desarrollo Rural distribuidas en el territorio nacional. Una vez validados a nivel regional, los sub-proyectos serán evaluados por las comisiones de evaluación de la UEP del Proyecto.
31. Como Proyecto sectorial donde la financiación de sub proyectos específicos será examinada caso por caso durante la implementación, el impacto ambiental depende de: i) la forma en que cada sub-proyecto sea evaluado con respecto a las consecuencias ambientales potenciales que conduzcan al rechazo, aceptación, rediseño o aceptación sujeta a medidas mitigantes; y ii) la probabilidad de que exista una estructura institucional que pueda implementar las recomendaciones de la Evaluación Ambiental.

32. La estrategia de las consideraciones ambientales y los procedimientos para la implementación surge de la amplia experiencia adquirida por el MGAP en varios Proyectos ejecutados en los últimos años con altos impactos positivos en el ambiente. Cabe resaltar que durante la ejecución del Proyecto Producción Responsable y el DACC, el Ministerio se ha fortalecido en la evaluación de propuestas prediales de manejo integrado de los recursos naturales, habiendo evaluado y financiado más de 10.000 sub proyectos hasta el presente. Un avance sustantivo ha sido el desarrollo de la herramienta de Evaluación de Impacto de las Actividades Rurales (EIAR) que incorpora diferentes dimensiones (ecología del paisaje; calidad de agua, suelos y aire; valores socio-culturales; valores económicos; gestión y administración) para lograr una evaluación ambiental holística de los predios financiados por el Proyecto. Las dimensiones concernientes a ecología del paisaje y calidad de agua, suelos y aire son los insumos claves que han sido utilizados en la preparación de este Proyecto.
33. Se han integrado diferentes niveles de evaluación para la aprobación, rectificación o rechazo de las propuestas. En primer lugar, se integran comisiones interdisciplinarias para la evaluación de las propuestas. En una segunda instancia, las propuestas son evaluadas por una Comisión Central del Proyecto integrado por los diferentes coordinadores de área de la UEP principal. En algunos casos se prevé la integración a las comisiones evaluadoras a miembros de otras dependencias involucradas (ej. DSA-MGAP, DINAGUA-MVOTMA, DINAMA-MVOTMA, institucionalidad ampliada sectorial, etc.). Estas instancias han sido incorporadas al proceso de preparación del presente Proyecto y la estructura evaluadora de los sub-proyectos a ser evaluados se ha creado en base a esta importante experiencia.
34. Independientemente de su naturaleza, todos los sub-proyectos propuestos para financiación estarán sujetos al sondeo inicial sobre la base de una lista restrictiva y una lista de verificación. La lista restrictiva será utilizada para evitar que se presenten sub-proyectos (o componentes seleccionados dentro de los mismos) que puedan no calificar ya que impliquen actividades prohibidas, tales como: inundación o conversión de áreas de bosques nativos o pasturas nativas de alto valor para la biodiversidad para otros usos; usos de agroquímicos ilegales; drenaje de humedales; o construcción de caminos. La lista completa será especificada en el Manual de Operaciones. La lista de verificación (checklist) de impactos ambientales potenciales también será especificada en el Manual de Operaciones. A continuación se mencionan los acuerdos actualmente existentes respecto a ítems restrictivos:
- a) En áreas del tratado de Ramsar u otros humedales protegidos del país, no se financiarán expansión o intensificación de áreas de riego, agricultura intensiva o extensiva o de ganadería que podrían tener un impacto negativo (a través de cambios en la calidad o cantidad de agua)
 - b) Actividades dentro de Áreas clave para la conservación de la diversidad biológica como Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBAs), Áreas bajo el marco de las iniciativas de UNESCO, serán evaluadas en conjunto con DINAMA
 - c) Represamiento de aguas superficiales que inunden bosque nativo o asociaciones nativas de sabana con Áreas de Alto Valor para la Biodiversidad; las áreas prohibidas se deben identificar en base de la utilización del Sistema de Información Geográfica SIG con claras delimitaciones utilizando coordenadas geográficas que permitan la identificación a campo mediante dispositivos GPS (sistema de posicionamiento geográfico)
 - d) Conversión de áreas de alto valor de biodiversidad a otros usos tales como tajamares, praderas exóticas, o cultivos (estas áreas se definen geográficamente con el SIG y se establecen las coordenadas geográficas que se verá facilitada la identificación a campo mediante el uso del GPS)
 - e) Construcción de caminos
 - f) Uso de agroquímicos ilegales en Uruguay y/o prohibidos por las reglas del Banco
 - g) Uso de pesticidas o compra de aplicadores de pesticidas

- h) Apoyo a fumigación con herbicidas y agrotóxicos y/o agroquímicos
- i) Apoyo y adquisición de agrotóxicos y pulverizadores
- j) Cultivo y mantenimiento de especies transgénicas
- k) Plantaciones de especies forestales exóticas con excepción de sombra y abrigo
- l) Apoyo a monocultivos de especies forrajeras/herbáceas en áreas prioritarias para la diversidad biológica
- m) Apoyo a actividades de dragado y drenaje en áreas de conservación
- n) Rectificación y represamiento de cursos de agua en áreas de conservación
- o) Utilización de áreas en desacuerdo con la aptitud edáfica
- p) Adquisición de tierras
- q) Depósitos de desechos no reciclables y/o tóxicos
- r) Apoyo a desmontes
- s) Comercialización de especies bajo apéndice I de CITES
- t) Patentamiento de especies
- u) Bioprospección con fines medicinales, nutricionales u otros

Se prevén pocos sub-proyectos que por su tamaño puedan requerir aprobación de una EIA de DINAMA. Por el fuerte énfasis del proyecto en el componente agua que será el eje central del mismo, en el Manual Operativo se especificaran las características plausibles de inversiones en suministro, almacenamiento y distribución de agua, para maximizar su uso y potencializar la sustentabilidad en el uso del recurso. La lista restrictiva especificara las actividades prohibidas como el represamiento de cursos de agua, entre otros aspectos. Asimismo, el proyecto evaluara positivamente mediante la lista de verificación al buen uso del agua, al manejo del suelo con riego y al potencial de la aplicación de efluentes al suelo como forma de reciclado y aprovechamiento de nutrientes y al establecimiento de humedales artificiales para proteger cursos de agua receptores de efluentes.

Procedimientos

Todas las propuestas serán sondeadas por la UEP, sobre la base de la “lista restrictiva”, la lista de verificación y otros procedimientos que serán especificados en el Manual Operativo (así como también todas las actualizaciones que demande la Ley). Previo a ello el MGAP promoverá a través de las herramientas de recepción de información, aquellas actividades en sintonía con los objetivos del proyecto y evitará todas aquellas medidas no aceptables. Aquellas relacionadas con el componente riego deberán ser aprobadas por la DINAGUA del MVOTMA con respecto al diseño de estructuras y derechos de agua (en virtud del decreto 16.858). Se requerirá también la aprobación de la DSA del MGAP-RENARE en virtud del Decreto 15.239 para la propuesta de uso y manejo del agua y del suelo. También deberán obtener esta última aprobación los sub-proyectos de agricultura extensiva, si es que existiesen. Debido a las demoras en la pronunciación de dichos organismos se prevé la integración de miembros de las diferentes instituciones a la Comisión Central de Evaluación de proyectos. Los sub-proyectos que excedan el tamaño mínimo y las especificaciones técnicas definidas en el Decreto 349/005 de reglamentación de la ley de EIA 16.466, deberán ser presentados a la DINAMA-MVOTMA. Esta oficina realiza una revisión estándar y emite su decisión sobre la “clasificación” auto-determinada de la propuesta. En caso de una clasificación B o C, especificara el tipo de EIA necesaria. Si bien el Proyecto no prevé ningún tipo de iniciativa de este tipo el Manual Operativo contara con los lineamientos para estos casos potenciales. Esta directiva será enviada al MGAP-UEP para su gestión. La UEP será responsable de coordinar la contratación de un estudio de impacto ambiental para los proponentes interesados de acuerdo con las normas de la DINAMA (en coordinación con las dependencias del MGAP que estén involucradas) y consistente con las especificaciones de evaluación ambiental del proyecto según se

define en el Manual de Operaciones. La supervisión de todos estos procedimientos será responsabilidad de la DINAMA.

Consultas sobre Temas Ambientales

Se realizaron consultas sobre la incorporación de dimensiones ambientales en el diseño del Proyecto, así como también las cuestiones tecnológicas y de capacidad requeridas para obtener los impactos deseados. Hasta la fecha se ha consultado con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Economía, Universidad de la República (Facultades de Agronomía y Facultad de Ciencias), Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Instituto Nacional de la Leche, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Aves Uruguay, Alianza del Pastizal, CARBOSUR, CONAPROLE, Cooperativa Agrarias Federadas, FUCREA, Comisión Nacional de Fomento Rural, SARAS (Instituto Sudamericano para la Sustentabilidad y la Resiliencia).

En acuerdo con el Ministro Tabaré Aguerre el Banco Mundial llevo a cabo una consulta con el sector privado el 1 de abril del 2011 enfocado en el diseño del presente proyecto (DACC) con el fin de obtener insumos para mejorar el diseño. De dicha reunión resultaron importantes contribuciones y participaron instituciones claves del sector agropecuario uruguayo que enfrentan los desafíos de un mejor manejo de los recursos naturales y adaptación a la variabilidad climática; entre ellas participaron: el Centro Cooperativista Uruguayo, la Universidad de Montevideo, la Asociación Uruguaya Pro-siembra Directa, la Alianza del Pastizal (cuyo representante es también asesor y productor Crea), CARBOSUR, INALE, Plan Agropecuario, Asociación Rural del Uruguay y Agromercados.

Las organizaciones de productores tendrán una fuerte participación en la ejecución del Proyecto; recibirán asistencia técnica, serán fortalecidas en sus capacidades y colaboraran en la ejecución de los sub-proyectos. Asimismo, el componente 1 (SNIA) les brindara información relevante para la toma de decisiones sobre el manejo de recursos naturales en los predios de sus asociados. Es por ello, que se considera que el Proyecto presentado será altamente participativo y los temas ambientales serán un tema central en estas instancias participativas.

Capacidad y Competencia Institucional

El Proyecto será ejecutado por el MGAP que ya cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos con financiamiento del Banco Mundial, en particular el aún vigente DACC y su antecesor Proyecto Producción Responsable. La estrecha relación generada (a través de la implementación de Producción Responsable) entre el MGAP y la institución de competencia ambiental nacional - DINAMA, asegura que el nuevo Proyecto solo podrá incrementar las sinergias entre ambas instituciones.

La implementación de los procedimientos ambientales del Proyecto y el monitoreo asociado junto con la evaluación previa y posterior dependerán principalmente de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). La UGP estará en condiciones de contratar especialistas que brinden asistencia en las diversas fases de los ciclos de sub-proyectos y además tanto la DGRN como la DGDR cuentan con especialistas en diferentes temáticas ambientales que estarán a disposición del Proyecto. Ambas direcciones incrementaran el personal asignado y conformaran un equipo multi-disciplinario dedicado a la implementación del Proyecto, lo que aseguran el correcto abordaje de las temáticas ambientales del Proyecto. Adicionalmente, los sub proyectos que evaluara la UEP serán preparados y presentados por técnicos de campo que pasaran por una instancia de capacitación y acreditación por el MGAP que incluirá la temática ambiental.

- v) El Proyecto tendrá una UEP ubicada en la Dirección General de Secretaria del MGAP cuyo cometido, entre otros, es el de asesorar en temática multidisciplinaria y específica que así se determine según

las necesidades ministeriales; Difundir los logros vinculados con los cometidos sustantivos del Inciso a través de medios físicos y electrónicos y propiciar la presencia del Ministerio en exposiciones o eventos similares; y Asistir a la jerarquía ministerial en acciones de relacionamiento público. En esta misma dirección se encontrara ubicado tanto el SNIA como el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG); este ultimo financiado con recursos del Banco Mundial y con una excelente evaluación final.

- w) Las competencias y las capacidades de tanto la DGDR como de la DGRN serán reforzadas para permitir una mejor formulación e implementación de las dimensiones de conservación del suelo, agua y trabajo con los productores y sus asociaciones y además se proporcionará capacitación especializada al personal técnico y se ofrecerán servicios de asistencia técnica a los productores agropecuarios y sus asociaciones, prestando especial atención al fortalecimiento de la capacidad de las instancias regionales que se espera puedan brindar mayor y mejorada asistencia técnica a los productores y sus asociaciones, en especial en cuanto a los predios en el territorio a través de la visión de cuencas y microcuencas para sugerir acciones grupales que puedan formular propuestas que tratan debidamente las dimensiones ambientales.
- x) Por todo lo antes expuesto, se concluye que las cuestiones del Proyecto serán debidamente atendidas, que la toma de decisiones ocurrirá a un alto nivel jerárquico, que existen las previsiones necesarias en caso de improbables sub-proyectos que requieran de Evaluación de Impacto Ambiental, y que no existen riesgos de transformación de hábitats naturales, ni manejos de agroquímicos, ni transformación de bosques. En el caso de que cualquier obra exista algún hallazgo arqueológico la misma será suspendida y se dará lugar a los especialistas nacionales en la materia.

Anexo – Marco Legal Ambiental del Uruguay Ampliado

- **Ley General de Protección del Ambiente** (Ley 17.283, año 2000) que provee el marco general para todos los aspectos ambientales en Uruguay, reglamentando el artículo 47 de la Constitución de la República donde se declara de interés general la protección del ambiente y establece el deber genérico de las personas de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación ilícitas al ambiente. En el marco de esta Ley se crean diversas leyes y sus reglamentaciones. Entre ellas se destaca, y de relevancia para el proyecto en cuestión, la **Ley de Evaluación de Impacto Ambiental** (Ley 16.466, comúnmente llamada Ley de EIA) de enero de 1994; y la **Ley de Creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas** (Ley 17.234, del año 2000).
- Uruguay ratificó la **Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático** (CMNUCC) por Ley 16.517 del 22 de julio de 1994.
- El grupo de trabajo en medio ambiente produjo el **Acuerdo Interpartidario de Medio Ambiente**, el cual presenta cuatro ejes estratégicos: Gestión Ambiental, Cambio Climático, Participación Pública e Institucionalidad Ambiental, e identifica líneas de acción acordadas en cada uno de estos ejes. Dentro del eje estratégico de gestión ambiental se incluye el análisis de factibilidad de distintas alternativas de reutilización de los residuos sólidos urbanos atendiendo las distintas escalas de generación de los mismos; a la vez de generar mecanismos de incentivos para su valorización. En el área estratégica de gestión ambiental de la producción se acordó la necesidad de buscar mecanismos de promoción institucional donde se considere el concepto de Producción mas Limpia como un aspecto importante de los mecanismos de promoción de inversiones. En el área de cambio climático, se acordó la importancia de las acciones de mitigación de las emisiones de GEI, así como el apoyo al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la implementación de su Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. En el área de institucionalidad ambiental, se identificó como necesidad de avanzar en la búsqueda de mecanismos de promoción como instrumentos de gestión ambiental (i.e. seguros, créditos diferenciales, exoneraciones a la importación de equipos poco contaminantes, autorizaciones diferenciales en el territorio para equipamientos de baja contaminación, etc)
- El **Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático** (PNRCC), aprobado y presentado por el Poder Ejecutivo a principios de 2010, es el instrumento que el gobierno del Uruguay y el Congreso de Intendentes han establecido para incorporar el cambio climático a la estrategia de desarrollo sostenible del Uruguay a largo plazo. Fue elaborado en forma interinstitucional y participativa, como un marco estratégico que propone las líneas de acción y medidas necesarias para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el Uruguay y para lograr la adaptación de la sociedad y los sectores productivos a los impactos derivados de la variabilidad y el cambio climático. Dentro de las líneas estratégica de acción se encuentra el apoyo a emprendimientos para la mitigación de emisiones GEI, investigación en las tecnologías más apropiadas para las condiciones locales, fortalecimiento institucional (para I+D, así como O&M de estas iniciativas), adecuar el marco de políticas y legal para iniciativas de mitigación.
- El **Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible**, que tiene por objetivo general identificar, coordinar, integrar y potenciar un conjunto de acciones, programas y proyectos tendientes a prevenir y minimizar los impactos al ambiente derivados de la producción y del consumo. Pretende constituirse en una herramienta de apoyo a la coordinación y planificación de acciones para avanzar en la incorporación efectiva de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo nacional y fue elaborado en un amplio proceso de consulta donde participaron miembros del sector público, privado, instituciones académicas y de investigación, y sociedad civil. El Plan plantea una serie de líneas estratégicas transversales a todos los sectores productivos, entre ellas se encuentra la protección de las fuentes de agua (estrategia T1), la diversificación de la matriz energética (Estrategia T2), fortalecimiento de las capacidades nacionales y de los instrumentos para promover la eficiencia y la mejora en le desempeño ambientes de los sectores productivos (Estrategia T3), gestión ambientalmente adecuada de residuos y efluentes (Estrategia T5).

Además plantea líneas de acción estratégicas para sectores prioritarios, incluyendo la promoción de prácticas y producción más limpia en la cadena láctea y cadena cárnica, entre otras. Dentro de las medidas identificadas para cada uno de estos sectores se encuentra la promoción de prácticas de prevención de la contaminación y de la gestión sostenible de los recursos naturales, el mapeo de riesgos y la gestión ambientalmente adecuada de los residuos. En varios de estos sectores se identificó como necesaria la generación de guías y manuales para orientar a los productores en una producción más limpia y sostenible, así como la generación de indicadores del desempeño ambiental de estos sectores.

- Iniciativas que buscan apoyar a la **pequeña y mediana empresa (PYMES), así como a los emprendimientos locales**. Entre ellas se destacan: (i) el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/GEF/PNUD); (ii) Proyecto Competitividad y Medio Ambiente (MERCOSUR y GTZ) desarrollo sustentable de sector productivo en el MERCOSUR y atendiendo a la reducción de la contaminación ambiental. Su meta es apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) a mejorar su desempeño ambiental, así como a incrementar su competitividad a través de una gestión ambiental adecuada y de métodos para una producción más limpia y eficiente.
- Las distintas iniciativas presentadas ponen en evidencia el interés a nivel nacional de lograr un desarrollo sostenible, mediante el uso de sus recursos naturales pero teniendo en cuenta aspectos económicos, ambientales y sociales. En el centro de estas iniciativas se encuentra la fusión del concepto de “Uruguay País Natural” con “Uruguay País Productivo” con sostenibilidad e inclusión social.

Proyecto de Adaptación al Cambio Climático
Financiamiento Adicional - DACC-AF
“Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático”
Evaluación Social
Actualización Julio 2017

I. INTRODUCCIÓN.....	2
I.1. Descripción del proyecto	2
<i>I.1.1 Antecedentes</i>	<i>2</i>
<i>I.1.2 Objetivos y componentes del proyecto</i>	<i>3</i>
II. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO POLÍTICO, DEMOGRÁFICO, SOCIO-ECONÓMICO, SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL.....	5
II.1. Contexto histórico y político	5
II.2. Caracterización demográfica.....	5
II.3. Caracterización socio-económica general	7
II.4. Caracterización social e identificación de grupos en el sector agropecuario.....	12
<i>II.4.1. Información general sobre las explotaciones</i>	<i>12</i>
<i>II.4.2. Trabajo rural y género</i>	<i>14</i>
<i>II.4.3. Situación de los productores familiares</i>	<i>15</i>
<i>II.4.4. Situación de los colonos</i>	<i>17</i>
II.5. Contexto institucional	20
III. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y JURIDICAS.....	25
III.1. Normativa local, vulnerabilidad y acceso a la tierra	25
III.2. Normativa sectorial y Salvaguardas del Banco	26
III.3. Contexto jurídico vinculado a participación.....	27
III.4. Problemas Sociales Fundamentales.....	28
III.5. Implicancias para el análisis de alternativas y los esquemas de implementación	29
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	29

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la actualización será identificar, analizar y evaluar los potenciales efectos en términos de las actividades del DACC-AF especialmente en relación con los impactos que pudieran producirse vinculados a eventuales procesos de reasentamiento involuntario, según lo descrito en la Política Operacional OP 4.12 del Banco Mundial.

Es por este motivo que, si bien algunos elementos de la descripción del contexto serán útiles para la evaluación del impacto en el proyecto en general, se hará foco en aquellos que puedan ser especialmente relevantes para evaluar el impacto de las actividades previstas en el componente 2 y su incidencia en caso de que se produjera alguno de las acciones establecidas en la OP 4.12

La metodología de evaluación de los sub-proyectos contempla evitar siempre el reasentamiento, por lo que no es esperable que se produzcan situaciones involuntarias por parte de los afectados de adquisición de tierras o desplazamiento de personas. Sin embargo, podrían ser esperables situaciones que generen afectaciones en los inmuebles por la imposición de servidumbres, sea de acueducto, de apoyo de presa o de electroducto, que pueden afectar en lo económico o en limitación parcial de acceso a los recursos en áreas protegidas por ley, por lo que, será necesario considerar los potenciales impactos en los casos puntuales en que pudiera producirse alguno de los tipos de afectación previstos en la OP 4.12. En este sentido, la evaluación contribuyó también al desarrollo del Marco de Políticas de Reasentamiento.

I.1. Descripción del proyecto

I.1.1 Antecedentes

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de la República del Uruguay, ha priorizado políticas de preservación de los recursos naturales, como bien público por excelencia y como factor determinante de la sustentabilidad del modelo agro-exportador y la expansión productiva de los últimos años. Y reconoce que el país es vulnerable a los efectos adversos del cambio climático y de la variabilidad climática. Desde el año 2009 se han identificado medidas de política y acciones conjuntas con otras entidades públicas y con el sector privado para implementar un Plan de Respuesta al cambio climático. En este contexto el MGAP solicitó en el año 2010 el apoyo del BIRF para la preparación de un Proyecto que diera respuesta a esta problemática. En su elaboración participaron las distintas estructuras del MGAP involucradas en la problemática –Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Recursos Naturales y Sistema Nacional de Información Ganadera- y se preparó la propuesta bajo la coordinación de la Secretaría de Cooperación Internacional, en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Proyecto contó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a través del Convenio de Préstamo BIRF N° 8099-UY.

El proyecto DACC fue estructurado teniendo en consideración la experiencia del MGAP en proyectos de características semejantes, además de las lecciones aprendidas por el Banco Mundial en proyectos de manejo de recursos naturales en otros países de la región y el mundo. Cuenta con un Manual Ambiental y Social publicado por el MGAP y el Banco Mundial en mayo de 2011, el cual fue revisado en Mayo de 2014 para incluir la Salvaguarda de Manejo de Plagas OP4.09. El MAYS incluye la descripción del marco normativo aplicado (legislación vigente y salvaguardas del Banco Mundial), los roles y funciones institucionales requeridos y los procedimientos aplicados, conteniendo una guía para una correcta integración de los aspectos ambientales y sociales durante la implementación del Proyecto. Las acciones propuestas por el DACC son:

1. Componentes 1 y 3: desarrollo de herramientas para la toma de decisión y el apoyo a la aplicación de políticas públicas.

2. Componente 2: establece mecanismos para que los proponentes de sub-proyectos prediales conozcan y apliquen las propuestas técnicas que cumplan con los procedimientos ambientales y sociales establecidos y las reglamentaciones legales existentes.

- Una lista restrictiva de actividades no financiables.
- Procedimiento para identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales.
- Actividades de capacitación tanto a técnicos centrales y regionales del MGAP como a técnicos privados.
- El proyecto se rige atendiendo a las especificaciones ambientales y sociales de la legislación uruguaya y las salvaguardas del BM

La ampliación del Proyecto DACC-AF seguirá apoyando a los productores rurales en el uso sostenible de los recursos naturales generando una mayor adaptación a la variabilidad y CC, y promoviendo una modernización de la gestión del MGAP en el área de información y servicios relacionados al clima y los recursos naturales.

Dado que el nuevo alcance incluirá actividades con potenciales efectos vinculados a la Salvaguarda OP 4.12, se consideró necesario actualizar la evaluación social para identificar los efectos que las nuevas actividades pudieran tener en términos de la política de reasentamiento involuntario.

1.1.2 Objetivos y componentes del proyecto

El objetivo del Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y el Cambio Climático es respaldar las iniciativas destinadas a propiciar que los productores adopten prácticas agropecuarias mejoradas, ambientalmente sostenibles e inteligentes en relación con el clima.

El DACC-AF prioriza tres ejes transversales a todos los componentes:

- i) la promoción del riego con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad de agua disponible para la producción y como herramienta para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción ante la variabilidad y CC;
- ii) la intensificación sostenible de la ganadería extensiva, particularmente de los productores familiares y medianos, como forma de mejorar la sustentabilidad económica, ambiental y social de los sistemas productivos más vulnerables; y,
- iii) el manejo sostenible de la biodiversidad, con énfasis en la promoción de tecnologías que permitan aumentar en forma sustentable la productividad del campo natural, impactando sobre un eco-sistema que ocupa unas 10 millones de hectáreas.

El Proyecto tiene 4 componentes:

i) El primero contempla la creación de un Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) en el sector agropecuario con el fin de integrar, sintetizar y generar información fundamental y oportuna en relación con la gestión de recursos naturales, los pronósticos climáticos de corto y mediano plazo, y los posibles cambios e impactos de largo plazo.

ii) El Segundo Componente aborda las inversiones en establecimientos agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima. Por medio de este componente, que será implementado por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se financiará la ejecución de subproyectos impulsados por la demanda, que comprenden inversiones y asistencia técnica.

Algunos de los subproyectos a financiar implicarán exclusivamente mejoras intra prediales que no requieren afectaciones a terceros (por ejemplo, las mejoras en los sistemas de manejo de efluentes en predios de productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía). En otros casos podrán proponerse sub proyectos que excedan un único predio, como los proyectos de riego multipredial, cuyas infraestructuras requieran la afectación parcial de predios pertenecientes a beneficiarios del proyecto o a terceros (por ejemplo, por la instauración de servidumbres de acueducto o eléctricas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de riego multipredial). También eventualmente podría suceder que en un predio del Instituto Nacional de Colonización en el que distintos colonos explotan las diversas fracciones, se propiciara una intervención que los beneficiara a todos pero requeriría que uno de ellos deba relocalizar parte de su actividad -generalmente dentro de la misma colonia- o mejoras que haya hecho, para posibilitar la instalación de infraestructura colectiva en el área técnicamente identificada como única adecuada y que formaba parte de la fracción que habitaba y/o explotaba el colono afectado, en el hipotético caso mencionado no aplicaría la norma dado que las tierras son propiedad del Instituto de Colonización quien las arrienda a los colonos.

A decisión del MGAP toda actividad que implique expropiación en los términos de la normativa local se incluyen en una lista negativa disponible en el Manual Ambiental y Social del DACC-AF, es decir que no serán parte del Proyecto DACC-AF.

iii) El tercer componente considera el fortalecimiento de la capacidad y capacitación de la Unidad Ejecutora. En el contexto de este componente se financiarán actividades destinadas a fortalecer la capacidad de: a) los productores agropecuarios (independientemente del tamaño de su establecimiento) y el personal técnico de los prestadores de servicios de asesoría, para que adopten prácticas de gestión integrada de los recursos naturales e hídricos, y b) el MGAP, en particular la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), para que aplique sus programas de gestión de los recursos naturales y su estrategia sobre cambio climático en el sector agropecuario.

iv) El cuarto componente incluye la gestión, el seguimiento y la evaluación del proyecto. En el contexto de este componente, se ofrecerán los fondos necesarios para a) apoyar el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto para la planificación, coordinación y la gestión eficiente del proyecto; b) coordinar y respaldar el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto; c) apoyar la ejecución de las actividades de capacitación descritas en el segundo y tercer componente, y d) asistir al diseño y la aplicación de una estrategia de comunicación tendiente a divulgar resultados y lecciones aprendidas dentro del país y la región.

Las actividades que podrían dar lugar a algún tipo de servidumbre están vinculadas al segundo componente ya que las distintas propuestas a financiar pueden incluir obras en establecimientos agropecuarios, que pueden implicar para su concreción la afectación parcial de predios de terceros o relocalización de población. Específicamente, esta necesidad podría identificarse para las actividades comprendidas en, los sub proyectos vinculados a las estrategias asociativas de agua para la producción,.

Breve comentario metodológico: Para la actualización de esta evaluación se ha recurrido a información cuantitativa y cualitativa proveniente de las fuentes secundarias citadas en cada caso y se consideraron también las entrevistas mantenidas en Montevideo con representantes del **MGAP** y del Instituto de Colonización, así como de las entrevistas específicas con productores y representantes de organizaciones de productores y de las breves visitas de campo realizadas durante el mes de junio de 2017.

II. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO POLÍTICO, DEMOGRÁFICO, SOCIO-ECONÓMICO, SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL

En los apartados siguientes se hará un breve repaso de algunos aspectos e indicadores que son ilustrativos de la realidad social uruguaya. A su vez, dadas las características del proyecto y, en la medida en que la información esté disponible, se particularizará el análisis enfocándose en los grupos de mayor vulnerabilidad: mujeres y pequeños productores rurales.

II.1. Contexto histórico y político

Uruguay, desde comienzos del siglo XX, se caracteriza por haber desarrollado un amplio estado de bienestar y una sólida democracia. De este modo, se ha posicionado en América Latina, como uno de los países con mayores niveles de igualdad, altos ingresos per cápita y casi nulos niveles de extrema pobreza. Gran parte de estos logros se sintetizan en el hecho de que el país ostenta el mayor puntaje en el índice de desarrollo humano del subcontinente.

Desde el año 1985, luego de un largo período de dictadura militar, se ha desarrollado una democracia estable que continúa hasta nuestros días. Luego de alternancias entre gobiernos presididos por el Partido Colorado y el Partido Blanco, en 2005 asume por primera vez un gobierno del Frente Amplio. Así se sucedieron las administraciones de Tabaré Vázquez (2005-2010; 2015 -) y José Mujica (2010-2015).

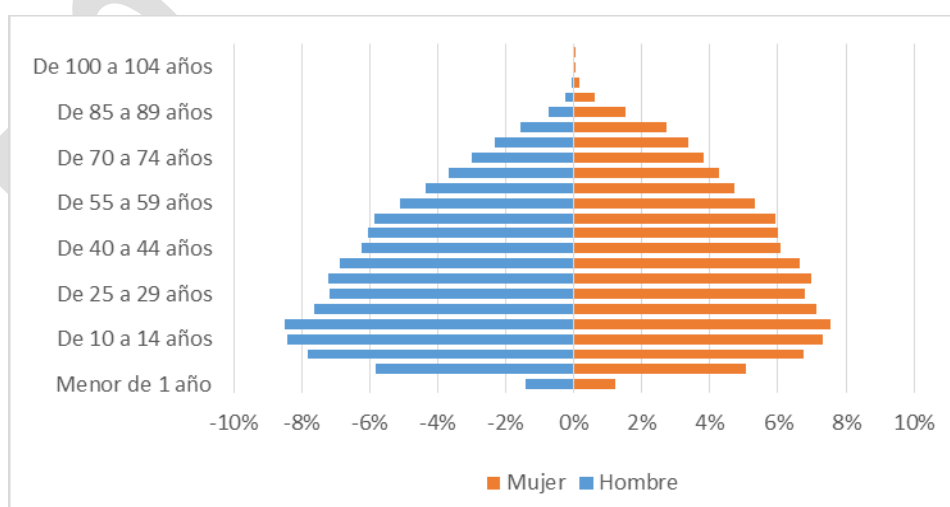
La estrategia económica del país combina la existencia de un modelo agro-exportador dinámico con estado de bienestar responsable de la redistribución de los beneficios económicos. Luego de la fase de declive económico que ocurrió hacia fines del siglo pasado y que culminó en la crisis de 2002, la senda del crecimiento se retomó rápidamente. Hacia finales de 2014, el país acumuló 11 años ininterrumpidos de crecimiento económico a niveles que nunca se habían percibido en los últimos 50 años (Amarante e Infante, 2016: 15).

II.2. Caracterización demográfica

En este primer apartado se describirán las principales características demográficas de la estructura social uruguaya. Los datos provienen del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2011.

Principalmente se abordarán tres aspectos: la estructura por sexo y edad; la ascendencia étnica y la distribución urbano / rural⁴.

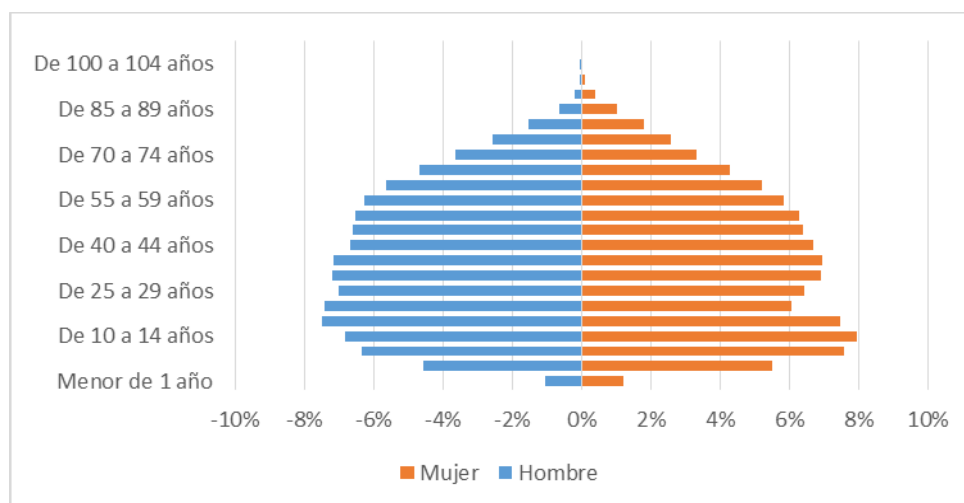
Gráfico 1. Pirámide poblacional urbana. Uruguay 2011.



⁴ Es necesario aclarar que cuando nos referimos a población rural en base al Censo, se está hablando de residentes en el medio rural disperso (no urbano), independientemente de si trabajan en actividades rurales.

Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y Vivienda 2011

Gráfico 2. Pirámide poblacional rural. Uruguay 2011.



Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y Vivienda 2011

Como puede observarse la estructura poblacional urbana presenta una forma clásica de tipo piramidal, en donde los grupos etarios que adquieren mayor peso son los jóvenes, mientras que al aumentar la edad de la población la participación disminuye para ambos sexos, aunque con mayor intensidad para los varones. En el caso de la población rural, pareciera mostrarse una estructura etaria más “achatada” y envejecida, con una mayor participación del grupo de 40 a 59 años y una menor participación de los grupos “jóvenes”.

Por otro lado, Uruguay puede caracterizarse como un país de población principalmente urbana, ya que sólo un 5% de la misma reside en áreas rurales.

Respecto a la ascendencia, étnica la población afrodescendiente se constituye como una de las principales minorías, específicamente en el sector urbano. Aquellos que se definen como descendientes de población indígena, también se constituyen como un grupo minoritario de expresión principalmente urbana.

Población indígena:

La identidad nacional del Uruguay, así como el imaginario colectivo prevalente, reconocen como una realidad el exterminio indígena, que tuvo como hito principal la matanza ocurrida en el Arroyo de Salsipuedes en el año 1831. Luego de este hecho, se inició un proceso caracterizado por la invisibilización indígena y la supremacía de la cultura europea, hechos que determinaron la conformación de la identidad nacional.

Para fines de los años 80, comenzaron a hacerse visible en América y en la región, la reemergencia de colectivos indígenas, y Uruguay no es la excepción. Grupos de ascendencia indígena comienzan a reivindicar su existencia a partir de 1989. Varias de estas asociaciones primero reivindican la descendencia indígena y luego se autodefinen como indígenas y no como descendientes, en un proceso paulatino de auto identificación y búsqueda de la identidad.

La población con ascendencia principalmente indígena, representa el 2,37% del medio urbano del Uruguay y el 1,55% del medio rural. El dato expuesto surge del Censo 2011, donde por primera vez se incluye la consulta sobre ancestralidad, a través del mecanismo de auto identificación y reconocimiento.

Con base a una Evaluación preliminar realizada por el equipo del Banco Mundial, durante la preparación del Proyecto REDD, es dable indicar que existe un debate en la actualidad en Uruguay vinculado a organizaciones de pueblos indígenas que se encuentran en proceso de autodeterminación. También en forma preliminar, se ha observado una relación entre estas organizaciones y las actividades REDD vinculadas principalmente a expectativas de recuperación de áreas a proteger en Montes del Quehuay y Colonia Siri, así como de grupos organizados en Tacuarembó, Soriano, Paso de los Toros y Tarariras, relacionados con acciones de

concientización y educación ambiental. Con respecto a la posibilidad de interacción de estos grupos con el Proyecto, el MAGP determinó que no existen grupos indígenas en las áreas de intervención del DACC-AF.

En consonancia con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Proyecto no genera interferencia ni coexistencia con comunidades indígenas y siempre apoyará proyectos presentados por la demanda asegurando la transparencia.

Asimismo, dado que únicamente se van a ejecutar los proyectos en inmuebles donde los productores o las organizaciones mantengan un vínculo jurídico, y considerando que de acuerdo a lo que se explicitará en las formas de tenencia de la tierra el catastro nacional se encuentra totalmente ordenado, no existiendo inmuebles donde no se pueda establecer correctamente la procedencia, no se corren riesgos de que a través del Proyecto se actúe en padrones que sean objeto de reclamación de una comunidad indígena.

Cuadro 1. Ascendencia étnica según área. Uruguay 2011.

ASCENDENCIA PRINCIPAL	Urbana		Rural	
	Casos	%	Casos	%
Afro o Negra	144658	4,65	5031	2,86
Asiática o Amarilla	6953	0,22	370	0,21
Blanca	269829 5	86,7 5	15280 0	87,0 1
Indígena	73723	2,37	2729	1,55
Otra	4631	0,15	133	0,08
Ninguna (no hay una principal)	52382	1,68	940	0,54
No relevado	103073	3,31	12724	7,25
Ignorado	26548	0,85	887	0,51
Total	311026 3	100	17561 4	100

Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y vivienda

II.3. Caracterización socio-económica general

En primer lugar, para dar cuenta de la situación socio-económica en el Uruguay contemporáneo, se analizarán algunos aspectos vinculados al hábitat y la vivienda.

Del total de los hogares más de la mitad está conformada por propietarios y en menor medida por inquilinos y usufructuarios. En el caso rural, el porcentaje de “usufructuarios u ocupantes” aumenta respecto a las

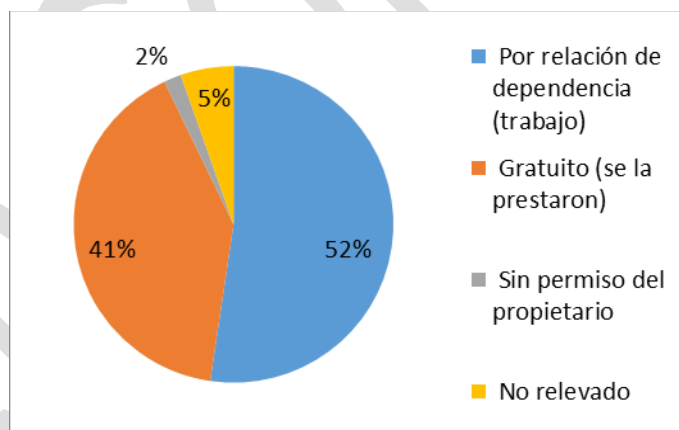
ciudades, alcanzado aproximadamente el 40%. A su vez, es necesario destacar, que dentro de ese porcentaje, sólo un 2% se debe a ocupaciones que se realizan sin permiso del propietario (ver gráfico 3).⁵

Cuadro 2. Tenencia de la vivienda según área. Uruguay 2011

TENENCIA DE LA VIVIENDA	AREA URBANO-RURAL		
	Urbano	Rural	Total
Propietario	57%	51%	57%
Integrante de una cooperativa de vivienda	3%	0%	3%
Inquilino o arrendatario	21%	8%	20%
Usufructuario u ocupante	17%	39%	18%
No relevado	3%	2%	3%
Total	100%	100%	100%

N= 1163748. Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y vivienda

Gráfico 3. Características del usufructuario u ocupante en el sector rural. Uruguay 2011



N= 236882. Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y vivienda

Respecto a las características del espacio habitable, el indicador de hacinamiento permite identificar carencias críticas en el espacio relativo disponible para cada miembro del hogar dentro de la vivienda⁶. En

⁵ De acuerdo a la experiencia del MGAP, es muy improbable que se presenten situaciones de ocupaciones de este tipo en predios a afectar por Subproyectos del DACC. En cualquier caso, cabe aclarar que, si se produjera una situación de este tipo, se aplicarán los principios y procedimientos establecidos en la OP 4.12

⁶ “En un hogar particular existe hacinamiento si la cantidad de personas del hogar con relación a la cantidad total de habitaciones de la vivienda, excluyendo al baño y la cocina, es mayor estricto que dos” (Calvo et al., 2013: 13)

este sentido, tanto en el ámbito rural como urbano, menos del 6% de los hogares presentan una situación crítica, medida de esta manera.

Cuadro 3. Hacinamiento según área. Uruguay 2011.

Hacinamiento	AREA URBANO-RURAL		
	Urbano	Rural	Total
Sin hacinamiento	92%	93%	92%
Con hacinamiento	6%	5%	5%
No relevado	3%	2%	3%
Total	100%	100%	100%

N= 1163748. Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y vivienda

Ahora bien, al analizar las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de los hogares, pueden vislumbrarse en mejor modo las desigualdades que se configuran entre el sector urbano y rural. En Uruguay, el Instituto Nacional de Estadísticas, mide el NBI a partir de 10 indicadores que se agrupan en 6 dimensiones: vivienda decorosa⁷, abastecimiento de agua potable, servicio higiénico, energía eléctrica, artefactos básicos de confort, educación (Calvo et al., 2013: 14). Como bien describe el cuadro 4, mientras que en el sector urbano aproximadamente un 70% de los hogares satisfacen sus necesidades básicas, esa proporción desciende casi 20 puntos porcentuales para el ámbito rural. Por su parte, a medida que se consideran más necesidades básicas insatisfechas, mayor es número de hogares que ingresan en dicha categoría para el sector rural.

Cuadro 4. NBI según área. Uruguay 2011.

CANTIDAD DE NBI	AREA URBANO-RURAL		
	Urbano	Rural	Total
Sin NBI	68%	49%	67%
Una NBI	19%	22%	19%
Dos NBI	6%	11%	6%
Tres o más NBI	4%	16%	5%
No relevado	3%	2%	3%
Total	100%	100%	100%

N= 1163748. Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y vivienda

⁷ Dentro de esta dimensión, uno de los indicadores es el hacinamiento.

Otro indicador de desigualdad socio-económica entre el sector rural y urbano puede establecerse a partir del nivel educativo alcanzado por la población. Aunque de una forma indirecta, dicho indicador puede dar cuenta del nivel de profesionalización y de calificación en ambas poblaciones. De esta forma, de la población rural, aproximadamente la mitad sólo ha accedido al nivel primario y sólo un 19% al ciclo básico.

En Consulta

Cuadro 5. Máximo nivel educativo alcanzado según área. Uruguay 2011.

MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	AREA URBANO-RURAL		
	Urbano	Rural	Total
Preescolar	3%	3%	3%
Primaria común	33%	55%	35%
Primaria especial	1%	1%	1%
Ciclo Básico	23%	19%	22%
Bachillerato	17%	10%	17%
Enseñanza Técnica/Formación Profesional UTU	5%	3%	5%
Magisterio o Profesorado	3%	1%	2%
Terciario no universitario	2%	1%	2%
Universidad o similar	10%	3%	10%
Posgrado (Diploma/Maestría/Doctorado)	1%	0%	1%
Terciario sin especificar	0%	0%	0%
Nunca asistió	1%	2%	1%
Ignorado	0%	0%	0%
No relevado	2%	2%	2%
Total	100%	100%	100%

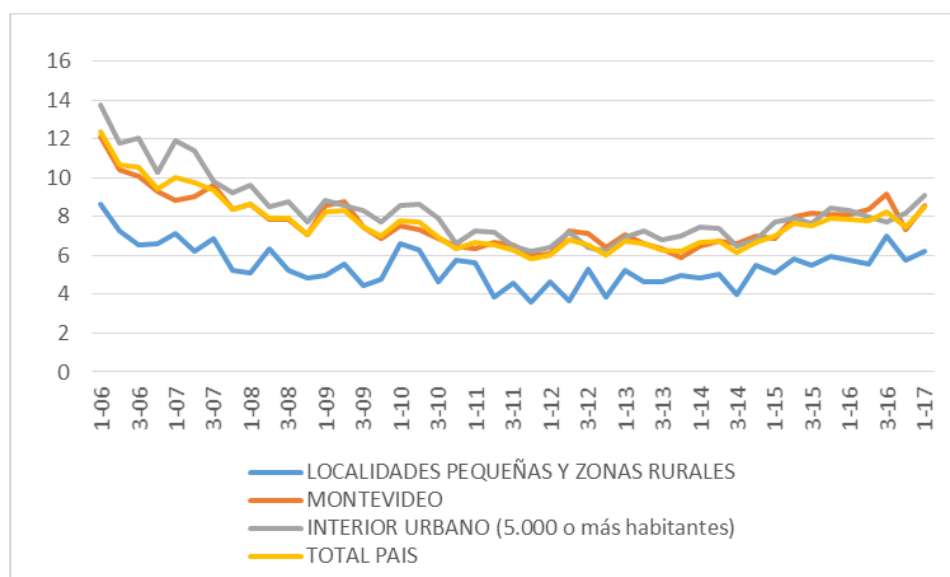
N= 3110978. Fuente: elaboración propia en base Censo de Población y vivienda

Finalmente, los tres gráficos siguientes (4, 5, 6) permiten describir la evolución del mercado de trabajo y las condiciones de vida en Uruguay en el período 2006-2017.

Respecto a la tasa de desempleo, la misma descendió, en términos generales, desde el año 2006 hasta aproximadamente el 2012 (estancándose entre el 6% y 7%) para luego aumentar levemente. En el caso de las zonas rurales, la tasa mantuvo la misma tendencia general, aunque en niveles más bajos y con mayores picos, debido al efecto que ejerce la estacionalidad en el empleo rural. Al observar la misma información, pero cruzada por el sexo, puede observarse en primer lugar que tanto para el total país como para el sector rural, las mujeres presentan mayores tasas de desempleo que los varones. En segundo lugar, los altos y bajos en la evolución de la tasa de desempleo de las mujeres, podrían ser un indicio de un mayor efecto de la estacionalidad de empleo rural para el caso de este grupo, por el que se generan entradas y salidas intermitentes al mercado de trabajo.

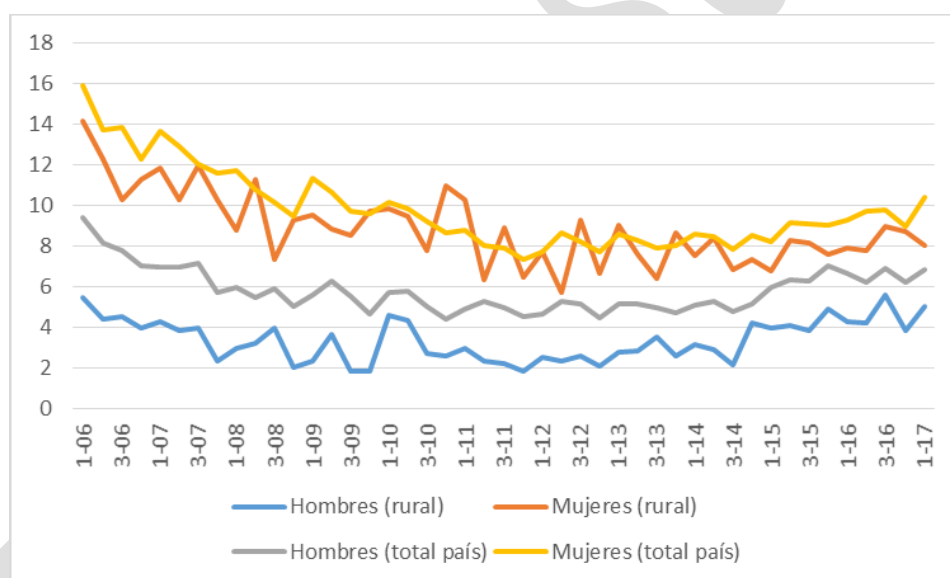
Por último, el cuadro 6, permite caracterizar a la pobreza como un fenómeno que viene en descenso y que adquiere mayor centralidad en los ámbitos urbanos que en los rurales, donde es casi nula.

Gráfico 4. Evolución trimestral de la tasa de desempleo según área. Uruguay 2006-2017



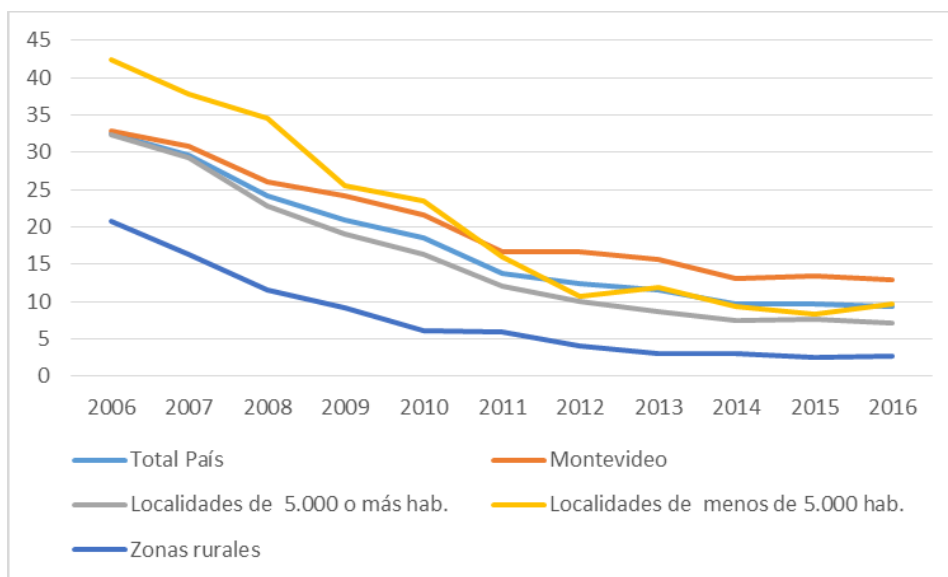
Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 5. Evolución trimestral de la tasa de desempleo según sexo y área. Uruguay 2006-2017.



Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 6. Incidencia de la pobreza en personas según área. Uruguay 2006-2016.



Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH).

II.4. Caracterización social e identificación de grupos en el sector agropecuario

En este apartado especificaremos la información para el sector-agropecuario. Principalmente se utilizarán los datos provistos por el último censo general agropecuario, realizado en 2011 por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y por información secundaria proveniente del Instituto Nacional de Colonización (INC). Complementariamente se recurrirá a otras fuentes de información secundaria que permitirá enfocarse en algunos de los aspectos considerados.

II.4.1. Información general sobre las explotaciones

El cuadro 6 permite observar un resumen de las transformaciones generales que han configurado al sector agropecuario en los últimos 30 años:

- Disminución en el número de explotaciones existentes, pero con una mayor concentración de la tierra.
- i) Relativo sostenimiento de la frontera agropecuaria en los mismos niveles
- 1. Caída de la población agrícola y de la población trabajadora rural, correlacionada con una disminución de la población que vive en la explotación.

Cuadro 6. Evolución intercensal de variables principales. Uruguay 1980-1990-2000-2011

	2011	2000	1990	1980
Número de explotaciones	44.781	57.131	54.816	68.362
Superficie total (ha)	16.357.298	16.419.683	15.803.763	16.024.656
Población agrícola	106.961	189.838	213.367	264.216
Población trabajadora	115.371	157.009	140.430	159.446
Hectáreas por explotación	365	287	288	234
Personas residentes por explotación	2,39	3,32	3,89	3,86
Hectáreas por persona	153	86	74	61
Trabajadores por explotación	2,58	2,75	2,56	2,33
Hectáreas por trabajador permanente	142	105	113	101

Fuente: Censo General Agropecuario 2011 – Resultados definitivos.

Respecto al régimen de tenencia de la tierra, el catastro nacional constituye el registro administrativo de los bienes inmuebles de nuestro territorio, abarcando sus características físicas, geométricas, económicas y jurídicas. En Uruguay, desde el año 1907, su conservación y mantenimiento es el principal cometido de la actual Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

El territorio nacional hoy por hoy totalmente catastrado, permitiendo una correcta identificación de cada inmueble y, por lo tanto, brindando altos niveles de seguridad jurídica. La identificación de los inmuebles se realiza a través del número de padrón, estando registrado en Catastro los planos de mensura de todos los padrones del país.

Asimismo, cada vez que se realiza una transferencia de dominio o sus desmembramientos de un inmueble en el territorio nacional, la misma se inscribe en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria del departamento que corresponda, en el mismo se inscribe con la cédula catastral emitida por la Dirección Nacional de Catastro, y describiendo el inmueble de acuerdo al plano de mensura inscripto. En el caso de inmuebles rurales, también son inscriptos los contratos de arrendamiento.

La mayoría de las hectáreas censadas se encuentran usufructuadas por los propietarios (64%) y en menor medida (26%) bajo el sistema de arrendamiento. Los otros tipos de regímenes son menos frecuentes y no llegan a representar el 10% de las hectáreas. Es necesario aclarar que según las definiciones planteadas por la DIEA para el Censo Agropecuario, se considera 1) en arrendamiento, a la superficie que el productor toma en alquiler o arrendamiento de un tercero, y por cuyo uso debe pagar una cantidad fija (en dinero, producto o trabajo); 2) en pastoreo, a la superficie que el productor toma en exclusividad para pastoreo de animales por un período de 11 meses o más en acuerdo también con un tercero; 3) en aparcería (medianería), a la superficie por cuyo uso el productor debe entregar una parte del producto obtenido o su equivalente en dinero al titular del bien. Usualmente ese pago es proporcional al volumen de producción; 4) posesión (cuando el productor no tiene título de propiedad, ni es promitente comprador, ni realiza ningún pago por la superficie explotada. Esta tierra puede ser de propiedad pública o privada, y su ocupación se produce sin consentimiento del propietario, aunque éste pueda tolerarlo). Los poseedores adquieren derechos a medida

que pasa el tiempo de ocupación, pudiendo prescribir la propiedad luego que se comprueben que han transcurrido 30 años desde la ocupación, meros tenedores, ocupantes precarios, u poseedores, (personas que se encuentran con la tenencia de los bienes con ánimo de dueños. La posesión se diferencia de la mera tenencia que implica tener una cosa en lugar y a nombre de otro como es el caso del arrendatario) y 5) Otras formas, para aquellas tierras cuya forma de tenencia no está comprendida en alguna de las categorías anteriores.

Cuadro 7. Régimen de tenencia en el sector agropecuario. Uruguay 2011.

Régimen de tenencia	Hectáreas	(%)
Total	16.357.298	100
Propiedad	10.483.370	64,1
Arrendamiento	4.304.761	26,3
Pastoreo	519.279	3,2
Aparcería	112.375	0,7
Ocupante	434.853	2,7
Otras formas	502.660	3,1

Fuente: Censo General Agropecuario 2011 – Resultados definitivos.

II.4.2. Trabajo rural y género

Posterior a este análisis general, puede hacerse una descripción que permita observar los diferenciales que se generan en función al género como factor central para comprender las desigualdades. En el cuadro 8 puede apreciarse que del total de productores (aquellos/as que están a cargo de la explotación) únicamente un 20% está conformado por mujeres, proporción que asciende a 33% si consideramos a la totalidad de los trabajadores agropecuarios, es decir, a otras ocupaciones que no están vinculadas directamente con actividad agrícola o ganadera.

Cuadro 8. Productores y trabajadores agropecuarios según sexo

SEXO	Productores		Trabajadores	
	Casos	%	Casos	%
Sin dato	7.509	16,77	-	-
Masculino	28.433	63,49	96.583	66,89
Femenino	8.839	19,74	47.800	33,11
Total	44.781	100	144.383	100

Fuente: Elaboración propia en base a Censo General Agropecuario 2011.

La siguiente tabla se presenta como un resumen de diferentes indicadores que permiten profundizar las desigualdades de género en el mercado de trabajo rural. En referencia al trabajo en el predio agropecuario, tanto las mujeres como los varones lo hacen en la misma proporción, aunque es levemente mayor el número relativo de hombres que son remunerados por dichas tareas. El alto porcentaje de trabajo no remunerado puede estar haciendo referencia a diferentes modalidades de trabajo familiar. En términos absolutos ya se ha mostrado que el trabajo agropecuario está fuertemente masculinizado, siendo los varones mayoritarios en todos tipos de ocupación consideradas. Sin embargo, al centrarse en la composición interna de cada colectivo, puede observarse que las mujeres ocupan levemente en mayor medida, en términos relativos, ocupaciones de mayor calificación como “productor o socio” y “administrador o capataz”.

Cuadro 9. Trabajo, remuneración y ocupación de trabajadores en los predios según sexo. Uruguay 2011.

TRABAJÓ EN EL PREDIO	SEXO			
	Sin dato	Masculino	Femenino	Total
Sí	90%	77%	76%	80%
No	10%	23%	24%	20%
Total	100%	100%	100%	100%
REMUNERADO EN EL PREDIO				
Sin dato	10%	23%	24%	20%
Sí	71%	32%	26%	40%
No	19%	45%	51%	40%
Total	100%	100%	100%	100%
TIPO DE OCUPACIÓN EN EL PREDIO				
Sin dato	10%	23%	24%	20%
Productor o socio	18%	39%	42%	34%
Profesional o técnico	4%	1%	1%	2%
Administrador o capataz	12%	4%	6%	7%
Operador de maquinaria o tractorista	5%	1%	1%	2%
Peón	36%	17%	13%	21%
Cocinero/a	6%	4%	2%	4%
Otros	8%	10%	11%	10%
Total	100%	100%	100%	100%

N = 144.383. Fuente: Elaboración propia en base a Censo General Agropecuario 2011.

Sin embargo, a pesar de lo explicado anteriormente, Vitelli y Borrás (2014), a partir de un estudio basado en el análisis de fuentes secundarias públicas, indican que, si bien para los últimos años del país se registra una mejora en las condiciones de vida de las mujeres rurales respecto a años anteriores, persiste una situación de inequidad respecto a los varones (2014: 276). A continuación, señalamos algunas de las tendencias que les permite a los autores sostener dicho argumento:

- El porcentaje de mujeres ocupadas en el territorio rural continúa siendo sustantivamente menor al de los varones, continuando las primeras dedicándose principalmente a los quehaceres del hogar.
- La proporción de mujeres cuenta propia sin local ni inversión (artesánías, elaboración de alimentos, etc.) duplica a la de los hombres.

- La remuneración de las mujeres que residen en entornos rurales, medida en ingreso horario, representa un 87% del salario medio masculino, demostrando la desigualdad monetaria que se establece entre los géneros.

II.4.3. Situación de los productores familiares

Por otro lado, puede hacerse referencia al grupo de la población agropecuaria que se engloba bajo la categoría de “pequeño productor” o “productor familiar” y que generalmente, junto con los asalariados rurales, presentan mayores niveles de vulnerabilidad. Formalmente, el MGAP, a través de la resolución 527/08, 219/14 y 387/14 ha definido al agricultor/productor familiar como “toda persona física que con o sin la ayuda de otros gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria que no requiere uso directo de la tierra”. Operativamente para ser considerado dentro de dicha categoría deben cumplirse los siguientes criterios:

- Realizar la explotación con la contratación de, como máximo, dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales no familiares (500 al año)
- Explotar en total hasta 500 ha (CONEAT 100) bajo cualquier forma de tenencia
- Residir en la explotación o a una distancia menor a 50 km de la misma
- Ingresos familiares nominales extraprediales sean inferiores o iguales a 14 BPC⁸ promedio mensual
- Productores hortícolas o frutícolas o vitícolas (como producción ppal. declarada), se pueden contratar un equivalente hasta 1250 jornales zafrales anuales
- Productores apícolas (como producción declarada), pueden tener hasta 1000 colmenas. No operando el ítem de superficie y residencia.

Tal como se presenta en los cuadros 10 y 11, los productores familiares, según el Censo General Agropecuario de 2011, representaban a más de la mitad de los productores, pero ocupando 1/8 de la superficie total explotada. A su vez, la mayor proporción de productores trabajan en explotaciones menores a las 100 ha.

Cuadro 10. Datos Generales de productores familiares. Uruguay 2011.

	Total productores	Productores familiares
Cantidad de Explotaciones	44.781	25.285
Área Ocupada (hectáreas)	16.357.298	2.252.506
Superficie media (hectáreas)	365	89

Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) en base a Censo General Agropecuario 2011.

Cuadro 11. Explotaciones explotadas por productores familiares según tamaño. Uruguay 2011.

Cantidad de hectáreas	%
Hasta 20 ha	33%
Entre 20 - 50 ha	21%

⁸ Base de Prestaciones y Contribuciones

Entre 50 - 100 ha	17%
Entre 100 - 300 ha	23%
Mayores de 300 ha	7%

Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) en base a Censo General Agropecuario 2011.

De la totalidad de los productores censados, el MGAP estimaba en 2014 que se había llegado a una cobertura del 90%, al existir 27465 productores familiares registrados⁹. De aquellos registrados, un 36% se corresponde a mujeres y un 64% a varones, siendo 50 años la edad promedio.

Finalmente, siguiendo la definición de productor familiar, algunos autores (Tommasino y Bruno, 2005) han conceptualizado como productores medios a aquellos pertenecientes a explotaciones en donde la mayor parte de la mano de obra es asalariada y, en menor medida, familiar, y grandes aquellos en donde la mano de obra familiar es mínima. Según datos provenientes del Censo Agropecuario de 2000, éstas eran las proporciones de establecimientos familiares, medianos y grandes:

Cuadro 12. Establecimientos según tipo de productor. Uruguay 2000.

Tipo de productor	Número	%
Familiar	39.120	79%
Mediano	6.199	13%
Grande	3.997	8%
Total	49.316	100%

Fuente: elaborado por OPYPA-DIEA, con base en el CGA 2000

⁹ El registro de productores familiares es “un REGISTRO ADMINISTRATIVO que se utiliza con el objetivo principal de identificar personas (que cumplen condiciones de PF) para aplicar POLITICAS PUBLICAS DIFERENCIADAS” (Dirección General de Desarrollo Rural, 2013: 13).

II.4.4. Situación de los colonos¹⁰

Los inmuebles del INC se encuentran distribuidos en 14 oficinas regionales. Dichos inmuebles o colonias son subdivididos en fracciones o parcelas que son entregadas a los colonos para su explotación. Las superficies de las fracciones tienen un tope de 1.000 Has, fijadas por la Ley N° 11.029. Al año 2011, el INC contaba con 191 colonias, 4.731 fracciones y 3832 colonos. Del total de fracciones, aproximadamente más de la mitad se encontraba vendida o en proceso de venta (26.48), mientras que la otra parte se encontraba arrendada (2.041).

Cuadro 13. Características generales de las colonias según oficinas regionales. Uruguay 2011.

OFICINAS REGIONALES	CANTIDAD DE COLONIAS Y/O INMUEBLES	SUP. TOTAL (HAS.)	CANTIDAD DE FRACCIONES	CANTIDAD DE COLONOS
ARTIGAS	11	65584	280	234
CANELONES	37	14152	518	432
CERRO LARGO	9	17773	120	99
FLORIDA	17	44029	390	284
GUICHON	6	37309	175	108
LAVALLEJA	18	8646	231	208
PAYSANDU	15	66525	554	398
RIO NEGRO	3	13583	232	232
SAN JAVIER	11	45003	406	297
SAN JOSE	18	31942	623	534
SALTO	12	57623	423	354

10 Los datos de esta sección provienen de la última información publicada por el INC en la sección de información estadística de su web institucional. Se encuentra en proceso una consulta al INC para determinar si es posible disponer de datos más actualizados para incorporarlos a esta evaluación.

11 El INC dispone de tierras para colonización (banco de tierras) a las que accede de las tres formas previstas en la ley 11029. Independientemente de facultar a INC para expropiar tierras para colonizar, la ley establece que aquellos predios de los que el Estado disponga y que resulten económica o socialmente improductivos podrán ser vendidos en subasta pública y el importe de la venta deberá ser invertido en la compra de nuevas tierras que serán entregadas al INC y destinadas a colonización. Finalmente, el INC tiene prioridad para la adquisición de tierras en el mercado, según lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley 11029 que establece que "Todo propietario, antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100 está obligado a ofrecerlo, en primer término, al Instituto Nacional de Colonización (INC), el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago"

OFICINAS REGIONALES	CANTIDAD DE COLONIAS Y/O INMUEBLES	SUP. TOTAL (HAS.)	CANTIDAD DE FRACCIONES	CANTIDAD DE COLONOS
SORIANO	11	18388	284	247
TACUAREMBO	10	42961	85	94
TARARIRAS	13	29433	410	311
Total	191	492951	4731	3832

Fuente: INC.

Uno de los logros que se ha alcanzado a partir de acciones realizadas desde el INC es la mitigación del despoblamiento en la zona rural. En este sentido, se presentan los porcentajes de residencia según las diversas oficinas regionales.

Cuadro 14. Porcentaje de residencia en la colonia (arrendatarios y prominentes compradores). Uruguay 2010.

REGIONALES	%
ARTIGAS	64,9
CANELONES	52,7
CERRO LARGO	75,4
FLORIDA	64,2
GUICHON	44,6
LAVALLEJA	44,1
PAYSANDU	48,4
RIO NEGRO	70,9
SAN JAVIER	85,6
SAN JOSE	59,2

SALTO	82,3
SORIANO	69,9
TACUAREMBO	87,7
TARARIRAS	83,4

Respecto a la tenencia de la tierra, la última información disponible, proviene del Censo realizado por el INC. Según la ley 11.029, se establecen cinco formas de colonización, de acuerdo al tipo de tenencia de la tierra:

- En propiedad
- En arrendamiento, con precio fijo, variable o progresivo, con opción de compra o promesa de compraventa, o sin ellas;
- En aparcería, con cuota fija, variable o proporcional al producto de la explotación, con opción de compra o con promesa de compraventa, o sin ellas;
- En enfiteusis, cuando la tierra se conceda por un plazo que exceda al del arrendamiento, o en forma vitalicia, con cargo para el enfiteuta de cultivarla y mejorarla y de pagar un canon anual fijo o variable, en metálico o en especie;
- En disfrute precario, cuando la explotación se realice por un período de prueba.

El Censo ha reagrupado las formas de tenencia del colono en cuatro tipos: arrendatario, propietario, prominente comprador, otro. Lamentablemente la única información publicada, se encuentra a partir de la cantidad de hectáreas colonizadas, no así la cantidad de explotaciones. A partir de estos datos, únicamente puede identificarse a las regionales de Soriano, Cerro Largo, Guichón y Tacuarembó, como aquellas con mayor cantidad de hectáreas colonizadas bajo todos los tipos de tenencia. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 13, los departamentos de San José y Canelones, son aquellos que aglomeran una mayor cantidad de colonias y colonos, aunque el tamaño promedio de las fracciones se a menor.

Cuadro 15. Tierras (en has.) pertenecientes al INC según tipo de tenencia y regional. Uruguay 2005.

Suma de Hás.	TIPO TENENCIA				
REGIONAL	Arrendatario	Propietario	Prominente comprador	Otros	TOTAL GENERAL
ARTIGAS	17.993	11.013	523	362	29.890.32
CANELONES	8.701	3.869	182	79	12.831.13
CERRO LARGO	20.424	37.885	1.286	262	59.857.00

FLORIDA	20.874	5.170	297	288	26.628.71
GUICHON	28.695	26.594	912	1.594	57.795.28
LAVALLEJA	9.006	18.330	495	658	28.488.38
PAYSANDU	30.277	7.892	325	949	39.443.00
RIO NEGRO	9.715	3.428	0	253	13.395.27
SAN JAVIER	12.021	7.514	106	494	20.135.10
SAN JOSE	7.654	10.678	344	106	18.782.50
SALTO	24.819	15.061	1.338	13	41.230.06
SORIANO	38.312	23.048	175	736	62.270.78
TACUAREMBO	25.648	22.385	2.182	381	50.595.22
TARARIRAS	4.440	3.490	482	30	8.441.61
TOTAL GRAL.	259.050	196.356	8.647	6.202	470.256.37

Fuente: CENSO INC 2005.

Un aspecto a destacar entre las iniciativas del INC que resulta relevante por lo que implica en términos de potenciales beneficiarios de los subproyectos del DACC AF es el impulso por parte del INC de nuevos "formatos de colonización". En este sentido, si bien sigue siendo válida la estrategia de colonización individual, "las nuevas políticas colonizadoras impulsadas por el INC promueven los emprendimientos asociativos y el surgimiento de empresas colectivas en diversos rubros (sobre todo en el ganadería, lechería y caña de azúcar) con la intención de incorporar tecnología aplicada a los procesos de producción (intensificar la producción ganadera, introducción de tecnologías para cosecha en rubros agrícolas, etc.)."¹² Si bien se estimula especialmente este tipo de estrategia, el personal del INC evalúa cada caso ya que pueden existir productores para los que sea más beneficioso -tanto para el productor en particular como para el resto de la colonia- trabajar en forma individual. Según se explica en la web institucional del INC, "El trabajo asociativo es impulsado como una nueva tecnología organizacional, cuya finalidad es dotar a los emprendimientos de un mayor dinamismo e impacto socioterritorial, maximizando las ventajas comparativas que genera la sinergia colectiva. Por lo general, los emprendimientos se estructuran con dos niveles de asociatividad, en donde las colonias están divididas en fracciones, en las cuales el beneficiario es un colectivo (Nivel INTRA-COLECTIVO), al mismo tiempo, en cada colonia se establecen y disponen bienes e infraestructura productiva que es de uso común, promoviendo la articulación de los colectivos entre sí en diversas áreas (Nivel INTER-COLECTIVO), estimulando la emergencia organizaciones de segundo grado." El INC cuenta con instrumentos que permiten estimular este tipo de asociaciones permitiendo, por ejemplo, a un grupo de pequeños productores o asalariados rurales acceder a un predio bajo la figura de sociedad de hecho, para facilitarles el acceso a recursos o asesoramiento para el que necesitan contar con el predio, y en una fase posterior sí les

¹² Información publicada por el INC en la sección Procesos Colectivos de su web institucional. <http://www.colonizacion.com.uy/content/category/5/212/241/>

exige la conformación de la sociedad con la que operarán de acuerdo con los procedimientos jurídicos vigentes. A su vez esta políticas del INC no sólo fomenta el desarrollo de nuevas asociaciones sino que impulsa la participación en la colonización de grupos ya arraigados en el sector rural. Según señala la publicación institucional del INC, "Los sujetos y protagonistas principales de esta nueva etapa son grupos de trabajo, cooperativas agrarias y de trabajo asociado, asociaciones y sociedades agrarias, sociedades de fomento rural, entre otras formas jurídicas existentes conformadas principalmente por trabajadores rurales y pequeños productores familiares. Se promueve la política de producción asociativa como política de empleo, que tiende a incidir en una transformación cualitativa de las condiciones de trabajo para los beneficiarios y los territorios en donde se localizan los proyectos." Finalmente el INC indica que "se promueven los emprendimientos de Economía Social como herramienta para generar procesos desarrollo local SOSTENIBLES y tendiendo a la equidad social."

En Consulta

II.5. Contexto institucional

En este apartado se hará un repaso por las instituciones y organizaciones estatales y de la sociedad civil que pueden considerarse relevantes en el desarrollo del proyecto.

Instituciones estatales:

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP):

- Entre sus objetivos se encuentran¹³: Contribuir al desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero; Generar los instrumentos normativos y operacionales que permitan a los agentes económicos desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas de información, transparencia y equidad, mejorar el acceso a las tecnologías y elementos necesarios para incrementar la productividad, calidad y competitividad de la producción; Velar y promover el desarrollo rural sostenible, con énfasis en el desarrollo económico, social y ambiental; Promover la articulación interinstitucional para alcanzar una más justa participación de los productores, asalariados y sociedad organizada en la decisión referida al reparto de la riqueza generada y con soporte en la mejora y modernización de la estructura institucional directa y la referida a la de vinculación con el resto de la organización del Estado; propendiendo a diseñar políticas sectoriales diferenciadas e integrales que den condiciones para superar los modelos productivos vigentes desde el pasado.
- Dentro del MGAP, cobra vital importancia la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), que se crea para ser la responsable de diseñar las políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria, con el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con una nueva concepción de modelo de producción, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental y con la participación de los actores en el territorio. Sus poblaciones objetivo son los productores familiares y las organizaciones y grupos de productores¹⁴.
- La Dirección General de la Granja (DIGEGRA), como parte del MGAP, tiene como horizonte organizar la producción granjera, mejorando la estabilidad social y económica y revalorizando el trabajo del productor familiar. Su principal misión es ejecutar políticas granjeras que guíen al sector hacia el logro de la soberanía y seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida de la población granjera mediante la capacitación y extensión de las técnicas de producción, cuidando la conservación de los recursos naturales¹⁵.
- La Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), como parte del MGAP, es responsable de promover el uso y manejo racional de los recursos naturales, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del sector agropecuario y coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica¹⁶.

Instituto Nacional de Colonización

1. Siguiendo el espíritu de la ley 11029, el Instituto tiene como fin “promover el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada

¹³ <http://www.mgap.gub.uy/institucional/ministerio/cometidos-del-mgap>

¹⁴ <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/mision-y-vision>

¹⁵ <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/direccion-general-de-la-granja/institucional/mision-y-vision>

¹⁶ <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/direccion-general-de-recursos-naturales/institucional/mision>

explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”¹⁷.

- a) Dentro de los sectores priorizados por el mismo se encuentran: los productores familiares y sus familias, con dificultades de permanencia en el campo, así como la lógica reproducción generacional en el contexto productivo agrario; los asalariados rurales.
- Los principales objetivos del período actual (2015-2019) son: a) Ampliar el área colonizada y el patrimonio del INC, b) elevar la calidad de colonización, en sus diversas etapas y formas; promoviendo la radicación y el bienestar del trabajador rural y c) mejora de la gestión institucional, particularmente en las áreas priorizadas y principales del INC.
- Debido a la comunidad de intereses entre el acceso a la tierra para la producción familiar y la promoción de estrategias asociativas, la articulación entre ambos organismos se produce a distintos niveles. En el Marco del DACC, cuando productores colonos se presentan a un subproyecto, si los mismos son precarios, se solicita desde el MGAP que se hagan las gestiones para que se les otorgue un arrendamiento, para acreditar la vinculación jurídica con el inmueble por un plazo más extenso. Asimismo, estas organizaciones de productores deben solicitar autorización al INC para desarrollar el sub-proyecto en tierras que son de su propiedad. Cuando Colonización otorga dicha autorización emite una Resolución que es comunicada al MGAP. Esta Resolución es archivada por el MGAP e integra parte de los antecedentes de cada subproyecto que se desarrolle en predios del INC. Por otro lado, el hecho de que haya un representante del INC en el comité de evaluación ampliado asegura la consideración de los aspectos relativos a los objetivos del INC en la evaluación de los proyectos que le competen. Finalmente la presencia del MGAP y del INC en las mesas de desarrollo ofrece también la posibilidad de interactuar con organizaciones de la sociedad civil en la identificación de propuestas productivas o de formas de salvar dificultades propias de la realidad local que estén en consonancia con los objetivos de ambos organismos.

Dirección Nacional del Agua

- Forma parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y tiene como misión mejorar la calidad de vida de los habitantes y asegurar el uso sustentable de los recursos hídricos del país, mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas¹⁸.

Instituto Nacional de la Leche

- Tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible de la cadena láctea del Uruguay, articulando junto a los actores de la cadena, asesorando en rol de experto del sector y facilitando el diseño y la implementación de soluciones de alto valor¹⁹.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias

- Tiene como objetivo generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores. Además del trabajo de investigación el

¹⁷ <http://www.colonizacion.com.uy/Documentos/Actas/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%202015-2019.pdf>

¹⁸ <http://www.siagua.org/organismos/direccion-nacional-aguas-saneamiento-ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial-medio-ambiente>

¹⁹ <http://www.inale.org/innovaportal/v/5406/4/innova.front/mision-vision-y-valores.html>

INIA cuenta con programas de transferencia tecnológicos y mediante sus técnicos tiene presencia en el territorio.

Universidad de la República

- (i) Es la principal institución de educación superior y de investigación del Uruguay. En colaboración con una amplia gama de actores institucionales y sociales, realiza también múltiples actividades orientadas al uso socialmente valioso del conocimiento y a la difusión de la cultura. Es una institución pública, autónoma y cogobernada por sus docentes, estudiantes y egresados²⁰.

Banco de la República

- El Banco de la República Oriental del Uruguay, fundado en 1896, es el banco más importante en Uruguay. Desde su creación, ha jugado en forma ininterrumpida, un rol decisivo en el desarrollo económico del País, manteniendo por más de un siglo una sólida imagen avalada por el Estado Uruguayo, así como por su nivel de patrimonio y su reconocimiento internacional²¹.

Cabe destacar que todas estas instituciones integran órganos de evaluación y consulta como por ejemplo el Comité ampliado de las EAAPs.

Espacios mixtos (nuclear organismos del estado y la sociedad civil)

- Las “mesas de desarrollo rural”, como parte de la Unidad de Descentralización del MGAP, funcionan desde 2007 y están integradas por el Consejo Agropecuario Departamental, un representante de cada una de las cooperativas agropecuarias, un representante de cada una de las organizaciones gremiales agropecuarias y un representante de la Comisión Agro de la Junta Departamental²². Las mismas funcionan como espacio de diálogo entre quienes implementan y diseñan las políticas públicas y la población objetivo (principalmente los productores familiares), permitiendo ajustes a través de la co-construcción y la evaluación de las políticas, medidas e instrumentos (Villalba Clavijo, 2015: 8).

Organizaciones sectoriales e instituciones de la sociedad civil

Las organizaciones en el Uruguay tienen una amplia trayectoria. Según un estudio realizado en el marco del Proyecto Producción Responsable sobre organizaciones del sector agropecuario, una de la más antigua se remonta al año 1840. A esta temprana capacidad de organización social que desarrolló el campo uruguayo, le continúa un período de ampliación y crecimiento sostenido en el cuál fueron surgiendo organizaciones que se constituirían en mecanismos formales de cohesión social en el territorio y de articulación fuera del ámbito local.

Las organizaciones que serán identificadas a continuación, generalmente, se corresponden con instituciones de segundo o tercer orden que nuclean a sociedades, grupos o federaciones de carácter más local.

²⁰ <http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageld/108>

²¹ <https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/institucional/el-banco>

²² <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/unidad-de-descentralizacion/mesas-de-desarrollo-rural/integracion>

Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)

- El INACOOP es quien propone, asesora y ejecuta la política nacional del cooperativismo. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico, social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país. Entre sus principales responsabilidades se encuentra el dar impulso a la formación de los cooperativistas para la gestión socio empresarial y el fomento de la enseñanza del cooperativismo en todos los niveles de la educación pública y privada²³.

Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR)

- La Comisión Nacional de Fomento Rural, gremial de segundo grado, fue fundada el 15 de agosto de 1915, en la ciudad de Minas, a instancias de las Sociedades de Fomento Rural y por la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida del medio rural. En este sentido, la Institución protagonizó acontecimientos que marcaron la vida del país, como el desarrollo de la agremiación, el cooperativismo, la colonización, las agroindustrias, los planes de producción y la renovada acción de fomento rural de las últimas décadas.
- b) Nuclea a 98 entidades de primer grado (Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias y otras formas organizativas de base) las que a su vez agrupan e irradian su acción sobre unos 15.000 productores familiares de todo el Uruguay, dedicados a los más diversos rubros agropecuarios.
- Es la principal organización representativa de pequeños y medianos productores del medio rural, a través de las organizaciones de base que los nuclean en todo el país²⁴.
- Dicha organización tiene una rica historia de relacionamiento con el Gobierno y es de las que ha apoyado el proceso de desarrollo a través de sus organizaciones de base.

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)

- Representa a una red integrada por decenas de cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural del Uruguay con más de 13.000 productores asociados, distribuidos en todo el territorio nacional.
- Como agente económico muestra una importante gravitación en la economía del país, sobre diferentes cadenas de valor: ganadería, agricultura, lechería, granja y floricultura²⁵.

Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU)

- Es la entidad de representación del cooperativismo de trabajo asociado del Uruguay, reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo en la búsqueda de la transformación de nuestra sociedad en base a los valores y principios cooperativos. Esta tarea la realiza a partir de fuertes vínculos solidarios con otras organizaciones de trabajadores y de la economía social.
- Su misión es representar y promover a las Cooperativas de Trabajo como opción organizativa más justa y exitosa que las de Capital articulando su accionar junto con otras organizaciones del mundo del trabajo.

²³ <http://www.inacoop.org.uy/institucional/>

²⁴ http://www.cnfr.org.uy/nosotros.php#.WV7R9-U1_IU

²⁵ http://www.caf.org.uy/site/?page_id=43

Aportar a la construcción de un país más libre y solidario a través de la difusión de la autogestión del trabajo²⁶.

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP)

- Es la organización de representación y defensa gremial del movimiento cooperativo uruguayo. Desde su nacimiento en 1988, la Confederación nuclea a la totalidad de las instituciones representativas de los sectores cooperativos existentes en el país, lo que la convierte en una organización con una amplísima base, integrada por personas de las más diversas extracciones sociales, económicas y políticas²⁷.
- Dentro de sus socios se encuentra la CAF y la FCPU. Tiene un vínculo de cooperación con el INCACOOP.

Asociación Rural del Uruguay (ARU)

- Es la institución más antigua del país en materia agropecuaria: es privada, sin fines de lucro, de carácter nacional, integrada por productores, que ha tenido y tiene por objeto la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas, la promoción de los trabajadores rurales en todos los planos humanos, éticos, culturales y económicos, la unidad y armonía en el esfuerzo de los que se dedican a la explotación agropecuaria, la defensa del interés nacional a través del esfuerzo del medio y del trabajo agropecuario²⁸.
- Está integrada fundamentalmente por los productores empresariales de mayor tamaño del país y tiene injerencia en el sector agro-industrial (Riella et al., 2014: 241).

Federación Rural (FR)

- La Federación Rural es una Institución federativa de Asociaciones de productores rurales.
- Sus objetivos son fomentar el aumento y mejora de la producción agropecuaria para lograr su carácter intensivo; el cuidado y la conservación del suelo; la radicación de la familia en el medio rural; una distribución equilibrada de la producción del país, entre los medios urbanos y rurales e impulsar la creación de un organismo gremial que conjuntara a todas las fuerzas ruralistas con el objetivo básico de defender los intereses de la producción agropecuaria y los derechos de hombres y mujeres que trabajan la tierra, y una militancia política activa²⁹.

Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA)

- Integra el PIT-CNT y la Unión está compuesta por una diversidad de sindicatos de trabajadores y asalariados rurales nucleados en torno a un rubro, una región o una empresa. Los Sindicatos que conforman este colectivo son: Unión de Trabajadores del Azucareros de Artigas (UTAA), Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), Sindicato Único de Obreros Rurales y Agroindustriales (Sudora); Unión de Trabajadores Rurales e Industriales de Azucitrus (Utria); Organización Sindical de Obreros Rurales (Osdor); Sindicato de Trabajadores de la Citricultura y Afines (Sitracita); Sindicato Único de Trabajadores

²⁶ <http://www.fcpc.coop/nuestra-institucion/vision-y-mision/>

²⁷ <http://www.cudecoop.coop/index2.php?controlador=noticia&accion=ver¬icia=129>

²⁸ <https://www.aru.com.uy/institucional/informacion-institucional/>

²⁹ <http://fr.org.uy/que-es-federacion-rural/>

del Arroz (Sutaa); Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Afines (Sutta); Unión de Trabajadores del Sur del País (Utrasurpa), que nuclea a trabajadores de los sectores vinculados a la granja; Sindicato de Trabajadores de Flores (Sitraf), sindicato local que nuclea trabajadores de la ganadería, particularmente esquiladores y Sindicato de Trabajadores de Arándanos (Sitraa)³⁰.

Como se señaló al inicio de esta sección, las organizaciones citadas son de segundo y tercer grado y nuclean a organizaciones de carácter más local. Esas organizaciones locales suelen tener un importante arraigo en la comunidad y en algunos casos asumen funciones sociales o culturales además de económicas. Las sociedades de fomento, por ejemplo, de gran tradición en ciertas zonas, no están habilitadas para el desarrollo de ciertas actividades económicas. En algunos casos entonces se asocian con otras cooperativas y es esta entidad asociativa de segundo grado la que gestiona el desarrollo e implementación de proyectos colectivos (a veces a través de sistemas multiprediales y otras veces destinando un campo de propiedad común para una actividad que beneficie a todos los socios o aquellos que deseen participar). La larga tradición de este tipo de organizaciones y su presencia en la vida diaria de los productores contribuye a la generación de confianza. En algunos casos estas organizaciones prestan servicios de asesoría contable (o directamente ofrecen a sus socios como servicio, los trámites correspondientes a seguridad social o a cumplimiento de obligaciones fiscales). Si bien en un entorno con un alto nivel educativo esto podría tener importancia relativa, en un contexto, como el que se describió en el punto anterior, en el que un sector importante de la población rural no tiene formación secundaria completa, la presencia de este tipo de instituciones en territorio contribuye a reducir la vulnerabilidad por lo menos en relación con los impactos derivados de afectaciones. Si bien la relación con las organizaciones puede variar de un productor a otro, la presencia de éstas en el territorio y el conocimiento por parte de sus socios de que frente a alguna dificultad administrativa o legal tienen a quién recurrir, es un aspecto favorable en el marco del tema en análisis.

III. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y JURIDICAS

III.1. Normativa local, vulnerabilidad y acceso a la tierra

El Instituto Nacional de Colonización, fue creado mediante Ley 11029 y sus modificatorias (18187 y 18756). En el artículo primero de la Ley 11029 se establece que "A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural".

La Política del INC busca favorecer el acceso a la tierra por parte de los asalariados rurales, estimulando las estrategias asociativas para acceder al arrendamiento de predios para explotar en forma común. A su vez en el marco del Proyecto, grupos de asalariados colonos en situación de "precariedad" pueden presentar una propuesta para desarrollar en un campo del INC, la que sin embargo, de acuerdo a lo informado por el personal del INC entrevistado, en algunos casos se reduce a un año este precariado y se pasa a un arrendamiento por diez años, con la condición de que los asalariados hayan confeccionado la personería jurídica. De esta forma se estimula por un lado el asociativismo y al mismo tiempo se les permite avanzar más rápidamente en la concreción de los proyectos que pretenden implementar en el predio.

En relación con la equiparación del rol de la mujer en el contexto rural, uno de los mecanismos adoptados recientemente por el Instituto Nacional de Colonización se propone contribuir a revertir una inequidad que se daba de hecho y que la propia normativa de alguna forma respaldaba. La introducción de la cotitularidad de las mujeres en las nuevas adjudicaciones de los predios afectados a la Ley N° 11 029 además facilitar el

³⁰ <http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/union-nacional-de-asalariados-trabajadores-rurales-y-afines/>

acceso a la tierra, es el punto de partida para poder acceder al crédito o inclusive a los programas de asistencia técnica. En este sentido, además de incorporar cotitulares en los nuevos contratos que se firman, el INC está invitando a inscribir a los cotitulares también en los casos de los colonos que ya estaban inscritos. Esta iniciativa, que ya lleva 3 años de implementación con buenos resultados, forma parte de las políticas de género en el sector agropecuario impulsadas por el INC y para las cuales trabaja en conjunto con otros organismos y organizaciones, como por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar. Si bien se trata de un avance, el hecho refleja también que el contexto jurídico en este aspecto fue desfavorable por muchos años ya que dejaba a la mujer en una condición de vulnerabilidad frente a la posibilidad de la pérdida del predio ya que sólo su cónyuge tenía derechos sobre el predio frente al INC. Por otro lado, el hecho de no tener la titularidad no le permitía por ejemplo presentarse a ciertos proyectos para capacitarse o para obtener asistencia técnica para aplicar e las actividades del campo.

En el caso de los jóvenes, si bien tanto el INC como el MGAP contemplan entre sus iniciativas favorecer el acceso de los jóvenes a los proyectos y para ello han adecuado normativa específica o creado iniciativas en el caso del MGAP o desarrollado actividades participativas en el caso del INC, la falta de capital suficiente por parte de los jóvenes sigue siendo una dificultad relevante en estos casos, que las herramientas jurídicas impulsadas hasta el momento no han logrado salvar.

III.2. Normativa sectorial y Salvaguardas del Banco

En cuanto a la normativa sectorial propia del Proyecto, el Manual de Gestión Ambiental y Social del DACC no contemplaba la financiación de subproyectos que requirieran expropiaciones, relocalización de población o afectación de su modo de vida. En este sentido, como se señaló en la sección I, en el DACC-AF se prevé solamente la posibilidad de solicitar servidumbres para la realización de algunas actividades que podrían implicar la activación de la OP 4.12 y por lo tanto se ha desarrollado un Marco de Política de Reasentamiento que identifica y describe la normativa de Uruguay vinculada a los impactos establecidos en la OP 4.12, comparándola con ésta para identificar las brechas que pudieran existir y establece la forma de proceder en cada caso articulando la normativa local con lo requerido por la política operativa del Banco.

Ese marco contiene también un marco de procedimiento que indica los pasos a seguir en caso de que, a partir de una acción del proyecto, se restrinja o modifique el acceso a los recursos naturales. La necesidad de generar un marco de procedimiento está dada porque algunas actividades del componente 2 podrían generar algún tipo de restricción de acceso a los recursos, como, por ejemplo, modificar el acceso a los cursos de agua por parte de los productores frentistas. En la práctica, el MGAP lleva adelante acciones que son el tipo de compensación que prevé la OP 4.12. Por ejemplo, en caso de que una toma de agua u otra obra de infraestructura sobre el río restringiera la posibilidad de un productor frentista al río de llevar a beber al ganado en ese punto en particular, se acordaba abrir una picada para que el ganado pudiera llegar al río por otra zona. No obstante, en casos en los que la restricción del acceso al río sea permanente o que inclusive se planea establecer una zona buffer en la que se restrinja cierto tipo de actividades productivas, el diseño de acciones de compensación demandará un trabajo conjunto con los afectados para elaborar y acordar un plan de acción.

Por otro lado, se tiene conocimiento de que se encuentra en proceso de análisis el establecimiento de un estatus de protección para el área de la Quebrada de Laureles. En este sentido, si bien se informó que el MGAP viene trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y por lo tanto hasta el momento las acciones derivadas de los proyectos no implican restricciones de acceso a los recursos, si se modifica el estatus legal del área, también será de aplicación lo dispuesto en este marco a partir de lo establecido en la OP 4.12.

En caso de futuras modificaciones del Manual de Gestión Ambiental y Social del DACC podrán incluirse en éste las consideraciones incorporadas al marco sobre las acciones tendientes a evitar que las personas vean empeoradas sus condiciones de vida como consecuencia del Proyecto.

III.3. Contexto jurídico vinculado a participación

En este aspecto es necesario diferenciar la normativa genérica con respecto a participación ciudadana de las reglas que rigen la participación de las organizaciones y a su vez será necesario analizar esto en el contexto de los potenciales afectados y beneficiarios del proyecto para vislumbrar cuáles son sus posibilidades reales de participación.

El estado uruguayo promueve distintas formas de participación. Por ejemplo, la ley 17.283 (Ley General de Protección del Ambiente) establece en su art. 6º : “La protección del ambiente constituye un compromiso que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que las personas y las organizaciones representativas tienen el derecho-deber de participar en ese proceso”. El sistema también cuenta con espacios de participación formales y reglados como la audiencia pública, que fue introducida en el derecho uruguayo mediante la ley Nº 16.466. Dicha ley dice en su art. 14 “El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá disponer la realización de una audiencia pública cuando considere que el proyecto implica repercusiones graves de orden cultural, social o ambiental, a cuyos efectos determinará la forma de su convocatoria, así como demás aspectos inherentes a su realización, y en la que podrá intervenir cualquier interesado. En todos los casos, la resolución final corresponderá al Poder Ejecutivo”.

Finalmente, el art. 16 del Decreto Nº 349/005 establece que: “El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dispondrá la realización de una audiencia pública para todos los proyectos que se hubieren clasificado en la categoría C. En todo otro caso podrá disponerla, considerando las repercusiones de orden cultural, social o ambiental del proyecto”.

Hasta aquí se ha descrito en parte el contexto general de la normativa vinculada a participación, surgida en relación con la protección del ambiente y los procesos de evaluación ambiental implementados para asegurar esa protección. Ahora bien, en relación con el DACC-AF es necesario distinguir también otros espacios de participación como son las Mesas de desarrollo Rural, citadas en la sección anterior, donde participan las distintas organizaciones de productores además de distintas instituciones del gobierno. Las Mesas de Desarrollo Rural se conforman por departamento y en los casos en que la diferenciación de las actividades así lo requieran, se puede constituir más de una por departamento. Estos espacios de intercambio son un ámbito adecuado para la presentación de iniciativas y la discusión de problemáticas comunes así como la discusión de proyectos impulsados por el estado que podrán interesar o afectar a los productores o grupos e productores.

Otros aspectos que se ha señalado anteriormente y que contribuyen a generar espacios de participación son, por un lado, el arraigo que tienen las distintas organizaciones que nuclean productores que constituyen también un ámbito para compartir inquietudes o vehicularlas hacia el exterior de la organización y, por otro lado, la importancia de la presencia de técnicos de distintos organismos en el territorio. Unidades locales del MGAP, del INC o del INIA, entre otras instituciones cuyos técnicos tienen contacto habitual con los productores, generando una red que les permite a los productores ser menos vulnerables en el caso de que suceda una afectación a su propiedad o a su modo de vida ya que existe un espacio previamente generado que, entre otras cosas, podrá ayudarlos o asistirlos para que puedan acceder a los espacios de resolución de conflictos que se habiliten especialmente en el marco del proyecto.

Mecanismo de Registro y Resolución de Reclamos

El Proyecto contará con un Mecanismo de Registro y Resolución de reclamos.

Para la atención de las consultas, dudas o sugerencias de la población, vinculadas al Proyecto, están disponibles las siguientes vías:

Unidad de Gestión de Proyectos del MGAP:

- Teléfono para consultas: 23094507
- Correo electrónico: dacc@mgap.gub.uy

Personalmente en:

- Oficinas del MGAP ubicadas en todos los Departamentos del Uruguay. En las mismas se podrá contactar a los profesionales de las distintas unidades ejecutoras que intervienen en el Proyecto.
- Centros de Atención Ministerial: Tienen su sede dentro de las Oficinas del MGAP en distintas dependencias, teniendo como acercar los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos de todo el país.

Página Web del Ministerio: www.mgap.gub.uy

Tratamiento de los reclamos y consultas:

Las consultas, dudas o sugerencias realizadas en la UGP son derivadas o respondidas en forma personalizada, previa consulta al área técnica de referencia. A su vez, los centros de atención ministerial ubicados en las dependencias departamentales del MGAP ofrecen asesoramiento general y respuesta inmediata a las convocatorias (subproyectos) realizadas por el MGAP.

Las consultas o dudas de profesionales que se generan en el marco de las convocatorias a presentación de subproyectos, también pueden vehiculizarse por intermedio de la Plataforma Moodle de Educación a Distancia, (www.mgap.gub.uy/capacitacion) en los procesos de habilitaciones específicos.

Aquellos interesados en plantear reclamos podrán realizarlo a través de la página web del MGAP o en los Centros de Atención Ministerial ubicados en los departamentos del país. Dichos reclamos serán tramitados por expediente, y culminarán con una resolución, lo que permitirá a los interesados que la misma se recurra en vía Administrativa y luego de agotada la misma llegar a la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sin perjuicio de lo antes expuesto hay que tener en cuenta que el artículo 30 de la Constitución de la República consagra el derecho de petición que tiene cualquier habitante ante cualquier autoridad de la República. Asimismo, de acuerdo al artículo 3 de la ley 18.381 consagra el acceso a la información pública como un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Para poder hacer efectivo dicho derecho, en los artículos 13 y siguientes dispone el procedimiento administrativo para acceder a la información pública.

III.4. Problemas Sociales Fundamentales

Como se ha venido señalando, el Proyecto cuenta con un contexto institucional adecuado para minimizar los riesgos de empobrecimiento que se pudieran derivar de una potencial afectación en términos de la OP 4.12. Si bien, como se indicó, existen sectores más vulnerables como las mujeres o los asalariados rurales además de los pequeños productores en general, existen también mecanismos impulsados por los distintos organismos que permiten contar con las herramientas para minimizar ese riesgo a partir de reducir la vulnerabilidad y/o mitigar los impactos en caso de que efectivamente se produjeran. A su vez la disponibilidad de espacios de participación en el ámbito de funcionamiento del proyecto (las mesas de desarrollo rural impulsadas por la unidad de descentralización del MGAP) y la presencia de técnicos que tienen relación con los productores en el ámbito local permite sostener que, en caso de producirse conflictos o problemas derivados de una potencial afectación y que no hubieran sido previstos en los planes de

reasentamiento, estos podrán ser identificados a tiempo para buscar una solución y posteriormente hacer un seguimiento de la situación.

Especialmente en el caso de las mujeres, como se señaló anteriormente, tanto el INCa través de sus políticas de cotitularidad y procedimientos de relocalización orientados al mantenimiento de la actividad familiar como el MGAP a través de la puntuación de sus proyectos (más allá de que en el caso de las unidades de agricultura familiar, se considere a la mujer como beneficiaria, también en la evaluación se asignan más puntos a las propuestas que integran mujeres en el equipo) existen políticas tendientes a reducir el riesgo. Nuevamente, si bien la situación en sí se mantiene, el contexto institucional puede contribuir a reducir el riesgo por ejemplo, en el caso de productoras colonas, porque se accede más fácilmente a una indemnización por mejoras si se es cotitular de un predio..

Otro factor identificado es el bajo nivel de educación que, entre otras cosas, contribuye a la vulnerabilidad frente a la afectación de la vivienda, el predio o la actividad productiva. En este sentido, el marco asociativo contribuye doblemente. Por un lado, tanto las Organizaciones como las Mesas de Desarrollo Rural, en sí constituyen espacios de desarrollo. Por otro lado, el Proyecto mismo incluyó actividades de fortalecimiento a través de la promoción de actividades asociativas, así como otro tipo de capacitaciones. Estas capacitaciones si bien son puntuales y no solucionan las dificultades de cada uno de los individuos, ofrecen herramientas que serán útiles en caso de tener que proteger los propios derechos en el marco de una potencial afectación.

III.5. Implicancias para el análisis de alternativas y los esquemas de implementación

En relación con las actividades del proyecto en general se recomienda contemplar los aspectos ya señalados, es decir, evaluar las necesidades de capacitación y acompañamiento en los procesos y potenciar los espacios de participación para las mujeres para favorecer su paulatino acceso a la tierra -tal lo impulsado por el INC- y fortalecer su posición ante potenciales afectaciones para evitar que sean vulnerados sus derechos. Lo mismo vale para los sectores de menores recursos y de menor nivel de educación cuya participación en los beneficios del proyecto deberá ser seguida con más detalle para asegurar su inclusión.

Finalmente, en relación con las actividades del componente 2 específicamente, se recomienda considerar especialmente durante la evaluación del subproyecto, los aspectos reseñados en esta evaluación social a fin de evitar afectaciones cuando fuera posible y, cuando no fuera posible evitarlo, asegurar que las personas recuperen o mejoren el nivel de vida previo a la afectación. Para esto se ha desarrollado un Marco de Políticas de Reasentamiento que contiene los procedimientos a seguir en cada caso de acuerdo a la normativa local vigente y a normativa del Banco. En distintas secciones del marco se hace alusión a la necesidad de prestar atención en caso de que se afectara a población vulnerable y que el MGAP deberá proveer o hacer que se provea al afectado, asistencia y asesoramiento para llevar adelante las acciones requeridas por las normas correspondientes en cada caso sin resultar perjudicado. El Marco incluye también la necesidad de elaborar planes de acción que contemplen medidas compensatorias si se produjeran casos de modificación o restricción del acceso a los recursos, hecho éste que podría producir un impacto sobre el nivel de vida del afectado. Si bien el objeto de las intervenciones no lo promueve y la normativa en sí asegura que no se vulneren los derechos de los afectados, el acompañamiento puede contribuir a que en caso de que exista, el afectado se fortalezca también en la defensa de sus derechos en marco de los procedimientos vigentes.

En este sentido, si bien los riesgos existen, tanto la etapa de evaluación de alternativas como los instrumentos de gestión disponibles y los espacios de participación existentes permiten pensar que está asegurado evitar impactos sobre la población debido a reasentamiento producido por acciones del Proyecto.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Riella, Alberto; Paola Mascheroni; Sofía Angulo y Agustina Marques (2014) “Los ganaderos y el gobierno progresista: entre la conciliación y el conflicto” en *El Uruguay desde la Sociología XII*. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Montevideo: UR.FCS-DS.

Vitelli, Rossana y Víctor Borrás (2014) “Las asalariadas rurales en Uruguay: diagnóstico de vulnerabilidad social” en *El Uruguay desde la Sociología XII*. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Montevideo: UR.FCS-DS.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN (2015) *Resoluciones del directorio*. Acta N°5263.

Amarante, Verónica y Ricardo Infante (2016) *Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de Uruguay*. Santiago de Chile: CEPAL – OIT.

Villalba Clavijo, Clara (2015) *Estudio de las mesas de desarrollo rural en Uruguay como innovación institucional para la participación y la inclusión*. Montevideo: IICA, DGDR.

Tommasino, H., & Bruno, Y. (2005). Algunos elementos para la definición de productores familiares, medios y grandes. Anuario OPYP, 2005, 267-278.

OPYP (2016) “Mapa de Actores para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática para el Sector Agropecuario”. Disponible en: <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/estadisticas-y-documentos/16-02>

Sganga, Fernando; Cecilia Cabrera; Marina González y Sabrina Rodríguez (2014) *Agricultura familiar en Uruguay*. Departamento de Registro de Productores Familiares. DGDR-MGAP.

Calvo, J. J., Borrás, V., Cabella, W., Carrasco, P., De Los Campos, H., Loolhaas, M., y Tenenbaum, M. (2013). *Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011*. Montevideo: INE.

DIEA (s/ año) *Resultados Definitivos. Censo General Agropecuario 2011*.

**URUGUAY: “PROYECTO DE MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES Y “DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO**

MARCO DE POLÍTICAS DE REASENTAMIENTO

Introducción	88
Antecedentes.....	89
Descripción del Proyecto.....	90
Objetivo del Marco de Políticas de reasentamiento (MPR)	92
Principios que orientan la preparación del reasentamiento.....	93
Marco legal.....	94
Normas relacionadas con el reasentamiento poblacional.....	94
Marco Constitucional.....	94
Tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el ordenamiento jurídico uruguayo.....	95
Normas aplicables a la expropiación	96
Procedimientos para la expropiación	96
Normas aplicables a las servidumbres administrativas	99
Servidumbre impuesta por UTE	99
Otras servidumbres vinculadas a sistemas riego (acuerdos entre partes)	101
La normativa vigente en Uruguay y la Política Operacional 4.12 del Banco Mundial.....	104
Preparación del Plan de Reasentamiento.....	110
Tipos de Planes de Reasentamiento.....	111
Articulación del proceso de reasentamiento con las etapas técnicas.....	113
Plan de afectación de Activos (Expropiaciones y Servidumbre)	113
Mecanismos participativos de monitoreo y evaluación	124
Consulta del MPR y NP	124

Septiembre 2017

Introducción

1. Este Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR) forma parte del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático - Financiamiento Adicional- DACC-AF, **"Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático"**. El MPR es la base para la preparación, implementación, monitoreo y evaluación de los Planes de Reasentamiento que deban elaborarse para los subproyectos todavía no identificados.
2. El MPR tiene como propósito garantizar que, una vez agotadas las posibilidades de evitar o reducir el reasentamiento involuntario,³¹ las personas que deban relocarse o que pierdan terrenos u otros activos económicos sean apoyadas durante su relocalización, compensadas adecuadamente por sus pérdidas, y apoyadas en sus esfuerzos por mejorar sus niveles de vida o al menos mantener los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto³². Para lograr este objetivo, la Sección I del presente marco se centra en aquellos impactos vinculados con afectación de activos y relocalización de personas y las formas de proceder en esos casos de acuerdo con la OP. 4.12.
3. Este MPR se basa en la legislación uruguaya, en las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el gobierno uruguayo, así como en los principios de la política de reasentamiento involuntario OP 4.12 del Banco Mundial. El MPR se aplicará a todas las actividades del Proyecto³³ que causen Reasentamiento. El término Reasentamiento se define con base al alcance de la OP 4.12 del Banco Mundial abarcando los efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos de inversión financiados por el Banco y causados por a) la privación involuntaria de tierras, que da por resultado i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas. Se aplica asimismo a las demás actividades que resulten en reasentamiento involuntario y que, a juicio del Banco: a) tengan relación directa y considerable con el proyecto financiado por el Banco; b) sean necesarias para lograr los objetivos enunciados en los documentos del proyecto, y c) se lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse a cabo, simultáneamente con el proyecto. Hay que tener en cuenta que la salvaguarda no se puede desmembrar, se activa en su totalidad, por lo que aun cuando el AF del Proyecto DACC no considerará elegibles los proyectos que requieran expropiación de tierras, tanto en el marco normativo como en las medidas de mitigación es necesario incorporar las normas generales que refieren a la expropiación.

³¹ A los efectos de este Marco, "involuntario" se refiere a las acciones que se pueden realizar sin el consentimiento informado de la persona desplazada o sin su poder de elección.

³² El MGAP determina que no serán elegibles actividades que impliquen la relocalización de personas ni la adquisición involuntaria de terrenos.

³³ Por "obras necesarias para el proyecto" se entiende tanto aquellas obras específicas a financiar en los subproyectos como aquellas obras complementarias, necesaria para el funcionamiento de las primeras. Por ejemplo, como se verá más adelante, si para el funcionamiento de un elemento del sistema de riego se requiere la instalación de una línea eléctrica, esta última instalación se considera parte de las "obras necesarias para el proyecto" a los fines de la política OP 4.12.

Antecedentes

4. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha priorizado políticas de preservación de los recursos naturales, como bien público por excelencia y como factor determinante de la sustentabilidad del modelo agro-exportador y la expansión productiva de los últimos años. Y reconoce que el país es vulnerable a los efectos adversos del cambio climático y de la variabilidad climática. Desde el año 2009 se han identificado medidas de política y acciones conjuntas con otras entidades públicas y con el sector privado para implementar un Plan de Respuesta al cambio climático. En este contexto el MGAP solicitó en el año 2010 el apoyo del BIRF para la preparación de un Proyecto que diera respuesta a esta problemática. En su elaboración participaron las distintas estructuras del MGAP involucradas en la problemática – Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), Dirección General de Recursos Naturales (RENARE) y Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG)- y se preparó la propuesta bajo la coordinación de la Secretaría de Cooperación Internacional, en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Proyecto contó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a través del Convenio de Préstamo BIRF N°8099-UY.
5. El proyecto DACC fue estructurado teniendo en consideración la experiencia del MGAP en proyectos de características semejantes, además de las lecciones aprendidas por el Banco Mundial en proyectos de manejo de recursos naturales en otros países de la región y el mundo. Cuenta con un Manual Ambiental y Social publicado por el MGAP y el Banco Mundial en mayo de 2011, el cual fue revisado en mayo de 2014 para incluir la Salvaguarda de Manejo de Plagas OP4.09. El MAYS incluye la descripción del marco normativo aplicado (legislación vigente y salvaguardas del Banco Mundial), los roles y funciones institucionales requeridos y los procedimientos aplicados, conteniendo una guía para una correcta integración de los aspectos ambientales y sociales durante la implementación del Proyecto. Las acciones propuestas para el DACC son:
 - b) En los Componentes 1 y 3, desarrollo de herramientas para la toma de decisión y el apoyo a la aplicación de políticas públicas.
 - c) En Componente 2, se establecen los mecanismos por los cuales los proponentes de sub-proyectos prediales conozcan y apliquen las propuestas técnicas que cumplan con los procedimientos ambientales y sociales establecidos y las reglamentaciones legales existentes.
 - d) Una lista restrictiva de actividades no financiables.
 - e) Procedimiento para identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales.
 - f) Actividades de capacitación tanto a técnicos centrales y regionales del MGAP como a técnicos privados.
 - g) El proyecto se registrará atendiendo a las especificaciones ambientales y sociales de la legislación uruguaya y las salvaguardas del BM
6. La ampliación del Proyecto DACC-AF seguirá apoyando a los productores rurales en el uso sostenible de los recursos naturales generando una mayor adaptación a la variabilidad y CC, y promoviendo una modernización de la gestión del MGAP en el área de información y servicios relacionados al clima y los recursos naturales.
7. Dado que el nuevo alcance incluirá actividades con potenciales efectos vinculados a la Salvaguarda OP 4.12, se consideró necesario actualizar la evaluación social para identificar los efectos que las nuevas actividades pudieran tener en términos de la política de reasentamiento involuntario. Dicha actualización sirvió de base para la elaboración del presente marco.

Descripción del Proyecto

8. El objetivo del Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y el Cambio Climático es respaldar las iniciativas destinadas a propiciar que los productores adopten prácticas agropecuarias mejoradas, ambientalmente sostenibles e inteligentes en relación con el clima.
9. El DACC-AF prioriza tres ejes transversales a todos los componentes:
 - ii) la promoción del riego con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad de agua disponible para la producción y como herramienta para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción ante la variabilidad y CC;
 - iii) la intensificación sostenible de la ganadería extensiva, particularmente de los productores familiares y medianos, como forma de mejorar la sustentabilidad económica, ambiental y social de los sistemas productivos más vulnerables; y,
 - iv) el manejo sostenible de la biodiversidad, con énfasis en la promoción de tecnologías que permitan aumentar en forma sustentable la productividad del campo natural, impactando sobre un eco-sistema que ocupa unos 10 millones de hectáreas.
10. Este nuevo alcance incluirá actividades con potenciales efectos indirectos por obras complementarias vinculados a la Salvaguarda OP 4.12 de Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial, por lo que se requirió actualizar la Evaluación Social del Proyecto para identificar los efectos que las nuevas actividades pueden tener en términos de la mencionada política y elaborar los instrumentos consecuentes con la mencionada política, entre los cuales se encuentra este MPR.
11. El Proyecto tiene 4 componentes:
 - a. El Componente 1 contempla la creación de un Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) en el sector agropecuario con el fin de integrar, sintetizar y generar información fundamental y oportuna en relación con la gestión de recursos naturales, los pronósticos climáticos de corto y mediano plazo, y los posibles cambios e impactos de largo plazo.
 - b. El Componente 2 aborda las inversiones en establecimientos agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima. Por medio de este componente, que será implementado por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se financiará la ejecución de subproyectos impulsados por la demanda, que comprenden inversiones y asistencia técnica. Algunos de los subproyectos a financiar implicarán exclusivamente mejoras intra prediales que no requieren afectaciones a terceros (por ejemplo, las mejoras en los sistemas de manejo de efluentes en predios de productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía). En otros casos podrán proponerse sub proyectos que excedan un único predio, como los proyectos de riego multipredial, cuyas infraestructuras requieran la afectación parcial de predios pertenecientes a beneficiarios del proyecto o a terceros (por ejemplo, por la instauración de servidumbres de acueducto o eléctricas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de riego multipredial). También eventualmente podría suceder que en un predio del Instituto Nacional de Colonización en el que distintos colonos explotan las diversas fracciones, se propiciara una intervención que los beneficiaria a todos pero requeriría que uno de ellos deba relocalizar parte de su actividad - generalmente dentro de la misma colonia- o mejoras que haya hecho, para posibilitar la instalación de infraestructura colectiva en el área técnicamente identificada como única adecuada y que formaba parte de la fracción que habitaba y/o explotaba el colono afectado. En ningún caso el MAGP financiará proyectos que requieran para su implementación la expropiación de inmuebles, relocalización de personas o reordenamiento del territorio.

- c. Las actividades del componente 2 destacadas en el párrafo anterior ii), son identificadas preliminarmente como factibles de producir algún tipo de afectación, pero el tipo de actividades elegible para financiamiento no se limita a estas. De hecho, en la medida en que coincida con los objetivos previstos y las estrategias delineadas por el MGAP, podrán financiarse actividades que hasta el momento no hayan sido identificadas. Para completar la información sobre el componente y el tipo de actividades elegibles, se incluye en el MPR Adenda 1 lo señalado al respecto en el Manual de Gestión Ambiental y Social del DACC.
 - d. El Componente 3 considera el fortalecimiento de la capacidad y capacitación. En el contexto de este componente se financiarán actividades destinadas a fortalecer la capacidad de: a) los productores agropecuarios (independientemente del tamaño de su establecimiento) y el personal técnico de los prestadores de servicios de asesoría, para que adopten prácticas de gestión integrada de los recursos naturales e hídricos, y b) el MGAP, en particular la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), para que aplique sus programas de gestión de los recursos naturales y su estrategia sobre cambio climático en el sector agropecuario.
 - e. El Componente 4 incluye la gestión, el seguimiento y la evaluación del proyecto. En el contexto de este componente, se ofrecerán los fondos necesarios para a) apoyar el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto para la coordinación y la gestión eficientes del proyecto; b) respaldar el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto; c) coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de capacitación descritas en el tercer componente, y d) asistir al diseño y la aplicación de una estrategia de comunicación tendiente a divulgar resultados y lecciones aprendidas dentro del país y la región.
12. Las actividades que podrían dar lugar a algún tipo de reasentamiento involuntario están vinculadas al segundo componente ya que las distintas propuestas a financiar pueden incluir obras en establecimientos agropecuarios para lograr los objetivos del proyecto, que pueden implicar para su concreción la afectación parcial de predios de terceros o relocalización de población. Específicamente, esta necesidad podría identificarse para las actividades comprendidas en los sub proyectos vinculados a las estrategias asociativas de agua para la producción.
13. Durante la evaluación de las propuestas el comité analiza, entre otros aspectos, si el subproyecto presentado requiere reasentamiento y se analiza la posibilidad de evitarlo. Además, en la mayor parte de los casos, las obras se desarrollan exclusivamente dentro de los predios, que pertenecen a los propios proponentes del subproyecto, y por lo tanto no requieren afectación de activos ni relocalización de población. No obstante, algunas de las actividades de las propuestas seleccionadas podrían requerir:
- a. la afectación de predios de terceros para constitución de servidumbre de acueductos, de apoyo de presa y de la parada o partidor así como servidumbre para la instalación de líneas eléctricas.
 - b. o la relocalización de actividades o población dentro de un mismo predio del Instituto Nacional de Colonización para permitir la localización de una actividad del proyecto en el lugar del predio técnicamente apropiado para tal fin. En este caso es dable hacer notar que el Instituto de Colonización es el propietario de la tierra y reordena sus predios en pos de una mejor gestión de los recursos y ofreciendo diferentes predios alternativos.

Objetivo del Marco de Políticas de reasentamiento (MPR)

14. Teniendo en cuenta que las actividades que forman parte de los subproyectos del componente 2 del Proyecto DACC-AF se vinculan en general con mejoras dentro de los predios propiedad de los productores o grupos de productores asociados o en predios que les son arrendados individual o colectivamente por privados o por el Instituto Nacional de Colonización, no se prevé que exista para las obras necesidad de adquisición de tierras. No obstante ello, como se citó en los párrafos 12 y 13, algunas de las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades podrían requerir la afectación parcial de predios de terceros. El MGAP ha determinado que no serán elegibles actividades que impliquen expropiaciones o adquisiciones involuntarias de tierras. Aun así, estas situaciones son abogadas en el presente marco de políticas de reasentamiento debido a que se encuentran alcanzadas por la política O.P. 4.12, Política de Reasentamiento Involuntario, la cual como dijimos, no se puede desmembrar.
15. La experiencia a nivel nacional e internacional en relación con las consecuencias del desplazamiento involuntario de personas en razón de proyectos de desarrollo llama la atención sobre la complejidad de las situaciones que se desencadenan y la necesidad de formular estrategias orientadas a prevenir los riesgos económicos y sociales y a reconstruir los niveles de vida de las personas. Es en función de este principio que en los casos excepcionales en que, a raíz de una actividad correspondiente al DACC-AF, resulte inevitable, el MGAP gestionará las acciones que sean de su alcance y gestionará las soluciones vinculadas al reasentamiento, con la participación de las instituciones que correspondan en cada caso.
16. El objetivo del Marco de la Política de Reasentamiento, en adelante MPR, es establecer los principios, normas y procedimientos que se han de aplicar a las actividades o grupo de actividades preparados como parte del Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales y adaptación al cambio climático (en adelante DACC-AF) y que requieran afectación de activos, desplazamiento de actividades o reubicación de personas. Las disposiciones del Marco guiarán la preparación de Planes de Reasentamiento³⁴ (PR), los que deberán contar con información concreta de las actividades y/o obras planificadas. Los PR deberán ser presentados al Banco para su aprobación como condición para la financiación de las actividades o grupo de actividades involucradas.

³⁴ El término Reasentamiento se define con base al alcance de la OP 4.12 del Banco Mundial abarcando los efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos de inversión financiados por el Banco y causados por a) la privación involuntaria de tierras, que da por resultado i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.

Principios que orientan la preparación del reasentamiento

17. De acuerdo a las normas del Banco Mundial cuando en relación con algún sub proyecto se identifica la necesidad de afectar activos, desplazar actividades, expropiar terrenos y/o relocalizar a personas en el área de afectación, se debe preparar un Plan de Reasentamiento de acuerdo con los conceptos y principios que se describen a continuación.

- **Evitar o minimizar el desplazamiento de población.** Dados los impactos negativos que genera el desplazamiento involuntario, siempre que sea posible se lo evitará o se minimizará. Para esto, se deberán estudiar detalladamente todas las opciones viables de cada uno de las actividades o grupos de actividades.
- **Restablecimiento de condiciones socioeconómicas.** La indemnización por la pérdida de inmuebles y otros bienes materiales, puede no constituir por sí sola una solución a los impactos del desplazamiento, ni garantizar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los afectados. Por ello se diseñarán y ejecutarán planes de reasentamiento que promuevan acciones de compensación y asistencia para atender a la población desplazada en el restablecimiento de sus condiciones de vida.
- **Inclusión.** Se deberá facilitar el acceso a la asistencia en el restablecimiento de las condiciones de vida a todos los habitantes de los sitios afectados por la construcción de obras o la realización de actividades del Proyecto DACC-AF, incluso a aquellos cuyo título de ocupación o cuya falta de título de ocupación fuera la causa que origine esa necesidad de asistencia³⁵.
- **Equidad y reconocimiento de las diferencias en cuanto a la afectación.** Toda persona, familia o actividad económica, que sea objeto de traslado recibirá el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a las diferentes alternativas de solución que se ofrezcan.
- **Información y participación de la población.** Se debe asegurar que los afectados (sean o no propietarios) y usuarios de los activos requeridos recibirán información precisa, oportuna y adecuada sobre sus derechos, deberes, alternativas de solución a las afectaciones, y el estado en que se encuentra el proceso de afectación y relocalización y las medidas previstas en el plan de reasentamiento. Las unidades sociales que se deban trasladar serán consultadas sobre las alternativas de solución de reasentamiento y los planes que se formulen para ello.
- **Transparencia.** La adquisición de predios y el proceso de reasentamiento serán difundidos de manera que todas las personas y actores que se encuentren en el área de influencia de la actividad propuesta, cuenten con información precisa, oportuna y adecuada sobre el proceso. Se garantizará que el proceso de reasentamiento incluya a toda la población afectada y que los criterios y procedimientos de elegibilidad para acceder a beneficios sean claros, transparentes y se apliquen de manera equitativa para los afectados.
- **Celeridad.** Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con los reasentamientos, asignarán los recursos físicos, humanos, administrativos y financieros necesarios para su ejecución, en el tiempo previsto.
- **Oportunidad.** La privación de tierras y otros activos conexos solo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas.

³⁵ De la Evaluación Social realizada surge que las posibilidades de que exista algún tipo de ocupación informal en el área donde se desarrollen actividades del Proyecto son mínimas. No obstante, ello, se hace mención a esta categoría de ocupación debido a que está contemplada en la OP 4.12.

Marco legal

- 18.** El presente Marco de Política de Reasentamiento Involuntario se apoya en las normas que emanan de la Constitución Nacional de la República Oriental de Uruguay, leyes y normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el ordenamiento jurídico uruguayo. Estas normas determinan la justa y previa indemnización a fin de restablecer la situación patrimonial del sujeto expropiado en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser privado de su propiedad.

Normas relacionadas con el reasentamiento poblacional

- 19.** La República Oriental del Uruguay no cuenta con una normativa que regule específicamente la asistencia y asesoramiento para la relocalización, reasentamiento, adquisición de inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que, como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura, deban ser desalojados de su lugar de residencia habitual o lugar de actividad económica.
- 20.** No obstante, existe un cuerpo normativo genérico, conformado por normas, nacionales e internacionales, que regulan el derecho a la propiedad, las compensaciones por la pérdida de ese derecho por causa de necesidad o utilidad pública, así como las obligaciones que asume el Estado de propiciar a todos los habitantes lo conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso económico con justicia social y al acceso a una vivienda digna.
- 21.** Estos derechos se encuentran previstos en la Constitución Nacional y en normas de inferior rango, como la Ley de Expropiación Nº 3.958 y sus modificatorias, la Ley Nº 17.234 que crea y gestiona un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Marco Constitucional

- 22.** La Constitución Uruguaya establece:

Art. 7.- “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su (...) propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés general.”

Art. 32.- “La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieran por razones de interés general (...)” Por lo tanto, nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación.

Art. 40.- “La familia es la base de nuestra sociedad. El estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”

Art. 44.- “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higienes públicas...”

Art. 45.- “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa...”

Art. 72.- “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.”

Art. 231.- “La ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara podrá disponer expropiaciones correspondientes a planes y programas de desarrollo económico, propuestas por el Poder Ejecutivo, mediante una justa indemnización y conforme a las normas del artículo 32.”

Art. 232.- “Dicha indemnización podrá no ser previa, pero en este caso la ley deberá establecer expresamente los recursos necesarios para asegurar su pago total en el término establecido, que nunca superará los diez años; la entidad expropiante no podrá tomar posesión del bien sin antes haber pagado efectivamente por lo menos la cuarta parte del total de la indemnización. Los pequeños propietarios, cuyas características determinará la ley recibirán siempre el total de la indemnización previamente a la toma de

posesión del bien.³⁶

Para que la indemnización no sea previa requiere:

- 1) Ley dictada por mayoría absoluta del total de componente de cada Cámara,
- 2) Iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo que se funde en Planes y programas de desarrollo económico,
- 3) La ley debe establecer expresamente los recursos para el pago total en un plazo no superior a diez años.
- 4) Debe pagarse al menos la cuarta parte de la compensación para poder tomar posesión del bien,
- 5) Quedan excluidos los pequeños propietarios cuyas características determinará la ley.

Art. 332.- “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.”

Tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el ordenamiento jurídico uruguayo

23. La Constitución Uruguay, a través de los artículos 85, numeral 7º) y 168 numeral 20º) otorga rango legal a los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.

24. Los Tratados Internacionales sobre derechos humanos relacionados con el reasentamiento involuntario, reconocidos en la Constitución son los siguientes:

Convención Americana sobre derechos humanos – “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobada por la ley 15.737 de 8 de marzo de 1985.

Artículo 21, correspondiente a la Propiedad Privada: 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social; y 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

O *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*, ratificada el 26 de marzo de 1985

Artículo XI, Derecho a la preservación de la salud y al bienestar: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Artículo XXIII, Derecho a la propiedad: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de

³⁶ Dado que es esta disposición de la normativa uruguaya puede presentar una brecha con la OP 4.12 en cuanto al principio de indemnización previa, conviene mencionar que en su artículo “Expropiación en el Uruguay. Algunos problemas actuales”, Augusto Durán Martínez señala que en 50 años de vigencia sólo en circunstancias muy excepcionales la compensación no fue previa. Porque es la misma constitución uruguaya la que en su artículo 32 consagra la propiedad privada y señala que nadie podrá ser privado de ella sin una justa y previa compensación. En este sentido el autor dice que si bien la normativa prevé excepciones, el hecho de que hayan sido tan pocas en tanto tiempo hace pensar que prevalece, como principio, lo establecido en el art. 32. DURÁN MARTÍNEZ, A Expropiación en Uruguay. Algunos Problemas Actuales, *Estudios de derecho administrativo*, Nº. 9, 2014, págs. 109-144. Por su parte, el MGAP asegura que nunca ha sido aplicado este instituto.

la persona y del hogar.

o Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 17: Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 11: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Normas aplicables a la expropiación

25. Las normas aplicables a la expropiación se basan en el artículo 32 de la Constitución Uruguaya, el que está regulado por:

- Ley No. 3.958 del 28 de marzo de 1912 y sus modificaciones
- Ley No. 15.982 del 18 de octubre de 1988
- Ley No. 17.930 del 19 de diciembre de 2005, artículo 224 de la

Procedimientos para la expropiación

26. El procedimiento expropiatorio se inicia con: i) Resolución legislativa que dé causa a la expropiación, ordenando o autorizando la construcción de obras, o la adquisición de terrenos o edificios destinados a objetos de utilidad pública declaración de utilidad pública puede ser genérica o específica, individualizando un bien. En este sentido el artículo 24 de la ley 16.858, conocida como la ley de riego declara de utilidad pública la expropiación de los inmuebles necesarios para la ejecución de obras hidráulicas, cuando estén a cargo del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 de la Constitución de la República; ii) el acto administrativo que determina cuáles bienes serán expropiados por necesidad o utilidad pública. En el ámbito nacional la designación del bien compete al Poder Ejecutivo (art. 3 Ley 3.958), excepto cuando sea necesario el empleo o adelanto de fondos o recursos especiales, que requiere también la aprobación del Poder Legislativo. La ley puede establecer excepciones como, por ejemplo, la ley 11.029 en su artículo 37 permite al Directorio de Instituto Nacional de Colonización hacer las designaciones en los casos que correspondan. Esta individualización sólo inicia la expropiación, no afecta la propiedad del bien que sigue siendo del expropiado, y puede recurrirse con las garantías del caso.

a) Una vez designado el bien, la administración inicia el respectivo expediente, agregando el plano del

inmueble a expropiarse con los datos individualizantes del padrón a expropiar. Cuando la expropiación es total, se puede actuar con el último plano inscripto, de lo contrario, si fuera parcial, se tiene que levantar un nuevo plano de mensura. (art. 15 inc. 2 Ley 3.958).

- b) Cumplido ese trámite, se notifica a “los propietarios conocidos y presentes y a los apoderados de los ausentes”, y se publican edictos “con las indicaciones del caso sobre las personas y bienes” (art. 15 inc. 4 Ley 3.958). Si en el inmueble expropiado existieren poseedores u ocupantes, deben ser notificados. Los propietarios deberán denunciar dentro de los 8 días siguientes, bajo su responsabilidad, la existencia de otras personas con derechos reales y personales.
- c) Realizadas las notificaciones el expediente queda “de manifiesto en la Oficina por el término de ocho días” que se cuentan a partir de aquellas. Al vencimiento de los ocho días del término de manifiesto, empieza a correr un nuevo plazo de ocho días para que el propietario, poseedor u ocupante, haga “las observaciones que juzgue pertinente o del caso” sobre la designación del bien (art. 16 inc. 1 Ley 3.958) y pueda oponerse a la misma. Las resoluciones podrán ser objeto de los recursos administrativos correspondientes. Cuando la expropiación fuere parcial, y la fracción remanente quede depreciada necesaria y considerablemente, el propietario puede recurrir para que se le compre la totalidad del padrón.
- d) Una vez que la designación del bien queda firme, se inicia el procedimiento para fijar la compensación, que comienza con una valuación en vía administrativa y luego, en caso de desacuerdo del expropiado, culmina en un procedimiento judicial.
- e) La constitución y la ley establecen que la compensación debe ser justa, esto significa que debe cubrir todos los daños. La doctrina establece que la compensación debe abonar el valor de lo expropiado y todos los daños, incluido el daño moral, y los montos tienen que ser actualizados. En el caso de toma urgente, se debe incluir la escrituración y depósito de dinero de la compensación, debiendo incluir el interés el lucro cesante derivado de la privación del bien. Se fija de acuerdo a los principios del derecho público y en caso de vacíos o dudas se aplican los del derecho privado.
- f) La administración tasa los bienes a expropiar por medio de sus oficinas técnicas (art. 18 Ley 3.958), la cual es notificada a sus propietarios o representantes legales, quienes deben manifestar si la aceptan o, en caso contrario, indicar la cantidad que solicita.
- g) Si se acepta la tasación o la administración acepta la pretensión del expropiado, se inicia el proceso de escrituración. Si no se llega a un acuerdo, o la notificación al expropiado no puede realizarse por ausencia o cualquier otra causa, o no se puede pagar por algún motivo (documentación incompleta en la mayoría de los casos), se deja constancia en el expediente para que inicie el juicio de expropiación. Si el expropiado no está de acuerdo con el monto de la compensación, esto se resuelve por un procedimiento judicial.
- h) Para el caso de que la administración tenga necesidad de ocupar el bien, sin esperar a la terminación del procedimiento establecido en la ley, la ley 17.930 en su artículo 224 reguló la toma urgente de posesión del bien a expropiar.
- i) La declaración de urgencia se hará por el organismo expropiante.
- j) En los casos de toma urgente de posesión la indemnización provisoria se depositará en el Banco Hipotecario del Uruguay en unidades reajustables y será la que resulte de la tasación del bien expropiado y sus mejoras, en dictamen fundado, efectuado por técnicos públicos dependientes del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos Departamentales. Dicha tasación comprenderá el monto de la

indemnización por el bien expropiado y todo otro concepto que ofrecerá la Administración. Las servidumbres legales de utilidad pública no dan lugar a indemnización.

- k) El Juez o Tribunal que entienda, o a quien competa entender, en la acción, previa y cautelar de toma urgente de posesión, verificará:
 - La designación del inmueble a expropiar y la resolución que disponga la toma urgente de posesión.
 - Que exista una cuenta abierta en el Banco Hipotecario del Uruguay en unidades reajustables, identificada con el número de padrón del inmueble.
 - La titularidad del bien a expropiar y su situación patrimonial.
- l) La Administración entablará la acción de toma urgente de posesión, solicitando la intimación de desocupación y acreditación de la titularidad sobre el inmueble expropiado y su situación patrimonial, en el plazo de diez días perentorios e improrrogables, bajo apercibimiento de lanzamiento. La decisión judicial que ordene la desocupación será inapelable y se cumplirá de inmediato.
- m) Al decretar el lanzamiento, el Juez dispondrá el libramiento de oficio al Banco Hipotecario del Uruguay para el cobro del precio provisorio, a quien haya acreditado la titularidad del inmueble designado para expropiar. Si los interesados no comparecieran o hubiera diferencias o dudas sobre el derecho y calidad, legitimación o titularidad, o si existieran embargos, interdicciones o gravámenes sobre el inmueble, el Juez de la causa dispondrá que la situación se dilucide en el juicio de expropiación sin perjuicio de dar posesión al organismo expropiante.
- n) Una vez cumplida la toma de posesión efectiva del inmueble, la Administración tendrá un plazo de treinta días para presentar la demanda de expropiación.

27. En los casos de los sub proyectos financiados por el Proyecto DACC, por el tamaño de las obras no está previsto que las obras requieran expropiaciones para la instalación de centrales de transformación. Las obras no son de gran magnitud, por lo que únicamente necesitan extendido de tendido eléctrico. Sin embargo, dado el alcance de la Salvaguarda de Reasentamiento, se incluye el análisis de la normativa prevista por la legislación uruguaya. Además del marco constitucional y la ya citada legislación general vinculada a expropiaciones en general y de la normativa propia del sector energético, es la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) quien está facultada para solicitar la expropiación de predios necesarios para la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica.

- a) En este sentido, el art. 4 inc. h de la ley orgánica de UTE, Ley 15031, establece entre las competencias del organismo: "Disponer de sus bienes muebles, inmuebles, instalaciones y toda clase de derechos de su propiedad, incluyendo la enajenación, adquisición por cualquier título, arrendamiento y constitución de toda clase de derechos, aún los reales, a todos los efectos relacionados con sus cometidos."
- b) Según los antecedentes de anteriores proyectos, la UTE ha indicado que las expropiaciones se pagan en base a criterios técnicos (valores de catastro, evaluación de la actividad económica que resulta afectada). Estos aspectos reflejan el costo de reposición dado que, además de estar basadas en procedimientos claros y consistentes para la tasación de activos afectados, se tienen en cuenta todos los costos de transacción.
- c) Una vez identificados los inmuebles requeridos, la UTE solicita al poder ejecutivo la designación para expropiación de los inmuebles identificados (padrón, ubicación de acuerdo a catastro, etc.). A partir de esta solicitud, el Ministerio de Industria, Energía y Minería aprueba un decreto a través del cual designa para expropiación los inmuebles individualizados, reserva un monto para cubrir la indemnización correspondiente y, de acuerdo al caso, podrá también autorizar la toma urgente de posesión.

- d) Una vez aprobado el decreto, el proceso se asimila al descrito a partir del punto f. del párrafo 28 ya que el procedimiento se rige por la citada normativa nacional de expropiaciones. La diferencia es que en este caso es la UTE quien se vincula en la vía administrativa o judicial con el propietario afectado.

Normas aplicables a las servidumbres administrativas

28. “Las servidumbres administrativas, de acuerdo al artículo 115 del Código de Aguas son aquellas que se imponen a favor de personas públicas estatales para el ejercicio de los cometidos que la Constitución y las leyes le confieren, en relación a las materias y objeto que trata dicho código.
29. Se trata de servidumbres conceptualmente distintas a las civiles, pues mientras éstas sólo pueden imponerse en utilidad de un predio de distinto dueño, las administrativas se imponen en favor de una persona pública (estatal o departamental) y sólo para el cumplimiento de sus fines públicos.
30. Son servidumbres coactivas, pero sus presupuestos operativos son de derecho y no de hecho. Atañen a las competencias de las personas públicas y no a circunstancias relativas a un predio dominante, que como tal no tiene necesidad de existir.³⁷”
31. Es por esto que no se van a solicitar servidumbres administrativas por parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, dado que el apoyo de estos proyectos de riego no constituye un cometido de esta Secretaría de Estado, ni su realización implica el cumplimiento de fines públicos. Las únicas servidumbres que vamos a encontrar son las civiles, que pidan los productores en beneficio de sus predios, sea por acueducto o apoyo de presa.

Servidumbre impuesta por UTE³⁸

32. El Directorio de UTE por R 93.-2692, estableció el denominado “Procedimiento Interno para Imposición de Servidumbres a Favor de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica” que, regula el trámite administrativo en su totalidad y comprende las siguientes etapas:
- a) Adoptada la decisión de tender una línea de conducción de energía eléctrica, se propone al Poder Ejecutivo y se somete a aprobación del mismo el decreto reglamentario del Decreto Ley 10.383 respectivo. La propuesta debe incluir la definición de los extremos de la línea, identificando las estaciones de transformación o puntos de conexión que los constituyan, así como las estaciones de transformación que sean hitos relevantes del trazado, así como el alcance de las distintas servidumbres que sea necesario constituir a fin de garantizar el tendido, mantenimiento y vigilancia de la línea.
- b) En caso de corresponder (tratándose de líneas de transmisión) se efectuará la comunicación respectiva al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (DINAMA), iniciando el trámite para obtener la autorización ambiental previa.

³⁷ Enrique Guerra Daneri. (2004). Los Derechos al Agua en la Actividad Agraria. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

³⁸ ³⁸ Mediante nota N° 82204 del 25 de septiembre, UTE ratificó que la normativa citada en el presente marco es la vigente en la materia y que, habiendo analizado el contenido de este MPR, manifiesta no tener reparos jurídicos al respecto. Copia de la nota citada puede verse en el MPR Adenda 2 Respuestas Recibidas

- c) Una vez dictado por el Poder Ejecutivo el respectivo decreto reglamentario, y confeccionados los planos parcelarios (en los cuales se indica el área afectada) y la distribución de mástiles o torres), el Directorio de UTE, por acto administrativo, designa a los inmuebles afectados por servidumbre. Es posible que UTE, en tanto titular de la servidumbre, establezca restricciones al dominio, que regirán en las superficies sometidas a la servidumbre y que serán todas las necesarias para la construcción, mantenimiento y vigilancia de las líneas.
 - d) A efectos de dar adecuada publicidad, otorgando las máximas garantías tanto para la Administración como para los particulares afectados, se inscribe en el Registro General de Traslaciones de Dominio o en los Registros Departamentales en su caso, la afectación de cada inmueble, se notifica a los afectados por edictos, se cursa a las Sedes judiciales competentes la solicitud de puesta de manifiesto de los planos con el trazado de la línea y el texto de las normas legales y reglamentarias aplicables y se cursa la comunicación pertinente a las Intendencias Municipales correspondientes,
 - e) La publicidad se completa con el contacto personal con los titulares de derechos reales afectados, oportunidad en la cual se exhiben los planos respectivos y se recaba por escrito la autorización de ingreso al predio a efectos de materializar las obras necesarias. .
 - f) Limitaciones establecidas por las servidumbres. Atento a que la servidumbre afecta el carácter exclusivo del dominio, el propietario del predio afectado o su ocupante pueden utilizarlo, cercarlo y edificar en él, siempre que no dificulte el ejercicio regular de los derechos del titular de la servidumbre. Las limitaciones impuestas en virtud de las servidumbres a favor de las líneas de conducción de energía eléctrica varían según los casos, conforme a las características de las líneas en virtud de las cuales son constituidas.
33. Son las servidumbres impuestas a favor de líneas de conducción de energía eléctrica, en el derecho uruguayo, tienen el carácter de gratuitas. Son indemnizables todos los daños y perjuicios que se causen en los predios que son declarados sirvientes, sean de la naturaleza que fueran aquellos. Dicha indemnización puede establecerse por acuerdo de partes, para lo cual tanto UTE como el particular presentan sus medios probatorios y efectúan sus valuaciones.

En cuanto al reclamo de indemnizaciones, rige lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Ley 10.383, siendo indemnizables los daños y perjuicios que surjan en forma directa inmediata y necesaria de las servidumbres impuestas. Se entiende por daño el menoscabo que, como consecuencia de la imposición de servidumbres sufre una persona en su patrimonio. Como se comprenderá, en este caso el daño no responde a un accionar antijurídico de la Administración, no obstante, ante la constatación objetiva de la existencia de menoscabo patrimonial, aplica el principio de que todo aquel que causa un daño tiene el deber de repararlo. Ahora bien, no todo daño es indemnizable, en tanto la ley exige que se trate de un daño directo, un efectivo deterioro patrimonial, que guarde relación inmediata con la servidumbre que se impuso y que, además, sea necesario. Queda excluida pues la compensación por daños eventuales y lucro cesante.

Es carga del reclamante la acreditación de la existencia del daño, su cuantificación, así como la demostración del nexo causal existente entre el daño y la actuación de la Administración. Un capítulo aparte merece el procedimiento elaborado por técnicos Agrimensores de UTE, que ha sido recogido por varias empresas eléctricas y que permite cuantificar adecuadamente la pérdida de valor del bien inmueble afectado por servidumbre, mediante la aplicación de criterios objetivos. Dicho procedimiento considera la incidencia que tienen las limitaciones de uso a causa de la servidumbre sobre la explotación actual del bien o sus usos posibles en las actuales condiciones, de acuerdo a sus características intrínsecas y extrínsecas.

La fórmula paramétrica aplicable está compuesta de varios factores que se relacionan con las características del inmueble y de la afectación que corresponde considerar, entre los cuales se destacan:

- a. Área total de la propiedad. la incidencia de una misma área afectada será menor cuanto mayor sea el área total del predio,
- b. Precio unitario medio de la tierra en la zona,
- c. Área afectada y su proporción con el área total de la propiedad,
- d. Uso actual de la propiedad y posibilidades ciertas de explotación de futuro,
- e. Forma de la afectación y su ubicación dentro del predio
- f. Factores especiales que aumentan la incidencia de la servidumbre. Además de los aspectos considerados en los párrafos anteriores, es natural y previsible que se den innumerables casos especiales: particular afectación a la estética, conjugación con otras servidumbres ya establecidas (retiros, otras líneas aéreas, etc.), ubicación de los elementos portantes en una zona de valor destacado dentro del predio, o existencia estos elementos en un número elevado respecto a la longitud total del tramo de línea que lo afecta, etc. Tales situaciones especiales se toman en cuenta mediante un índice de ajuste que se aplica sobre el valor estimado de la depreciación.

34. De acuerdo a lo informado por la UTE en anteriores proyectos³⁹, en caso de no alcanzarse un acuerdo, aún en vía administrativa, si el reclamante aporta elementos de prueba que hagan presumible que le asista razón, UTE procede a una nueva evaluación de los daños, que en el caso de que estos sean agronómicos, son realizados por técnicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La República en el marco del Convenio celebrado por ésta con UTE. Si el particular no acepta esta segunda tasación independiente, podrá reclamar la indemnización de los daños y perjuicios en vía judicial.
35. Finalmente, según indica la UTE, la entidad cuenta con procedimientos claros para tratar conflictos y quejas, incluyendo el caso en el que el propietario expropiado decide acudir a los tribunales para defender su solicitud de una compensación mayor a la establecida.

Otras servidumbres vinculadas a sistemas riego (acuerdos entre partes)

36. Las servidumbres civiles pueden ser constituidas por ley o por la voluntad de los propietarios. El Código de Aguas sólo se ocupa de regular las servidumbres civiles forzosas, esto es, aquellas que son obligatorias para los propietarios de los predios, toda vez que se den los supuestos previstos en la ley. Son por tanto de interés particular y se plantean en el ámbito de las relaciones privadas. Aquellas que son impuestas por ley, requieren asimismo ser constituidas para el caso concreto por medio de un procedimiento judicial.

Las servidumbres que podemos encontrar en los proyectos son las de acueducto, apoyo de presa o embalse, y las de parada y partidior.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 16858, Ley de Riego, se extiende "a todas las servidumbres que se demanden con destino a riego las disposiciones establecidas para la servidumbre de acueducto en los artículos 83, 85, 86, 88, 95, 96 y 99 al 102 del Código de Aguas".

37. Además de las servidumbres administrativas impuestas por el Estado, la ley de riego reconoce como objetivo de interés público el ordenamiento del uso del agua entre vecinos (es en este sentido que es de interés público y no en cuanto al objetivo directo del aprovechamiento de las aguas, que se determina exclusivamente por la existencia real de un beneficio para el que impone la servidumbre y la inexistencia de una alternativa menos perjudicial a través de otro lindero). Del código de Aguas resulta que en caso de desacuerdo en cuanto a la existencia o inexistencia del beneficio y con ello el derecho a imponer la servidumbre, será el Juez sin intervención del poder administrador.

³⁹ Fuente: Procedimientos De Expropiación Y Servidumbres Y Su Aplicación Al Proyecto De UTE "Parque Eólico Sierra de Caracoles10 MW" Disponible en:
<http://documentos.bancomundial.org/curated/es/328371468125376250/pdf/RP8530URU0UTE0wind0farm.pdf>

38. Entonces, en los casos de servidumbre demandadas con destino a riego, el vecino que requiere imponer servidumbre debe solicitarlo al propietario del predio sirviente. El acuerdo entre ambos y las condiciones que regirán deberá realizarse a través de un convenio escrito.

En el caso de la servidumbre de acueducto, para que proceda su imposición es necesario acreditar que se tenga derecho a disponer de las aguas y que dichas aguas se dispongan en utilidad de un predio del cual se tiene al menos el goce. El Tribunal tiene que revisar que se cumplan con estas exigencias.

39. De acuerdo con el art. 84 del código de aguas: "En la servidumbre de acueducto va implícito el derecho a llevarlo por un rumbo que permita el libre descenso de las aguas y que, por la naturaleza o los accidentes del suelo, no haga excesivamente dispendiosa la obra. Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el rumbo que menos perjuicio cause al predio sirviente. El rumbo más corto se medirá como el menos perjudicial para este y como el menos costoso para el beneficiario de la servidumbre, si no se probare lo contrario. El juez conciliará en lo posible los derechos de las partes y en los puntos dudosos decidirá a favor de las heredades sirvientes". Por lo tanto, en caso de que los propietarios no lleguen a un acuerdo sobre la localización del acueducto para riego o sobre cuál es el curso más corto, recurrirán a la justicia y el juez decidirá conforme a los criterios descritos.

40. Con respecto a la indemnización, el artículo 85 establece que "El dueño de la heredad sirviente tendrá derecho a que se le pague el precio de todo el terreno que ocupe el acueducto y un espacio de anchura de un metro a cada lado de él, además de la indemnización por los daños inmediatos que provoque la obra. Si por las características de estas se requiriera un espacio lateral mayor, lo fijarán las partes y si no se avinieren, lo fijará el juez." Es decir que si las partes no llegan a un acuerdo con respecto a la indemnización correspondiente, podrán recurrir a la justicia quién decidirá de acuerdo a los criterios citados.

41. Es importante señalar que de acuerdo al mismo art. 85 "el precio del terreno ocupado y la indemnización por los daños deberá pagarse antes de emprender la construcción del acueducto". En caso de que se demande la servidumbre con carácter de urgente, "justificándose dicho extremo en forma sumaria, deberá el juez imponer provisoriamente la servidumbre, previa fianza que prestará el actor por la suma en que aquel prudencialmente estime los perjuicios y el costo de reposición de las cosas a su estado anterior en caso de ser desestimada la acción".

En cuanto a la servidumbre de presa y embalse, están previstas en los artículos 103 a 106 del Código de Aguas. Cuando los terrenos o riberas donde se hace necesario apoyar los extremos de la presa son ajenos y privados, se puede exigir la imposición de esta servidumbre al dueño de los mismos. El embalse, que es consecuencia de la presa, puede inundar las parcelas contiguas al curso, por lo que si también son ajenas y privadas, debe requerirse además, una servidumbre forzosa de embalse. El derecho y la jurisprudencia las considera dos servidumbres distintas.

Los requisitos para imponer estas servidumbres son: a) que el reclamante tenga derecho a disponer de las aguas que pretende captar o derivar; y b) que el agua se destine a fines productivos del predio dominante. El dueño del predio sirviente puede oponerse si para el fin solicitado, las obras puedan establecerse sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponer la servidumbre y con menores inconvenientes para quien haya de sufrirla.

En cuanto a la servidumbre de parada o partidor, consisten en apoyar en el suelo vecino, la obra que permita introducir el agua del canal ubicado en el límite de las parcelas. El fenómeno pues, no da lugar a embalse o inundación de vecindad. Quien demande la servidumbre debe disponer de derechos sobre el agua. Esta servidumbre queda sometida al régimen de la servidumbre de apoyo de presa, y el pago de la indemnización debe ser previo y se impone siempre y cuando no se ocasionen mermas al riego de los linderos.

En cuanto a las servidumbres voluntarias, se rigen por las disposiciones del Código Civil.

En Consulta

42. Si bien existen diferencias en aspectos específicos como la posibilidad excepcional mencionada en la legislación de que el pago de la indemnización no fuera previo -, las diferencias en cuanto al monto y los casos en que se realiza el depósito judicial y el hecho de que la normativa establezca que la servidumbre de electroducto es gratuita -aunque se paguen los daños y perjuicios-, puede decirse que en general la normativa vigente en Uruguay es acorde a la Política Operacional 4.12 en cuanto a la necesidad de otorgar a quien se ve afectado por una expropiación, una justa y previa compensación. De conformidad con el artículo 29 de la Ley de expropiaciones No. 3958, los propietarios serán indemnizados tomando en cuenta el valor de la propiedad cuya ocupación se requiere, en la época inmediata anterior a la expropiación y también los daños y perjuicios que a su dueño resultaren y sean una consecuencia forzosa de la expropiación.
43. El marco jurídico expropiatorio de Uruguay satisface las exigencias de la Política de Salvaguarda OP. 4.12 del BM. Los métodos de valuación del bien objeto de expropiación, las acciones judiciales y procedimientos para la defensa de los sujetos expropiados, que abarca el cuestionamiento de los fundamentos de la expropiación, la impugnación de la valuación del bien y el monto de la indemnización, la retrocesión del bien expropiado al particular en determinados casos y otros institutos que la persona expropiada pueda hacer valer ante la autoridad judicial en defensa de sus derechos y la justa indemnización que estas normas regulan, buscan restablecer la situación patrimonial del sujeto expropiado en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser privado de su propiedad.
44. Las siguientes medidas, que no están incluidas en la normativa local, son incorporadas al presente MPR:
- Informar a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento;
 - Realizar consultas con los afectados y las comunidades de acogida, y darles a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas viables de reasentamiento;
 - Brindar asistencia durante el traslado y otro tipo de asistencia ante la pérdida de activos o del acceso a los activos, para restablecer sus medios de subsistencia y condiciones de vida, tales como: facilidades de crédito, preparación de la tierra, subsidios, capacitación u oportunidades de empleo;
 - Ofrecer apoyo después del desplazamiento.
45. Entonces, quien sea afectado por una actividad o grupo de actividades propuestas por el Proyecto DACC-AF en los términos descritos en el presente documento recibirá una compensación, indemnización o asistencia rápida – como correspondiere – de acuerdo a lo establecido en el presente MPR. La legislación nacional vigente considera el valor de la propiedad en la época inmediata anterior a la expropiación y también los daños y perjuicios que, a su dueño, resultaren y sean una consecuencia forzosa de la expropiación. En cualquier caso, a los efectos de lo prescripto por el presente MPR, se considerará para la valuación, el método de valoración de activos basado en el valor de reposición, entendiendo como tal al método que permite determinar la cantidad suficiente para reponer los activos perdidos y cubrir los costos de transacción. Al aplicar este método de valoración no debe tenerse en cuenta la depreciación de las estructuras ni de los bienes. El “valor de reposición” se define de la manera siguiente: tratándose de tierras agrícolas, es el valor de mercado que tenían con anterioridad al proyecto o con anterioridad al desplazamiento, si éste es más alto, las tierras de igual potencial productivo o de igual uso ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de preparación de las tierras para que alcancen un nivel similar al de las tierras afectadas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia. Tratándose de tierras situadas en zonas urbanas, es el valor de mercado con anterioridad al desplazamiento, de tierras de igual tamaño y uso, con instalaciones y servicios públicos de infraestructura similares o mejores, ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de cualesquiera impuestos de registro o transferencia. Tratándose de casas y otras estructuras, es el costo de mercado de los materiales necesarios para construir una estructura de reposición con una superficie y de una calidad

similares o mejores que las de la estructura afectada, o para reparar una estructura parcialmente afectada, más el costo de transporte de los materiales de construcción al sitio de construcción, más el costo de la mano de obra y de los honorarios de los contratistas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia. Al determinar el valor de reposición, la depreciación del bien y el valor de los materiales rescatados no se toman en cuenta, así como tampoco el valor de los beneficios que se obtendrán del proyecto deducidos de la valoración de un bien afectado.

46. En la medida que las prácticas habituales y la legislación uruguaya no alcancen a cubrir el valor de reposición tal como se establece en este MPR, o no contemplen la compensación de la afectación ya sea parcial o total, la compensación se complementará con medidas adicionales a fin de cumplir con lo establecido en la OP 4.12. Esa asistencia adicional se prestará en forma separada de la asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar en virtud de las otras cláusulas enunciadas. Además, de acuerdo con las realidades de cada familia y de considerarse necesario, se ofrecerá acompañamiento (por ejemplo social, legal u otros) para asegurar el restablecimiento, o mejora, de las condiciones de vida de las unidades sociales reasentadas. En relación con la compensación en general y con la valoración de activos entonces, las diferencias que pueden observarse entre la normativa uruguaya y la OP 4.12 son las siguientes.

	Tipo de Afectación	Normativa Uruguaya	OP 4.12
Método de valoración de activos (concepto indemnizado y método de tasación/valoración utilizado) ⁴⁰	Expropiación		VALOR DE REPOSICIÓN método de valoración de activos que permite determinar la cantidad suficiente para reponer los activos perdidos y cubrir los costos de transacción.

⁴⁰ No hay una metodología de valoración, sin embargo, el procedimiento es muy garantista a los intereses del administrado y se detalla a continuación:

Ante la tasación que se notifica al propietario, éste puede adoptar diferentes posturas:

- a) No dice nada y se produce la aceptación tácita de la compensación, o la acepta expresamente. En ambos casos se procede a la escrituración del bien.
- b) Se opone y manifiesta la compensación que estima conveniente. En esta hipótesis puede suceder: 1) La Administración acepta el monto propuesto, en consecuencia, se procede directamente a la escrituración; 2) La Administración realiza una nueva oferta que se ubique entre la original y la solicitada por el expropiado, circunstancia que continúa el trámite de acuerdo a lo expuesto;

	Tipo de Afectación	Normativa Uruguay	OP 4.12
	Servidumbre de acueducto		
	Servidumbre para tendido eléctrico		
Momento de la indemnización	Expropiación	La constitución establece que la propiedad es inviolable y sólo puede ser enajenada previo pago de una indemnización justa y previa. No obstante, en caso de expropiación, se indica que la indemnización podría ser en cuotas, de manera que al momento de la toma de posesión, el expropiado solo recibió una parte de la indemnización. Si bien la norma prevé esta posibilidad, en la práctica fueron muy pocos desde la vigencia de la norma en que efectivamente se recurrió al pago en partes.	Previa
Depósito judicial	Expropiación	En caso de toma de posesión urgente, el monto ofrecido en sede administrativa. Hay una indemnización provisoria, pero que puede ser discutida	Monto ofrecido más el 10%

3) La Administración no acepta el monto propuesto y comienza un juicio expropiatorio. Dada la separación de poderes que es muy fuerte en el Uruguay, esta resolución por un tercero imparcial le brinda todas las garantías al expropiado. En el juicio expropiatorio el juez se va a apoyar en sus propios peritos que son independientes a las partes.

c) Se opone, pero no manifiesta el monto que estima adecuado, puede dar lugar a la imposición de sanciones que surgen del artículo 39 de la ley.

	Tipo de Afectación	Normativa Uruguay	OP 4.12
		judicialmente por la persona afectada. No es la indemnización definitiva salvo que la persona la acepte como tal. En caso que no haya acuerdo resuelve un tercero imparcial	

47. En cuanto a la elegibilidad para obtener beneficios, la normativa vigente prevé específicamente aquellos casos en que las personas afectadas poseen la titularidad de la tierra o tienen algún tipo de derecho formal sobre la misma. La O.P. 4.12, en cambio, incluye también a las personas que no tienen derechos legales oficialmente reconocidos respecto de las tierras, pero que reclaman derecho a esas tierras o activos, a condición de que su reclamación esté reconocida en la legislación del país, o que se reconozca mediante un proceso indicado en el Plan de Reasentamiento. También incluye a las personas que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocible respecto de la tierra que ocupan, las que deben recibir asistencia para el reasentamiento, en lugar de compensación, y otro tipo de asistencia, según proceda, para lograr los objetivos de la política. Asimismo, la O.P. 4.12 establece que las personas tienen derecho a ser compensadas por la pérdida de activos distintos de las tierras.

Categorías de afectados según régimen de tenencia	Elegibilidad para recibir compensación según normativa uruguaya	Elegibilidad para recibir compensación según normativa del Banco	Medidas adoptadas para salvar la brecha (si corresponde)
propietario	En caso de expropiación: sí (de acuerdo a normativa vigente sobre expropiaciones)	sí	Si bien existen diferencias en cuando a la formulación, ambos marcos aseguran la compensación previa y justa.
	En caso de servidumbre: no (el tipo de compensación, no obstante no se deriva de la servidumbre en sí sino de los daños y perjuicios)	Sí	Medidas complementarias para atender las afectaciones derivadas del establecimiento de la servidumbre

Categorías de afectados según régimen de tenencia	Elegibilidad para recibir compensación según normativa uruguaya	Elegibilidad para recibir compensación según normativa del Banco	Medidas adoptadas para salvar la brecha (si corresponde)
arrendatario (en sus distintas formas)	sí (de acuerdo a la normativa vigente podrá ser compensado por las mejoras y en el caso de arrendatarios de predios del INC se le ofrecerán además de la indemnización que pudiera corresponder por contrato, alternativas de relocalización dentro del mismo predio o en uno cercano)	Sí	En los casos en que la afectación implique relocalización de los arrendatarios, rigen las responsabilidades establecidas en el presente marco para el MGAP y otras instituciones involucradas (que están en consonancia con normativa genérica sobre derechos humanos propia de los acuerdos ratificados por el gobierno Uruguay)
titulo precario otorgado por el INC (previo al arrendamiento)	al igual que en el caso anterior, independientemente de las condiciones del contrato con el INC, el INC informó que a los colonos afectados se les ofrece una fracción alternativa, si la afectación es total o significativa y se asesora para mitigar los impactos que pudiera ocasionar la afectación de su fracción y su actividad para que puedan restablecer su situación.	sí	En los casos en que la afectación implique relocalización de los arrendatarios, rigen las responsabilidades establecidas en el presente marco para el MGAP y otras instituciones involucradas (que están en consonancia con normativa genérica sobre derechos humanos propia de los acuerdos ratificados por el gobierno Uruguay)

Categorías de afectados según régimen de tenencia	Elegibilidad para recibir compensación según normativa uruguaya	Elegibilidad para recibir compensación según normativa del Banco	Medidas adoptadas para salvar la brecha (si corresponde)
Título provisorio otorgado por algún organismo del estado para usufructo del predio estatal	Una vez que el ocupante obtiene el título provisorio adquiere ciertos derechos (si bien no de propiedad, sí de usufructo del predio, derechos que si son afectados deberán ser compensados). No obstante ello, en caso de relocalización, el ocupante está en una situación de mayor vulnerabilidad.	sí	Los compromisos asentados en este marco en relación con los planes de relocalización de población permiten salvar la brecha entre la legislación local y la normativa del Banco en esta categoría.
ocupante sin título	Si bien los derechos de estos afectados son reconocidos en términos genéricos en la Constitución y en los pactos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Uruguay, no hay una normativa específica que indique la necesidad de compensar a ocupantes sin títulos	sí	En el caso de que se afecte a ocupantes sin título alguno ni derecho legal sobre la tierra que ocupan, rige lo establecido en el presente marco en relación con relocalización de población. De esta forma se salva la brecha entre la normativa local y la del Banco que, como se ha indicado, no es de fondo sino de aplicación o procedimental.

48. En cuanto a los casos de afectaciones en los que no se lleguen a acuerdos con los afectados, el presente MPR establece que cuando se haya ofrecido una compensación al afectado con base a un plan de reasentamiento aprobado, y la oferta es rechazada por el afectado, no se afectará las tierras hasta tanto no exista acuerdo en el monto y las condiciones.
49. Un aspecto a considerar en el análisis comparado de la normativa, es también el accionar del Instituto Nacional de Colonización, cuyos procedimientos para la relocalización son particulares y, en algunos de sus criterios, coincidentes con la política de reasentamiento involuntario. En ese sentido, según lo indicado

por los funcionarios del Instituto, en el caso excepcional de que se requiriera relocalizar a una familia debido al cambio de estrategia en relación con el uso productivo del predio o debido a qué para mejorar la productividad de un predio subdividido en varias parcelas, se requiriera realizar una obra de infraestructura en un área ocupada por un colono, existen prácticas desarrolladas por el organismo que superan lo establecido en la normativa. En este sentido, si bien en el contrato entre el colono y el INC se establece entre las condiciones que deberá ajustarse las normativas dispuestas para la colonia en términos productivos y que el provisorio o luego el arrendamiento, pueden verse modificados (con las garantías de recibir las indemnizaciones correspondientes, etc.), en casos de que efectivamente deban trasladarse, se trata de un procedimiento acompañado y extenso en el tiempo. Si bien se deberá notificar al colono por la vía formal, previamente el personal del Instituto Nacional de Colonización (que cuenta con técnicos de distintas áreas, entre ellas, la social) se pone en contacto con el afectado, le comunica la situación, lo informa sobre las alternativas disponibles para la renegociación del contrato (reubicación en otra fracción dentro del mismo predio, traslado a otro predio, cancelación del acuerdo con la correspondiente indemnización, etc.), se le ofrece acompañamiento para el proceso, en caso de que lo requiriera, y se intenta adaptar los tiempos del proceso a las necesidades de la familia (que los niños no dejen de asistir a clases). De acuerdo a lo informado, en la evaluación de alternativas para el traslado se consideran también aspectos sociales como que los colonos no pierdan sus redes o que los chicos puedan seguir asistiendo a la misma escuela. Por otro lado, el colono tiene derecho indemnizatorio sobre las mejoras que hubiera realizado y que le fueron autorizadas (incluidas infraestructuras para manejo de ganado y algunos cultivos perennes). Otro aspecto a destacar en relación con los procedimientos del INC es que en los casos de los nuevos contratos - y de los contratos vigentes cuyos titulares lo hayan solicitado - se incorpora a la mujer como cotitular de la fracción para manejo de ganado y algunos cultivos perennes).⁴¹

50. Si bien de acuerdo a la información disponible, no se prevé que se encuentren casos de personas asentadas en terrenos públicos sobre los que no tienen derechos legales, el Proyecto brindará asistencia (o facilitará el acceso a servicios o asistencia prestada por otras entidades) a las personas asentadas en terrenos afectados por el proyecto y sobre los cuales estas personas no tienen derechos legales, teniendo en consideración la política del Banco Mundial O. P. 4.12.
51. Los ocupantes del espacio público y bienes públicos del Estado que no son elegibles para compensaciones o indemnización por la tierra que ocupan, recibirán asistencia para el reasentamiento y restablecimiento de los medios de subsistencia, esto último cuando fuere pertinente. La asistencia será prevista en el Plan de Reasentamiento. Los ocupantes informales tienen derecho a que se les compense adecuadamente por la pérdida del uso de la vivienda de la que estuvieren disponiendo, y por las pérdidas que en razón de la obra sufran en relación con las actividades que desarrollaban en el lugar del que hayan sido desplazados.

Preparación del Plan de Reasentamiento

52. A los efectos de cumplir con los requerimientos del Banco Mundial se establece que las tareas de identificación, elaboración, implementación y monitoreo de los eventuales planes de reasentamiento se realizarán de conformidad con los términos del presente MPR, y serán realizadas por el MGAP a través de la Dirección General en coordinación con otros organismos involucrados en cada caso, de acuerdo a la normativa vigente. Los detalles más relevantes de los arreglos institucionales y responsabilidades por etapa del ciclo de obra son desarrollados en el apartado Tipo de Planes de Reasentamiento.
53. El MGAP, contará dentro de su estructura organizacional con los recursos humanos, físicos y financieros

⁴¹ De acuerdo a lo informado por los representantes del INC durante la entrevista mantenida esto representa un avance en relación con la vulnerabilidad de la mujer, dado que con anterioridad a esta medida, si el marido decidía transferir sus derechos a otra persona o si moría sin designar a su cónyuge como cotitular, la mujer podía quedarse sin derecho alguno sobre la propiedad en la que había vivido y trabajado con su familia durante años.

necesarios para la coordinación y ejecución social y técnica del reasentamiento en todo el ciclo del proyecto. La entidad responsable del proyecto y del plan de reasentamiento podrá ejecutar el plan en forma directa, o celebrando convenios con las instituciones pertinentes de acuerdo a sus competencias (OSE; UTE o INC, etc.) y/o que tengan experiencia en el tema. En ambos casos mantiene la responsabilidad por los resultados de la formulación y ejecución.⁴²

54. En relación con las actividades citadas en el párrafo 49 que se rigen por la normativa y prácticas habituales del INC, los planes de reasentamiento que se preparen para este tipo de actividades deberán dar cuenta de las acciones del INC y aquellas que deba realizar el MGAP a través de la UGP o de las áreas que correspondan para complementar esas acciones a fin de cumplir con lo establecido en el presente Marco⁴³.

Tipos de Planes de Reasentamiento

55. En base a las evaluaciones socio-ambientales efectuadas, se estima que en la eventualidad de que se requiera desplazar población de los sitios de las actividades o grupos de actividades, el desplazamiento afectaría sólo a un pequeño número de unidades.

56. Se preparará un Plan Abreviado de Reasentamiento en los siguientes casos:

- (ii) el proyecto afecta a menos de 200 personas (el número de personas que deben relocalizarse o sufren pérdidas de terrenos u otros activos no llega a 200); o
- (iii) el proyecto afecta a 200 o más personas, pero ninguna debe relocalizarse o pierde el 10% o más de sus activos productivos⁴⁴

57. Los posibles tipos de planes de reasentamiento se describen en el cuadro siguiente:

Condiciones	Tipo de Plan
-------------	--------------

⁴²Los mecanismos institucionales y reglas sobre la tercerización del reasentamiento para cualquier organización externa, sea pública o privada, incluidos los contratistas, se basarán en este Marco de Política de Reasentamiento y los documentos que deriven del mismo, una vez debidamente aprobados y con la NO objeción del Banco. Los requerimientos y previsiones de reasentamiento de los casos de tercerización formarán parte de los documentos contractuales del contratista de las obras. Las cláusulas deberán ajustarse a este Marco de Política de Reasentamiento. En todos los casos, los resultados de esos contratos son de entera responsabilidad de la institución ejecutora del subproyecto. Cualquier arreglo distinto deberá ser aprobado por la UGP, y contar con la No objeción del Banco Mundial.

⁴³ El INC comunicó mediante oficio N° 199/17 que su Directorio dispuso validar el presente MPR mediante la resolución n° 3 del acta n° 3575 del 22 de septiembre de 2017. Las actas de Directorio

⁴⁴ Si bien no serán elegibles los sub-proyectos que requieran planes de reasentamiento completos en este Proyecto, se indica que de acuerdo a lo dispuesto en la OP 4.12, se preparará un Plan de Reasentamiento completo si un proyecto afecta a más de 200 personas y si por lo menos una de ellas debe relocalizarse o pierde el 10% o más de su terreno. El Plan de Reasentamiento debe incluir medidas para apoyar y/o rehabilitar a las personas que son impactadas de esta manera. Dada la naturaleza del Proyecto, es muy poco probable que haya necesidad de preparar un Plan de Reasentamiento completo. Por otra parte, como los impactos que serán atendidos por los dos tipos de planes son similares, los contenidos de estos dos tipos de planes no deberían variar mayormente.

<ul style="list-style-type: none"> • Uno o más terrenos deben ser parcialmente afectados mediante la imposición de servidumbres que restringen parcialmente su uso o deben ser expropiados • El área expropiada representa menos del 10% del área total de todos y cada uno de los terrenos afectados por el proyecto 	<p>Plan de Reasentamiento Abreviado Tipo 1 (Plan de Afectación de Activos - Expropiación o servidumbre)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Uno o más terrenos deben ser expropiados • Se afectan mejoras, hay viviendas y/o estructuras comerciales u otras mejoras en los terrenos a ser expropiados • Es necesario relocalizar personas (ocupantes del área a ser expropiada o el derecho de vía existente). • Hay menos de 200 personas afectadas por el proyecto (personas expropiadas o que deben reubicarse) 	<p>Plan de Reasentamiento Abreviado Tipo 2 (Plan de Expropiaciones y Relocalizaciones)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • No es necesario expropiar ningún terreno. • Es necesario relocalizar menos de 200 personas 	<p>Plan de Reasentamiento Abreviado Tipo 3 (Plan de Relocalizaciones)</p>

Articulación del proceso de reasentamiento con las etapas técnicas

58. En todos los proyectos que obliguen al reasentamiento existirá una estrecha relación entre las etapas técnicas de la obra y la formulación y ejecución del Plan de afectación de activos, Plan de Reasentamiento Abreviado (tipo 2 o 3) o Plan de Reasentamiento completo (en el caso improbable de que fuera necesario). Esto garantizará la disponibilidad de predios, así como la resolución de las afectaciones que no implican adquisición de inmuebles, en el momento de iniciar la construcción de las obras y dará el tiempo necesario para la ejecución del plan de reasentamiento.
59. La ejecución de las actividades de reasentamiento estará vinculada a la ejecución del componente de inversión del proyecto. El desplazamiento solo puede hacerse efectivo una vez se hayan establecido y realizado las medidas necesarias para el reasentamiento. En particular, la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas.
60. El cuadro siguiente muestra la relación entre las etapas técnicas de la obra y las etapas que se llevarán a cabo para la formulación y ejecución del Plan de Reasentamiento Abreviado. La planificación y ejecución del reasentamiento estará en relación con las etapas establecidas para los distintos tipos de sub proyectos y con los procedimientos jurídicos y administrativos correspondientes en cada caso.

Plan de afectación de Activos (Expropiaciones y Servidumbre)

61. Cuando el Plan de Afectación de activos se realice en virtud de una servidumbre será elaborado y ejecutado teniendo en cuenta los procedimientos vigentes y lo establecido en el presente MPR en lo relativo a imposición de servidumbres. En este sentido, si bien el equipo OPYPA y División Jurídica del MGAP, serán las áreas técnicas y jurídicas de UTE o de las organizaciones de productores con apoyo del MGAP quienes tengan a su cargo la ejecución del plan en virtud de los procedimientos mencionados y la normativa vigente, así como la provisión de la información necesaria para la elaboración del plan. En el caso de que se tratase de un acuerdo entre partes deberá documentarse el acuerdo y sus condiciones, así como la indemnización prevista y, en caso de que las partes hayan recurrido a la justicia, se deberá informar lo dispuesto por el juez con respecto a la servidumbre.

Las actividades y responsabilidades específicos del Plan son las que se indican en **el siguiente cuadro**:

N°	Actividad	Responsable
1	Información a los afectados	Área Jurídica equipo técnico de UTE o de la organización de productores con apoyo del Ministerio en cada caso según normativa vigente.
2	Recolección de información (levantamiento topográfico, estudio de títulos, tasaciones)	Área Jurídica, de UTE, o de la organización de productores con apoyo del Ministerio en cada caso según normativa vigente
3	Análisis de la información, identificación de impactos, definición de las compensaciones	El análisis y la presentación de la información en los términos previstos estará a cargo de UTE o de la organización con apoyo de la Unidad Ejecutora del MGAP que corresponda. La definición de las compensaciones en las servidumbres será la determinada por la normativa uruguaya.
4	Elaboración de Afectación Parcial de Activos (información sobre los procedimientos a seguir, posibilidades del afectado para hacer objeciones, canales para hacer reclamos, etc.)	UGP, el área de evaluación conjuntamente con la OPYPA y asesoría jurídica y del MGAP en base a la información suministrada por organismos competentes en cada caso.
5	Consulta del Plan con afectados (comunicar adecuadamente lo dispuesto por la normativa las posibilidades con que cuenta el afectado para objetar lo dispuesto)	Área jurídica y equipo técnico del UTE o de las organizaciones, conjuntamente con el área responsable DGDR del MGAP, y, según corresponda.
6	No objeción	Banco Mundial
7	Coordinación del Plan	Organismo competente/UGP MGAP
8	Suscripción de acuerdos	Área Jurídica de UTE o de las organizaciones en cada caso,
9	Coordinación del inicio de los procesos de afectación de activos	Área técnica y área Jurídica del organismos competentes en cada caso.
10	Seguimiento y monitoreo del Plan	– UGP MGAP a través del área de Seguimiento y Monitoreo (

62. El Plan de Afectación de Activos para los casos de expropiaciones (Plan de Reasentamiento Abreviado sin relocalización de Población – PRA tipo 2) será elaborado y ejecutado teniendo en cuenta los procedimientos vigentes y lo establecido en el presente MPR en lo relativo a expropiaciones. En este sentido, el equipo de la Organización con apoyo DGDR y de la UGP será responsable de elaborar el documento.

N°	Actividad	Responsable
1	Información a los afectados	Área Jurídica equipo técnico de UTE o de las organizaciones según normativa vigente.
2	Recolección de información (levantamiento topográfico, estudio de títulos, tasaciones)	Área Jurídica, equipo técnico de UTE o de las organizaciones en cada caso según normativa vigente
3	Análisis de la información, identificación de impactos, definición de las compensaciones	El análisis y la presentación de la información en los términos previstos estará a cargo del área de OPYPA del MGAP. La definición de las compensaciones en las expropiaciones será la determinada por la normativa uruguaya.
4	Elaboración del Plan de Afectación de Activos	Área OPYPA del MGAP en base a la información suministrada por organismos competentes en cada caso
5	Consulta del P.E. con afectados	Área jurídica y equipo técnico de UTE o de las organizaciones, con apoyo de la UGP del MGAP, y, según corresponda.
6	No objeción	Banco Mundial
7	Coordinación del P.E.	UGP MGAP
8	Suscripción de acuerdos	Área Jurídica de UTE y de las organizaciones ,
9	Coordinación del inicio de los procesos de expropiación y/o afectación de activos	Área técnica y área Jurídica de UTE y de las organizaciones.
10	Seguimiento y monitoreo del P.E.	–DGDR y Seguimiento UGP MGAP

b. Contenidos del Plan de Afectación de Activos

63. En términos generales el Plan de Afectación de Activos requeridos por las normas del Banco Mundial deberá contener los siguientes elementos:

- Síntesis descriptiva del sub proyecto y en particular de las acciones que da lugar a la expropiación

o la afectación de activos.

- Descripción del marco jurídico e institucional correspondiente. En particular, aunque no de manera excluyente, detalle de los métodos y mecanismos de valuación y compensación que serán aplicables.
- Identificación de los bienes y/o activos afectados
- Valoración de los bienes y/o activos afectados de acuerdo al citado marco jurídico.
- Impactos causados por el desplazamiento (descripción de la afectación, porcentaje de la superficie afectada en relación con la superficie total de la propiedad)
- Solución propuesta
- Agencia Responsable
- Programa de Implementación de las soluciones adoptadas. (pueden ser varios en caso de presentarse distintas categorías de afectados y de tipos de solución)
- Programa de Comunicación Social
- Programa de Registro de Reclamos, sugerencias y resolución de Conflictos
- Fuente de los fondos y costos estimados del PR
- Cronograma de Reasentamiento
- Programa de seguimiento, evaluación y adaptación.

64. En aquellos casos que se dispone de donaciones de tierras entre diferentes niveles del Estado, o entre particulares y el Estado, éstas también deben estar debidamente documentadas y explicadas con la indicación de las normas que las habilitan. Debe quedar claro que la donación es voluntaria y que será efectiva previo al inicio de actividades u obras en los predios afectados.

c. Plan de Reasentamiento Abreviado con relocalización (Tipo 2 y 3)

65. Tal como se mencionó anteriormente, se prevé que serán excepcionales los casos en los que sea necesario relocalizar población como producto de una actividad integrante del proyecto DACC-AF. Además, en los casos en que esto fuera inevitable, se prevé que se tratará, en general de un número muy reducido de personas.

66. Con respecto a las acciones de compensación, la UGP del MGAP promoverá acciones conjuntas con los entes competentes y, una vez adoptadas, participará su ejecución dentro de los límites que le fija la normativa que establece sus facultades, fuera de la cual carece de legitimidad su acción. A fin de promover las acciones y colaborar en su ejecución, el MGAP procurará celebrar convenios de cooperación con los entes competentes que en cada caso correspondan.

67. Con respecto a las responsabilidades específicas en la elaboración del Plan de Reasentamiento Abreviado Tipo 2 o 3, éstas variarán en función del estatus jurídico de la población a relocalizar, ya que esto influirá en los procedimientos a seguir, según se indica a continuación:

PRA tipo 2

68. Dado que la población a relocalizar en este caso está constituida por propietarios, se procederá de acuerdo a lo expuesto en VIII a (Responsables de la elaboración del Plan de Expropiaciones y/o afectación de

activos), si bien se fortalecerán en el plan los aspectos relativos a la información socioeconómica y a la determinación de las medidas de compensación, si corresponden. En este sentido, si bien el equipo técnico del MGAP será el responsable de elaborar el documento, serán las áreas jurídicas de los organismos competentes en cada caso quienes tengan a su cargo la ejecución del plan en virtud de los procedimientos mencionados y la normativa vigente, así como la provisión de la información necesaria para la elaboración del plan.

PRA tipo 3

69. Dado que la población a relocalizar en este caso está constituida por personas que viven y/o desarrollan actividades económicas en tierras de las que no poseen título y que son públicas, las responsabilidades en la elaboración y ejecución del plan estarán en función de las actividades descriptas en el apartado IX D (Diseño y elaboración del Plan de Reasentamiento Abreviado) e incluirá al equipo de la UGP del MGAP y otras áreas u organismos que estuvieren involucrados.

Actividad	Responsable
Información a los afectados (residentes y población desplazada)	DGDR a través de los técnicos de cada departamento
Recolección de información (Censo y diagnóstico socioeconómico, levantamiento topográfico, estudio de títulos, tasaciones, llenado de cuadros de información)	OPYPA y DGRN con apoyo del área jurídica y de los técnicos de cada departamento
Análisis de la información, identificación de impactos, definición de las compensaciones	OPYPA. Las responsabilidades relativas a la definición de las compensaciones quedarán establecidas en los convenios correspondientes.
Elaboración del Plan de Reasentamiento Abreviado	OPYPA y DGDR con apoyo de la UGP a partir de la información generada por la área jurídica y técnicos locales
Consulta del PRA con población afectada	DGDR. Las responsabilidades relativas a la definición de las compensaciones quedarán establecidas en los convenios correspondientes
No objeción	Banco Mundial
Coordinación del PRA	UGP MGAP
Suscripción de acuerdos o compromisos vinculados con alternativas de reasentamiento	MGAP (División Jurídica con apoyo del a UGP)

Actividad	Responsable
Coordinación del inicio de los procesos de expropiación	MGAP (División Jurídica con apoyo del a UGP)
Seguimiento y monitoreo del plan de reasentamiento abreviado	MGAP (Seguimiento de la UGP)

70. En términos generales, los planes de reasentamiento requeridos por las normas del Banco Mundial deberán incluir, al menos, los siguientes elementos:

- a. Una descripción del sub proyecto que causa el reasentamiento. Comprende la descripción de las actividades del proyecto que determinan el desplazamiento y la estrategia adoptada para reducir el número de afectados
- b. Un censo y un diagnóstico socioeconómico de las familias, comercios o actividades productivas y actividades sociales y económicas que resultan afectadas
- c. La valoración de los activos afectados de acuerdo a los métodos descritos en el presente MPR o en su defecto la descripción del método adoptado que cumpla con lo establecido.
- d. La valoración de las actividades que requieren compensación
- e. Un análisis de los impactos que causa el desplazamiento
- f. Una descripción del tipo de las medidas de compensación o solución propuestas a las personas, familias y otras unidades sociales que resulten desplazados por el proyecto
- g. Procedimientos de consulta con los afectados para la discusión sobre las alternativas aceptables y la atención de reclamos
- h. Programa de Implementación de las soluciones adoptadas. (pueden ser varios en caso de presentarse distintas categorías de afectados y de tipos de solución)
- i. Programa de Comunicación Social
- j. Programa de Registro de Reclamos, sugerencias y resolución de Conflictos.
- k. Un cronograma de reasentamiento que incluya la descripción de actividades, fechas, incluyendo actividades de seguimiento. Este cronograma deberá ajustarse al cronograma de diseño y construcción de obras o implementación de actividades. En los casos en que hubiera intervenido la justicia, este cronograma será de carácter tentativo y las fechas, estimadas, ya que no corresponde a la MGAP determinar los tiempos que empleará el poder judicial.
- l. Un presupuesto de las actividades que componen el Plan.
- m. Los arreglos institucionales para la implementación del plan y los mecanismos para resolución de conflictos, en este apartado se identifican las entidades que serán responsables por la implantación y el monitoreo de las actividades del Plan de Reasentamiento Abreviado.
- n. Los procedimientos para el monitoreo y evaluación del plan y la identificación de las instituciones que tendrán la responsabilidad sobre el monitoreo y la evaluación final del plan. Se definen las características y la periodicidad de los informes del monitoreo.

Diseño y elaboración del PRA (Tipo 2 y 3)

i. Estudios para la preparación del PRA

71. Una vez identificados los activos afectados y establecida la necesidad del desplazamiento de población, se iniciarán una serie de estudios imprescindibles para la formulación del Plan: el Censo y Diagnóstico socioeconómico, el levantamiento topográfico, el estudio de los títulos y la tasación de los inmuebles. Teniendo en cuenta que los últimos se desarrollan de acuerdo a lo descrito en los apartados correspondientes al marco jurídico y la elaboración del Plan de Expropiaciones, en este apartado se describirán exclusivamente los aspectos relativos al censo y diagnóstico socioeconómico.
72. **Censo y Diagnóstico Socioeconómico:** Consiste en la realización de un censo detallado de las unidades sociales (personas, familias y unidades económicas) residentes en los predios del área afectada por las obras. El objetivo del mismo es contar con la información que permita conocer las características demográficas, sociales y económicas de propietarios y residentes en las tierras que demanda el proyecto. El censo debe involucrar a todas las personas que residen o tengan derechos sobre los inmuebles afectados cualquiera sea su condición jurídica.
73. Los datos del diagnóstico socioeconómico aportarán información fundamental sobre la economía y las formas de organización social local, a partir de la cual se deberán determinar las intervenciones apropiadas y sostenibles.
74. Los objetivos del censo y del diagnóstico son:
- Cuantificar y registrar las unidades sociales que tienen derechos sobre los activos afectados y las que se deben desplazar
 - Elaborar el listado oficial de los activos y personas afectadas, requeridos para el sub proyecto, y de los beneficiarios de los programas que conformarán el plan de reasentamiento abreviado.
 - Disponer de una línea de base que permita identificar y evaluar los impactos generados por el desplazamiento
 - Describir y analizar las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la población que reside o realiza actividades económicas en los activos requeridos para el proyecto.
 - Conocer las expectativas de la población afectada en relación con el reasentamiento
 - Identificar los posibles impactos del reasentamiento sobre la población que no será desplazada
75. En el diseño de los cuestionarios censales se debe tener en cuenta la inclusión de dimensiones demográficas (edad, sexo, composición del grupo familiar, relaciones de parentesco y tipo de familias, prevalencia de problemas de salud, etc.), económicas (nivel de ingresos del grupo familiar, ocupaciones, lugar de trabajo, relevancia de los ingresos derivados del inmueble a afectar, estrategias de subsistencia, etc.) y sociales (acceso a los servicios sociales de educación y salud, forma de organización social, tiempo de residencia en el sitio, etc.). También se relevará la información sobre las unidades sociales vulnerables (familias o personas por debajo de la línea de pobreza, ancianos, mujeres jefes de hogar y familias o unidades sociales cuyo ingreso dependa del inmueble afectado) ya que estos requieren de mayor atención.
76. La realización del censo define una fecha límite para el reconocimiento del derecho a recibir asistencia en el proceso de reasentamiento. Por ello es de fundamental importancia que la población esté enterada de esa fecha de corte.
77. El censo se realizará a través de visitas domiciliarias a los jefes de hogar de las familias residentes, a los propietarios de las unidades económicas y a los vendedores y artesanos que desarrollan sus actividades en el espacio afectado por el Subproyecto. En los casos en que se observe la utilización del espacio público para la realización de actividades económicas de carácter informal, se describirán las condiciones en que las mismas tienen lugar, detallando, al menos, el número total de unidades sociales, el tipo de actividades económicas que realizan, los ingresos netos diarios y la existencia de permisos municipales para el desarrollo de esas actividades.

78. Consolidados y validados los resultados del registro de unidades sociales afectadas, ese listado servirá para definir la población incluida en el plan de reasentamiento abreviado.

79. Se elaborarán fichas de predio y de unidad social. Se sistematizará y analizará la información. A continuación, se incluyen una serie de cuadros de utilidad para el ordenamiento y consolidación de la información obtenida a partir del censo y el diagnóstico socioeconómico:

Cuadro N° 1. Activos (bienes y materiales afectados)

Código de hogar o actividad	Nombre jefe (hogar) o responsable de la actividad)	Superf. lote o predio	Descripción casa y construcciones/actividad	Uso	Nivel de afectación	Tenencia	Avalúo	Observ.

Cuadro N° 2. Características socioeconómicas de los hogares

N° Hogar	Nombre Jefe	N° integrantes	N° menores de 13	Fuentes de ingreso	Sitio de trabajo estudio	Usos de la propiedad (hogar, actividades económicas, etc.)	Tiempo residencia Desarrollo de la actividad	Observ.

Cuadro N° 3. Ficha de caracterización socioeconómica de las actividades comerciales y/o productivas

Negocio N°	Nombre del dueño	Antigüedad en el área	Tipo de actividad	Cantidad empleados	Ingreso mensual promedio	Lugar de venta	Expectat. de reasentam.	Observ.

ii. Identificación de impactos y categorías de grupos desplazados

80. Se identificarán y analizarán los impactos que causará el desplazamiento en los propietarios y residentes en los activos requeridos por las actividades del Proyecto. A partir de ese análisis y ponderación de impactos se definirán las medidas de mitigación y compensación correspondientes. Como se mencionó más adelante son pocos los casos en los que se prevé que sea necesario que deba relocalizarse población. No obstante, es posible distinguir en principio que, de producirse impactos de este tipo los afectados podrían ser propietarios, arrendatarios, arrendatarios de predios del INC, titulares cuya posesión hubiera sido otorgada en forma precaria por el INC o, en casos muy excepcionales de los cuales no se han identificado hasta el momento en el Proyecto, ocupantes sin ningún tipo de título formal sobre el predio que ocupan. Las diferencias existentes entre las categorías permiten pensar que será distinta la forma que deberá adquirir el reasentamiento -guiado por el plan correspondiente- en cada uno de los casos para poder asegurar la mitigación de los impactos y su adecuada compensación.
81. La tenencia y el uso de los activos, la existencia de actividades económicas en los predios del área afectada, la existencia de industrias, talleres, o sitios de comercialización o producción de bienes, la accesibilidad a los servicios educativo y de salud, las redes sociales de ayuda mutua y reciprocidad son dimensiones del contexto socioeconómico que registran impactos determinantes en lo que hace al posible empobrecimiento de la población.
82. Por ello, se analizarán los impactos con base en esas dimensiones y se clasificará la población de acuerdo con el tipo de impacto que enfrentarán. Esta clasificación facilitará determinar los grupos de población objetivo para cada medida de mitigación o compensación.
83. El diseño de medidas de mitigación y compensación apropiadas para prevenir procesos de empobrecimiento de la población desplazada requiere del análisis combinado de las pérdidas que sufren las unidades sociales.
84. En el siguiente cuadro se presenta una selección previa de la información que podría ser necesaria de recabar con respecto a las pérdidas sufridas por cada una de las unidades sociales. Este cuadro deberá ser adaptado con base al análisis del sub proyecto que se trate.

Cuadro N° 5. Impactos causados por el desplazamiento

Hogar N°	Pérdida vivienda o actividad económica	Pérdida de ingresos	Pérdida acceso a servicios educación	Pérdida acceso a servicios salud	Pérdida acceso a servicios públicos	Pérdida participación en redes sociales	Observaciones

iii. Análisis y selección de alternativas de solución

85. Las alternativas que se propongan a los afectados se ajustarán a la realidad concreta de cada afectación.
86. *Afectación de propietarios que habitan en el predio:* Como en los casos en que se deba realizar el

reasentamiento de la población sólo se verán afectadas unas pocas unidades sociales, se privilegiará la alternativa de reasentamiento individual en la cual es el propietario el que adquirirá un inmueble con el dinero recibido por el pago de la indemnización expropiatoria fijada judicialmente o el monto acordado con el afectado.

87. En los casos que la situación de los afectados haga evidente que por razones de aislamiento, bajo nivel educativo, y otras análogas, podrían ver frustrada la función compensatoria de la indemnización percibida al no estar en condiciones de aplicarla normalmente, el MGAP facilitará el acceso a la asistencia social y brindará el asesoramiento orientativo necesario según los casos para que el afectado pueda superar la dificultad descripta.
88. Restauración de Ingresos: El Plan de Reasentamiento Abreviado incluirá acciones dirigidas a las personas que obtienen su ingreso del inmueble afectado. Las acciones para la restauración de ingresos comprenden el reconocimiento de los gastos generados por la liquidación de contratos de trabajadores –cuando esos despidos son producto del desplazamiento- o el reconocimiento de la pérdida generada por el inmueble.
89. Afectación de personas que no cuentan con derechos legales reconocidos ni en expectativa: En relación con las acciones asistenciales previstas en este marco, el MGAP tenderá a promoverlas ante los entes competentes y, con este fin, procurará celebrar convenios de cooperación con las instituciones que en cada caso correspondan. En esos casos, algunas de las alternativas de reasentamiento serían, por ejemplo, las siguientes:
- En los casos en que los afectados manifiesten esa preferencia, otorgar asistencia para el traslado a la vivienda o predio del que ellos ya dispongan y considerar la necesidad de implementación de medidas adicionales tendientes al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas anteriores al reasentamiento.
 - Promover la inclusión de los afectados en un programa de vivienda (contando con el apoyo del organismo competente, con facultades para actuar en este campo favoreciendo la adecuada relocalización de los desplazados)
 - Como tercera opción, cuando las anteriores no sean viables, el MGAP, evaluará la celebración de convenios con organismos nacionales o locales competentes para la construcción de una vivienda para relocalizar a la familia desplazada.

iv. Diseño del Plan de Reasentamiento Abreviado

90. Una vez definidas, la modalidad a aplicar para el reasentamiento de la población y las acciones previstas para el tratamiento de los impactos sociales, económicos y culturales, se formulará el plan.

v. Aprobación del Plan de Reasentamiento Abreviado

91. El Plan de Reasentamiento Abreviado, o el Plan de Expropiaciones, luego de ser sometidos a consulta con la población afectada, a través de la modalidad más adecuada en cada caso, será presentado al Banco Mundial. El Banco revisará los primeros planes preparados a los efectos de verificar su satisfacción respecto de las políticas de salvaguardas. Luego de las primeras aprobaciones el Banco seguirá el seguimiento de la aplicación de los instrumentos previstos junto con las acciones de seguimiento y acompañamiento general del DACC-AF pudiendo requerir la revisión aleatoria en caso que lo considere necesario.

vi. Criterios de elegibilidad

92. Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del plan de reasentamiento y de las diferentes alternativas de solución que éste ofrezca serán los siguientes:
- Residir o desarrollar una actividad económica en los predios requeridos para la construcción de las obras o el desarrollo de actividades propuestas.
 - Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico.

93. La fecha de corte de los listados de beneficiarios del Plan de Reasentamiento Abreviado será la correspondiente a fecha de elaboración de documentación del proyecto que corresponda de acuerdo a la clasificación incluida en el Manual de Gestión Ambiental y Social del MGAP, en la que se consignará la existencia de afectaciones o de población a relocalizar. En la evaluación de la propuesta preliminar deberá establecerse si será necesario realizar afectación de activos o relocalizar población.

94. Para evitar modificaciones posteriores en las reuniones de información se acordará tener los listados disponibles para la revisión por parte de la población beneficiaria en los sitios de atención a la comunidad y se dará un tiempo de 15 días para realizar cualquier ajuste que se requiera por omisiones o errores del censo.

vii. Ejecución del Plan de Reasentamiento Abreviado

95. Durante esta etapa se implementarán las acciones y proyectos previstos en el Plan. El plan será coordinado desde el MGAP, o desde el organismo con el que se haya acordado realizarlo. El seguimiento de la implementación de las acciones y proyectos previstos estará a cargo del área designada en cada caso y, si correspondiera, - de las áreas técnicas de otros organismos involucrados en la implementación.

viii. Mecanismo de Registro y Resolución de los reclamos

96. Se establecerá un punto de recepción de quejas y reclamos en la cual se dejará registro de todos los cuestionamientos formulados por la población en relación a la ejecución del plan de reasentamiento abreviado.

97. El objetivo de esta disposición es que todos los reclamos en relación a las tasaciones de predios y bienes físicos y sobre la inclusión como beneficiarios en los programas del Plan sean atendidos y respondidos oportunamente.

98. Para ello el Proyecto DACC dispone de los siguientes medios de atención de reclamos:

Unidad de Gestión de Proyectos del MGAP:

- Teléfono para consultas: 23094507
- Correo electrónico: dacc@mgap.gub.uy

Personalmente en:

- Oficinas del MGAP ubicadas en todos los Departamentos del Uruguay. En las mismas se podrá contactar a los profesionales de las distintas unidades ejecutoras que intervienen en el Proyecto.
- Centros de Atención Ministerial: Tienen su sede dentro de las Oficinas del MGAP en distintas dependencias, teniendo como acercar los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos de todo el país.

Página Web del Ministerio: www.mgap.gub.uy

ix. Tratamiento de los reclamos y consultas

99. Las consultas, dudas o sugerencias realizadas en la UGP son derivadas o respondidas en forma personalizada, previa consulta al área técnica de referencia. A su vez, los centros de atención ministerial ubicados en las dependencias departamentales del MGAP ofrecen asesoramiento general y respuesta inmediata a las convocatorias (subproyectos) realizadas por el MGAP.

100. Las consultas o dudas de profesionales que se generan en el marco de las convocatorias a presentación de subproyectos, también pueden vehiculizarse por intermedio de la Plataforma Moodle de Educación a Distancia, (www.mgap.gub.uy/capacitacion) en los procesos de habilitaciones específicos.

101. Aquellos interesados en plantear reclamos podrán realizarlo a través de la página web del MGAP o en los Centros de Atención Ministerial ubicados en los departamentos del país. Dichos reclamos serán tramitados por expediente, y culminarán con una resolución, lo que permitirá a los interesados que la misma se recurra en vía Administrativa y luego de agotada la misma llegar a la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
102. Sin perjuicio de lo antes expuesto hay que tener en cuenta que el artículo 30 de la Constitución de la República consagra el derecho de petición que tiene cualquier habitante ante cualquier autoridad de la República. Asimismo, de acuerdo al artículo 3 de la ley 18.381 consagra el acceso a la información pública como un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Para poder hacer efectivo dicho derecho, en los artículos 13 y siguientes dispone el procedimiento administrativo para acceder a la información pública.

viii. Seguimiento y evaluación del Plan de reasentamiento Abreviado

103. Desde el momento en que se inicia la comunicación con los afectados hasta que se efectivice el reasentamiento y se verifique el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las unidades sociales relocalizadas, tendrán lugar actividades de seguimiento y monitoreo tendientes a verificar el efectivo cumplimiento de los objetivos del plan.

ix. Evaluación Ex Post

104. Seis meses después del traslado de las unidades sociales y actividades económicas se realizará la evaluación ex post de la eficacia y eficiencia de la ejecución del plan, la cual tendrá especial énfasis en el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población que fue objeto del plan.

Mecanismos participativos de monitoreo y evaluación

105. Desde el momento en que se inicia la comunicación con los afectados hasta que se implementen las medidas previstas en el plan y se verifique el restablecimiento de los niveles de vida de los afectados, tendrán lugar actividades de seguimiento y monitoreo tendientes a verificar el efectivo cumplimiento de los objetivos del plan.
106. Los mecanismos de monitoreo de la implementación del Plan de Acción sobre Restricción de Acceso, así como los de evaluación de su ejecución deberán ser establecidos conjuntamente con las personas afectadas en las instancias de participación generadas y deberán quedar asentados en el Plan de Acción de Restricción de Acceso.

Consulta del MPR

107. El presente Marco ha sido publicado en el Portal del Banco y en el sitio web del MGAP durante la semana del 18 de septiembre de 2017 por el término de 7 días, poniéndose a disposición la siguiente dirección de correo electrónico para el envío de dudas o comentarios: dacc@mgap.gub.uy. Finalizado el plazo de consulta establecido, se constató que no se recibieron comentarios, observaciones o preguntas.
108. Paralelamente el Marco fue compartido también con el Instituto Nacional de Colonización y la Comisión Nacional de Fomento Rural a quienes se les envió el documento para considerarlo por el plazo de una semana, a efectos de recibir sus comentarios. El Instituto Nacional de Colonización comunicó al

MGAP mediante Oficio N° 199/17⁴⁵ que su Directorio dispuso validar el MPR enviado. Esta ratificación fue incorporada como nota al pie del párrafo 54 del presente MPR. Por su parte, la Comisión Nacional de Fomento Rural señaló mediante nota enviada al MGAP de fecha 22 de septiembre de 2017 que analizó el MPR y lo considera un avance en tanto, partiendo del cumplimiento de la legislación vigente, incorpora mecanismos complementarios que sumarán una mejora en los procedimientos y en la capacidad de resarcimiento a las familias que pudieran llegar a verse afectadas⁴⁶.

109. Se buscó además recibir comentarios de UTE, quien, mediante Nota N° 84204 manifestó haber analizado el contenido del documento y no tener reparos de índole jurídica al respecto⁴⁷. Asimismo, esta ratificación también fue incorporada mediante nota al pie del párrafo 32 del presente MPR.
110. Finalmente, si bien se buscó también obtener comentarios de la Intergremial de Productores de Leche entre otras instituciones relevantes, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

⁴⁵ En Adenda 2 "Respuestas recibidas" se adjunta copia del Oficio N° 199/17, de fecha 22 de Septiembre de 2017 enviado por el Instituto Nacional de Colonización.

⁴⁶ En Adenda 2 "Respuestas recibidas" se adjunta copia de la Nota del 22 de Septiembre de 2017 enviada por la Comisión Nacional de Fomento Rural

⁴⁷ En Adenda 2 "Respuestas recibidas" se adjunta copia de la Nota N° 82204 de fecha 25 de septiembre de 2017 enviada por UTE

Lista de actividades previstas para el Componente 2.

a) Prácticas de manejo de los recursos naturales y la biodiversidad del campo natural tomando en cuenta la adaptación al cambio climático. Las medidas estarán en función de la sustentabilidad de las prácticas de manejo propuestas. Se entiende por prácticas sustentables a los procesos o formas de ejecutar ciertas actividades. A modo de ejemplo se presentan algunas acciones a financiar que tienen que ver con el manejo del campo natural a través del pastoreo:

- *Empotreroamiento (subdivisiones y aguadas) que redundará en cambios en el número y superficie de los potreros, o unidades de manejo del pastoreo, buscando implementar acciones orientadas al uso sustentable del recurso a través de regulaciones de la relación clima-suelo-planta-animal.*
- *Manejo del pastoreo que determinará la carga y oferta de forraje en los diferentes sistemas de pastoreo.*
- *Mejoramiento de la base forrajera de las explotaciones, fertilización de campo natural, mejoramientos en cobertura con especies de alto valor forrajero o implantación de cultivos forrajeros de larga duración (praderas). Según la historia del uso del suelo tendrán una función de complementación y optimización del aprovechamiento del aporte forrajero del campo natural.*

b) Financiación de medidas de adaptación al C.C. vinculadas al manejo del agua, uso eficiente y estratégico del recurso hídrico y otras prácticas posibles de desarrollar:

- *Reservas y distribución de agua (Ej. tajamares).*
- *Riego estratégico para forrajes y diversificación con cultivos intensivos.*

c) Inversiones orientadas a la mejora ambiental a través del manejo de efluentes, el manejo de suelos, la distribución de agua, la disponibilidad de sombra y la reparación de zonas riparias.

20

D) Financiación de medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (como ser construcción de humedales artificiales para el tratamiento de efluentes) y un menú de medidas a ser desarrollado.

e) Prácticas promovidas para levantar restricciones en el manejo y conservación de los recursos naturales por sistema productivo. A modo de ejemplo:

• **En Sistemas Lecheros:**

o Agua: cantidad y calidad (sistemas de distribución en los potreros, nuevas fuentes: pozos y tajamares)

o Manejo de efluentes: colecta y distribución a campo (fosa o laguna), planchada en el corral de espera, trampa de sólidos y desvío de pluviales, sistema de doble laguna, separación manual de sólidos.

o Manejo de suelos: adopción de prácticas que disminuyan la erosión, establecimiento de una rotación planificada a mediano plazo, inclusión de gramíneas perennes en las mezclas forrajeras.

o En cárcavas: alambrado perimetral, evitar acceso de animales, suavizar bordes, nivelación y relleno.

*Actividad comprometida dentro del Plan de Manejo de Plagas. **Planes de Uso y manejo responsable de suelos en Lechería.** Ver MPR Adenda 1, apartado 4.C para más información.*

• **En Sistemas Intensivos:**

o Manejo de suelos: uso de abonos verdes en la rotación de cultivos, uso de enmiendas orgánicas en forma

planificada, sistematización de los cuadros de cultivo (drenajes/desagües, rebaje de caminos), planificación de una rotación de cultivos a mediano plazo.

o Eficiencia en el uso de agua para riego: Sustitución de componentes del equipo en mal estado, enterrado de caños madre en cada cuadro, adopción de sistemas de riego económicos en el uso del agua (riego por goteo), nuevas fuentes de agua (perforaciones), monitoreo del status hídrico del suelo, estado fenológico del cultivo y plan de fertiriego, inclusión de válvula de retención en el sistema.

o Capacitación en el uso y manejo de agroquímicos: gestión de los agroquímicos en el predio (Depósito, Baño, Equipo de protección personal, zona para lavado de equipo, triple-lavado y recolección de envases).

o Sustitución del CH3Br, mediante solarización y biofumigación.

o Adopción de las Normas de Producción Integrada (reducción del número de aplicaciones por cultivo, uso de variedades adaptadas, monitoreo de enfermedades y plagas)

• **En Sistemas ganaderos, sobre campo natural:**

o Recuperación del campo natural mediante divisiones o subdivisiones de potreros, mejoramiento de campo en cobertura, pastoreo controlado, ajuste de carga.

o Calidad y cantidad de agua: distribución y nuevas fuentes (tajamares, pozos, bebederos, molinos, tanques australianos)

o Ausencia de sombra: instalación de montes (islas) ubicados estratégicamente en el establecimiento

o Degradación de suelos: ajuste de carga y aumento de la oferta de forraje.

o Enmalezamiento: control mecánico (rotativa, rieles) y pastoreo controlado, secuencia de pastoreo de vacunos y ovinos.

21

f) Prácticas de manejo relacionadas con el uso y conservación de la biodiversidad aplicables a diferentes sistemas productivos. A modo de ejemplo:

• Preservación del bosque nativo.

• Cortinas y sombra: incorporación con especies adaptadas a cada zona.

• Cursos de agua degradados: Restauración mediante la incorporación de especies que estuvieron presentes, aislamiento del ganado, instalación de bebederos.

• Ambientes invadidos por especies exóticas: control en campo natural o bosque nativo mediante manejos adecuados a cada especie y ambiente.

• Efluentes: incorporación de humedales artificiales en base a macrófitas nativas para el tratamiento de efluentes.

• Conservación y recuperación de campo natural mediante manejos para favorecer especies forrajeras nativas.

• Uso sostenible de especies arbóreas nativas con destino a abrigo y sombra.

• Pesca artesanal: apoyo a la incorporación de actividades relacionadas con la pesca deportiva y pesca sostenible y a la consolidación de cooperativas.

• Acuicultura: incorporación de especies ictícolas autóctonas en tajamares como diversificación productiva.

MPRA denda II

Respuestas recibidas



Instituto Nacional de Colonización

Oficio n.º 199/017
Ref. Exp. n.º 2017-70-1-01525.

Montevideo, 22 de setiembre de 2017.

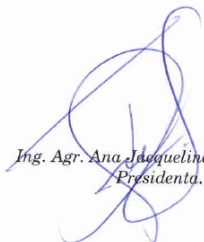
Señor Ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
Ing. Agr. Tabaré Aguerre.
Presente.

De nuestra mayor consideración:

Cúmplenos comunicar a Ud. que el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, por medio de la resolución n.º 3 del acta n.º 5375, de fecha 22/09/17 -que se adjunta-, dispuso validar el documento Marco de Política de Reasentamiento del Financiamiento Adicional del Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático del MGAP.

Sin otro particular, lo saludan muy atentamente.


Dra. María del Rosario Pérez Quintela
Secretaria de Directorio


Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez Terra.
Presidenta.



Dr. Salvador García Pintos 1138
TELÉFONOS: 2200 3519 / 2204 0133
FAX: 2208 9526
E-mail: cnfr@cnfr.org.uy
www.cnfr.org.uy
MONTEVIDEO / URUGUAY

Montevideo, 22 de setiembre de 2017.
S.C.: 160-09/17

Ing. Agr. Jorge Marzaroli
Gerente Ejecutivo de Unidad de
Gestión de Proyectos – MGAP
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, la Comisión Nacional de Fomento Rural se dirige a usted en respuesta a la consulta realizada referida al Documento Marco de Política de Reasentamiento del Financiamiento Adicional del Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático (DACC).

En tal sentido, el pasado martes 19 de setiembre, nuestra Mesa Ejecutiva de CNFR, integrada por productores/as de diferentes regiones y sistemas productivos del país, analizó el documento, considerando que es un avance a la situación de partida, dado que parte de la base del cumplimiento con la legislación vigente a lo que incorpora mecanismos complementarios que sumarian una mejora en los procedimientos y en la capacidad de resarcimiento a las familias que pudieran llegar a verse afectadas.

De todos modos, como gremial que representa a la producción familiar como modo de vida en el medio rural, se considera que en el caso de los productores familiares, los casos de realojamiento son particularmente complejos y de difícil resarcimiento, dado que hay aspectos vinculados al arraigo que difícilmente puedan ser compensados solamente por medio del apoyo económico. En este sentido, la participación directa de los involucrados y sus organizaciones en el territorio y en las diferentes instancias de los procesos de realojamiento que se puedan llegar a dar, es fundamental. Además, reafirmamos que hay que tener en cuenta que estos procesos deben estar enmarcados dentro de otras legislaciones como la Ley de Ordenamiento Territorial.

Sin otro particular, y quedando a las órdenes para seguir trabajando juntos, le saludan muy atentamente,

FERNANDO LÓPEZ
Secretario General

MARIO BUZZALINO
Presidente

GC/lb

199/017
1-01525.

de 2017.

orio del
5375, de
lítica de
le de los

?

zz Terra.

y



Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

Montevideo, 25 de setiembre de 2017.

Sr. Gerente Ejecutivo de la Unidad de Gestión de Proyectos
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
Ing. Agr. Jorge MARZAROLI.
S/D

Nota N° 84204

De mi mayor consideración:

En respuesta a vuestra solicitud, cursada a través de la Nota DACC n.° 59/17 de 18 de setiembre del corriente, me es grato comunicarle que la Gerencia de Área Asesoría Técnico Jurídica de esta Administración ha analizado el contenido del documento "Marco de Políticas de Reasentamientos", no meciendo reparos de indole jurídica.-

La normativa indicada en el referido documento, relacionada con el régimen de expropiaciones y servidumbres para la construcción de líneas de conducción de energía eléctrica, incluyendo la oportunidad y condiciones en las cuales corresponde el pago de indemnizaciones, es la actualmente vigente.

Ud. muy atentamente,
EX17006659

Sin otro particular, le saluda a


Dr. Jorge J. Fachola
Secretario General

NO84204-1/1



En Consulta